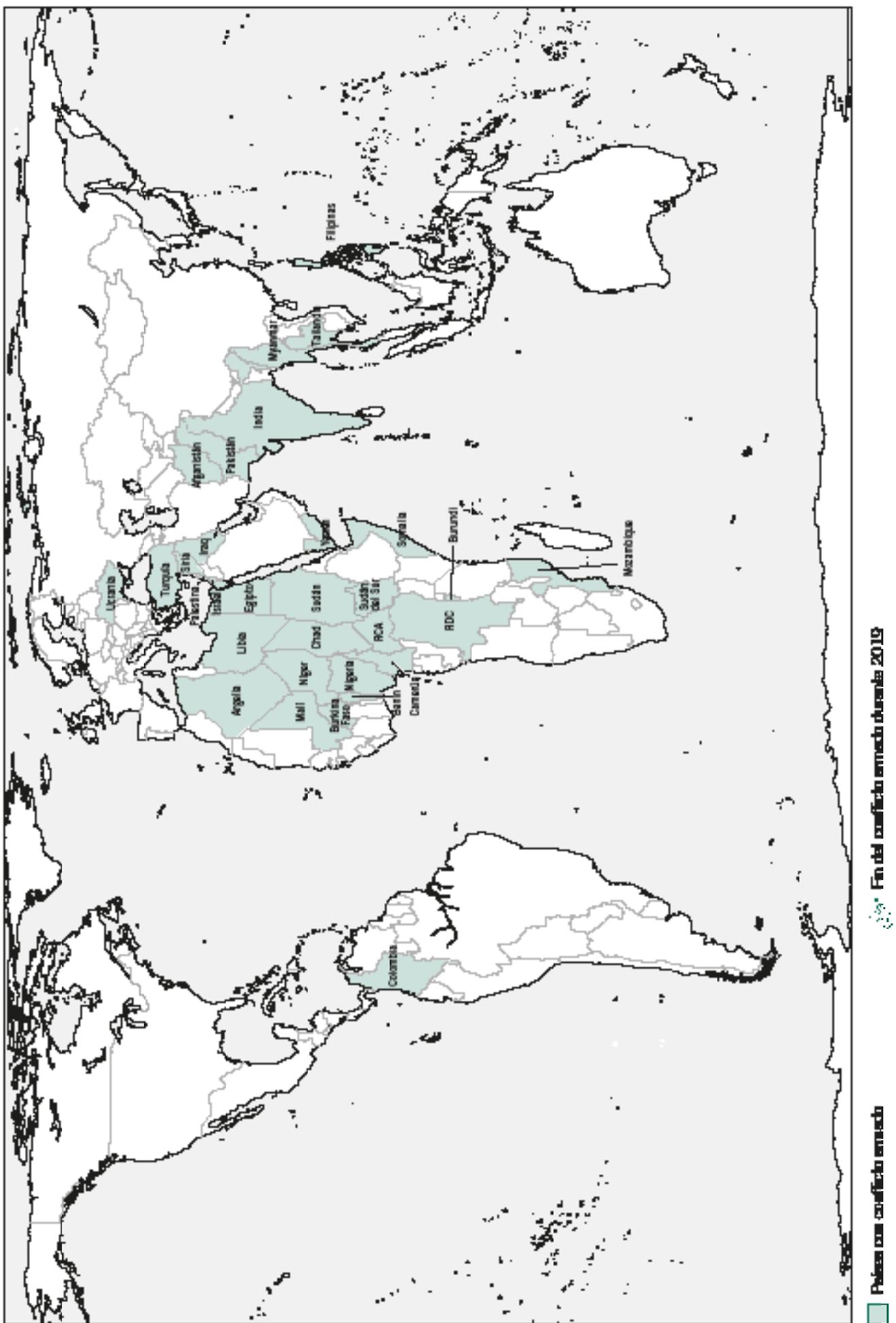


Mapa 1.1 Conflictos armados



1. Conflictos armados

- Durante 2019 se registraron 34 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).
- Se intensificó la represión por parte del Gobierno de Burundi y del ala juvenil del partido gubernamental CNDD-FDD, los Imbonerakure, previo a las elecciones de 2020.
- La reducción generalizada de la violencia y el inicio de la desmovilización de los grupos armados comportó el fin del conflicto armado en la región congoleña de Kasai.
- Se produjo una escalada de la violencia por parte de las ADF en el este de RDC como consecuencia de una operación militar de las Fuerzas Armadas congoleñas en el último trimestre.
- Diversos análisis destacaron que ISIS estaría buscando mayor protagonismo en el conflicto en la región del Lago Chad, que afecta principalmente el noreste de Nigeria así como las regiones colindantes de Chad, Camerún y Níger, ante el incremento de acciones del grupo.
- La violencia en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, se incrementó debido a la presencia de grupos armados autodenominados yihadistas.
- Sudán del Sur, con 2,21 millones de personas refugiadas, se situó como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán.
- La violencia en la región de Liptako-Gourma (Sahel Occidental) se ha multiplicado por cinco desde el año 2016, registrando en 2019 alrededor de 4.000 personas asesinadas.
- El conflicto armado en Libia se agravó en 2019, con enfrentamientos y ataques aéreos en diversas zonas del país alentados por continuas vulneraciones al embargo de armas.
- Con un balance de 42.000 personas muertas según ACLED, Afganistán se convirtió en el conflicto armado con mayor número de víctimas mortales en 2019.
- En consonancia con la tendencia de los últimos años, la violencia en el sur de Tailandia volvió a reducirse y se situó en sus niveles más bajos desde el inicio del conflicto en 2004.
- El Estado turco multiplicó su presión contra el PKK en Iraq y Siria, mientras dentro de Turquía continuó la represión contra los actores políticos kurdos.
- El conflicto armado en Iraq estuvo marcado por la persistencia de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad e ISIS y por la creciente proyección en el país de la disputa entre Irán y EEUU.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2019. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2019, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2019.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2019

Conflicto ² -inicio-	Tipología ³	Actores principales ⁴	Intensidad ⁵
			Evolución ⁶
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		Fin
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/ North West y South West) -2018-	Interno Internacionalizado	Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y decenas de milicias menores	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso)	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2019 con la del 2018, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2019 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
- En pasadas ediciones de *Alerta!* este caso era identificado como "Malí (norte)", pero se ha cambiado la denominación por la ampliación de las dinámicas de violencia a otras áreas del país.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Mozambique (Norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), mercenarios rusos (Grupo Wagner)	2
	Sistema, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Boko Haram-ISWAP, Boko Haram-Abubakar Shekau, milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		↑
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, EUFOR	2
	Gobierno, Recursos		↓
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		↑
RDC (Kasai) -2016-	Interno	Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)	1
	Gobierno, Identidad		Fin
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↓
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	1
	Sistema		↑
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)	3
	Sistema		↑
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference, JKLF	2
	Autogobierno, Identidad		↑
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		=
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)	1
	Autogobierno, Identidad		=
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	2
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Europa			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↓
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel	2
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		=
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah	1
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2019

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2019, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado a causa de situaciones de conflicto y violencia.

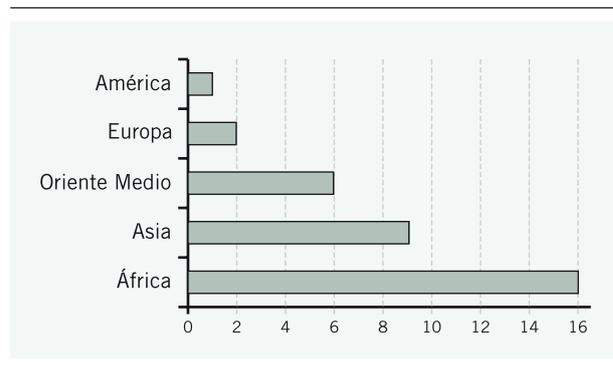
1.2.1 Tendencias globales y regionales

En 2019 se mantuvo la tendencia de años anteriores respecto al número de conflictos armados, **con 34 casos, el mismo número que en 2018 y uno más que en 2017 y 2016** (y similar a períodos previos: 35 en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 34 casos contabilizados en 2019, 32 permanecían activos al finalizar el año y otros dos dejaron de ser considerados conflictos armados. Es el caso de Argelia, donde se asistió a un descenso en los últimos años de las hostilidades entre grupos armados yihadistas –principalmente AQMI– y de la mortalidad asociada al conflicto, si bien AQMI incrementó su actividad armada en el conflicto armado del Sahel Occidental. El otro caso considerado finalizado en 2019 fue el que afectaba a la región de Kasai en RDC, conflicto entre las fuerzas de seguridad del Estado y diversas milicias, también enfrentadas entre ellas y contra la población civil. Las rendiciones a gran escala en 2019, principalmente del grupo Kamwina Nsapu, desembocaron en el fin del conflicto. En comparación con 2018 se registró un nuevo conflicto armado, considerado escenario de tensión en años anteriores. Se trató de Mozambique (norte), que afecta a la provincia de Cabo Delgado, donde la organización armada de carácter yihadista Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ) se enfrenta a las fuerzas de seguridad, en un contexto de marginación y agravios de la minoría musulmana en el país y de pobreza extrema en dicha provincia.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados a nivel mundial, la mayor parte de los casos se produjeron en África, que concentraba el 47% de los conflictos armados (16 casos) y Asia, con el 26% de las disputas bélicas (nueve casos), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente,

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2019



internos internacionalizados. Como en 2018, en el año 2019 el 12% de los conflictos armados (cuatro casos) tenía carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai) –que finalizó ese año–, Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El 6% era considerado internacional: el conflicto en la Región Sahel Occidental y la disputa entre Israel y Palestina. El resto, un 82%, eran conflictos internos internacionalizados, en los que alguna de las partes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. **En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.**

En relación al papel de terceros Estados, en 2019 entre otros casos sobresalió un año más Siria, donde Rusia y el régimen sirio intensificaron su ofensiva en Idlib, con graves impactos de desplazamiento forzado de población. Otro desarrollo destacado en Siria fue la retirada de las tropas estadounidenses del noreste del país, lo que a su vez abrió la puerta a que Turquía lanzase una ofensiva aérea y terrestre en el norte contra fuerzas kurdas, con graves impactos en la población civil. En el caso de Yemen (al-houthistas), el conflicto se vio influido por el incremento de las tensiones entre, por un lado, EEUU y Arabia Saudita, y, por otro, Irán. A su vez, el Gobierno de Hadi acusó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de dar apoyo a la campaña militar de actores secesionistas del sur de Yemen, en el marco de una escalada de tensiones en el bando anti al-houthista. En relación a Iraq, otro caso destacado de internacionalización, en 2019 el incremento de la tensión entre Washington y Teherán y una serie de hechos de violencia que afectaron tanto a intereses de EEUU como de Irán en territorio iraquí agravaron la situación. También Israel incrementó sus ofensivas armadas en Iraq, que fueron calificadas de declaración de guerra por parte del bloque parlamentario

proiraní de Iraq. En relación al conflicto en la Región Sahel Occidental, Francia anunció el despliegue de tropas terrestres en el marco de la operación Bourgou IV, liderada por la propia operación francesa Barkhane, y que también contará con tropas del Sahel G5 (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger).

Algunos de estos Estados y otros países intervenían militarmente a través de diversas vías, individualmente y como parte de coaliciones regionales e internacionales. Entre ellas, la Fuerza Conjunta Sahel G5, involucrada en el norte de Malí y en el conflicto que afecta a la región Sahel Occidental, en la zona conocida como Liptako-Gourma. En relación a esta última, el G5-Sahel solicitó a la ONU mayor cooperación bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, mientras también tenía previsto ampliar su despliegue militar. Otros casos de coaliciones incluían la Fuerza Militar Conjunta Regional MNJTF (Benín, Nigeria, Níger, Chad y Camerún), que combatía a Boko Haram en la Región Lago Chad; el conglomerado de fuerzas militares liderado por Arabia Saudita e integrado por una decena de países que combate en Yemen; y las coaliciones internacionales anti-Estado Islámico (ISIS) lideradas por EEUU involucradas militarmente en Iraq y Siria; así como la coalición liderada también por EEUU que combatía a la insurgencia talibán en Afganistán.

En relación a las misiones, continuó la implicación militar de misiones de la ONU, particularmente en conflictos en África, entre ellas, la MINUSMA en los conflictos en Malí y en la Región Sahel Occidental, la MINUSCA en RCA, la MONUSCO en el RDC (este), la AMISOM en Somalia, la UNAMID (misión híbrida de la ONU y UA) en Sudán y la UNMISS en Sudán del Sur. Cabe señalar que en relación a Malí, la MINUSMA sufrió en 2019 uno de los peores ataques padecidos por la misión, reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM). La AMISOM, que apoyó al Ejército somalí en ofensivas para recuperar territorio controlado por al-Shabaab, también fue objeto de numerosos ataques durante el año. A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir la AMISOM, siguiendo el plan de 2017 para que el Ejército somalí progresivamente asumiera sus responsabilidades, si bien la UA alertó de riesgos de deterioro de la situación en 2020 por la celebración de elecciones. En relación al conflicto en Darfur (Sudán), la ONU siguió adelante con su hoja de ruta para la reconfiguración y reducción de la misión en el país cuya finalización se debía completar en 2020, mientras ONG internacionales de derechos humanos cuestionaron ese plan por la continuación de la violencia en el país. Además, organizaciones regionales siguieron involucradas militarmente en diversos conflictos a través

De los 34 conflictos armados en 2019, 32 seguían activos a final de año, tras la reducción de la violencia entre grupos yihadistas y fuerzas de seguridad en Argelia y las rendiciones masivas de la insurgencia en la región congoleña de Kasai

El 73% de los conflictos armados tenía entre sus causas principales la búsqueda de un cambio de gobierno o de sistema

de misiones u operaciones, como la UA (AMISOM en Somalia), la UE (EUFOR RCA, EUNAVFOR en Somalia) y la OTAN (misión Rolute Support en Afganistán). Se suman también misiones híbridas, como Operation Ocean Shield, operación militar en aguas del Cuerno de África y Océano Índico, liderada por EEUU y en la que participan la UE, la OTAN y otros países como Japón, India y Rusia.

En relación a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría de conflictos tuvo entre sus motivaciones principales **la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo**. Uno u otro elemento estuvieron presentes en el 73% de los casos en 2019 (25 de los 34 casos), en línea con los años anteriores (71% en 2018, 73% en 2017). Entre estos 25 casos, en 19 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente por parte de organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado Estado Islámico y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Región Lago Chad, Región Sahel Occidental, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Turquía, Egipto, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia, Sahel y Libia) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia, entre otros.

En 2019 se acentuó en algunos casos la tendencia de proliferación de grupos armados que presentan agendas yihadistas, según su propia autodenominación. Así, el incremento de la violencia en el norte de Mozambique protagonizado por combatientes yihadistas, principalmente del grupo Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), y fuerzas de seguridad llevó a considerar esa situación como de conflicto armado. Además, en ese país por vez primera ISIS anunció su presencia, si bien analistas y fuerzas de seguridad negaron que hubiera evidencias sobre su presencia efectiva. Por otra parte, en Malí se produjo en 2019 la primera aparición formal del grupo Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), mientras el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes GSIM reivindicó uno de los ataques más graves sufridos por la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, la MINUSMA, en el que murieron diez efectivos y resultaron heridos otros 25. En la Región Lago Chad

algunos análisis apuntaron a que ISIS estaría haciendo un llamamiento global a sumarse a su filial ISWAP y, en octubre, ISIS reivindicó su primera acción letal en el noroeste de Nigeria. Asimismo, medios de comunicación señalaron que Afganistán era el país en el que durante 2018 y 2019 ISIS habría estado más activo, exceptuando Iraq y Siria. A su vez, en el conflicto Egipto (Sinaí), la filial de ISIS anunció planes de expansión de sus acciones hacia la zona sur de la provincia, incluyendo el área del Mar Rojo.

Asimismo, otro factor destacado entre las causas principales fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos), mismo porcentaje que en 2018. Entre estos, sobresalieron en 2019 casos como el del conflicto armado en el estado de Jammu y Cachemira en India. Ese estado fue escenario del atentado más grave en años contra las fuerzas de seguridad india y que causó la muerte de 45 efectivos, y se dio paso al despliegue de 40.000 fuerzas de seguridad adicionales y a la suspensión del estatuto especial de autonomía del estado y de su estatus de estado, dividiéndolo en dos y rebajando su rango administrativo. El conflicto en torno al estatus de las regiones de mayoría anglófono de Camerún también afrontó una grave escalada en 2019. En el caso de Filipinas (Mindanao), se estableció una nueva región autónoma en Mindanao –ratificada en plebiscito en 2019–, como parte del proceso de paz, mientras la región también hizo frente a dinámicas de violencia asociada a grupos yihadistas. Finalmente, las disputas en torno al control de recursos y del territorio fue una de las causas principales en un 32% de los conflictos (11 casos), si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

Respecto a la evolución de los conflictos en 2019, el 36% de los casos sufrieron un deterioro de la situación con respecto al año anterior (12 casos). El 66% de los casos con incremento de la violencia en 2019 eran

El 32% de los conflictos armados en 2019 fueron de intensidad elevada: Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)

conflictos del continente africano (ocho de las 12 crisis). Los casos en que en 2019 se incrementó la violencia fueron: Burundi, Camerún (Ambazonia/North West y South West), Libia, Malí, Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), Colombia, Afganistán, India (Jammu y Cachemira) y Turquía (sudeste). Otro 32% (11 casos) no afrontó cambios significativos. El 32% experimentó un descenso de las hostilidades y de los niveles de violencia (11 casos). De este último grupo, dos de los casos a final de año se consideraron finalizados: Argelia y en RDC (Kasai).

Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 32% alta (11 casos) y en otro 30% fue media (diez casos). Los casos de intensidad elevada se caracterizaron por niveles de letalidad superiores al millar de víctimas mortales anuales, así como por graves impactos en la población, incluyendo en términos de desplazamiento forzado a gran escala, y en el territorio. En 2019 se incrementaron los casos de intensidad elevada con respecto al año anterior (27% o nueve casos en 2018), a causa del incremento de la violencia en Camerún y en la Región Sahel Occidental. Los 11 casos de mayor gravedad en 2019 fueron: Camerún (Ambazonia / North West y South West), Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como la Región Sahel Occidental, donde la letalidad se quintuplicó con respecto a 2016, con más de 4.000 víctimas mortales en 2019 –según balances de la ONU–; en Somalia, con más de 4.000 muertes en ese año –según el centro de investigación ACLED–; y a mucha mayor escala, los casos de Afganistán, con 24.000 muertes en los primeros diez meses de 2019 –según Uppsala Conflict Data Program–; Yemen (al-houthistas), con balances que situaban la letalidad en 2019 en 23.000 víctimas –según ACLED–; y Siria, con balances dispares, incluyendo 11.200 víctimas mortales en 2019 según el Observatorio Sirio para los

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

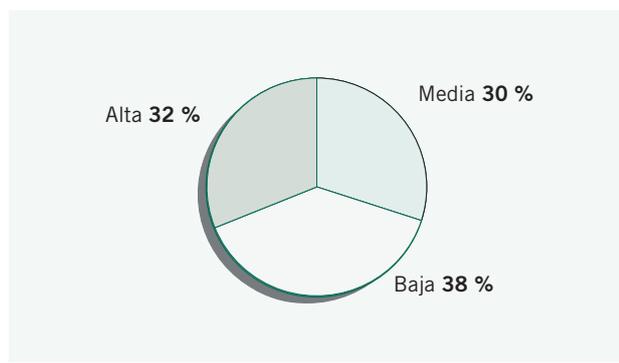
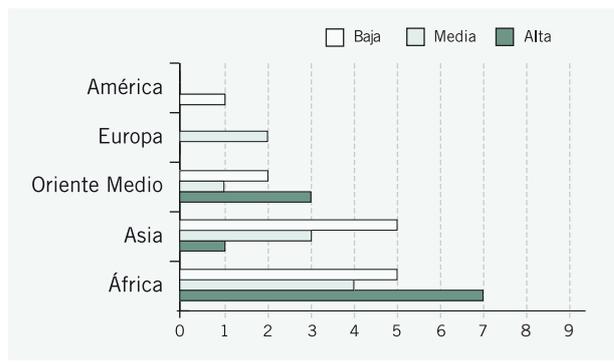


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente registró el mayor número de casos de conflictos armados en el mundo, con 16 de los 34 (equivalentes a un 47%). Son las mismas cifras que en 2018, si bien hubo cambios respecto a los contextos. Mientras en 2018 había finalizado el conflicto armado de Etiopía (Ogadén), en 2019 la situación de violencia en Mozambique (norte) pasó a ser considerada como conflicto armado. En Argelia y RDC (Kasai) la reducción de la violencia llevó a considerarlos como conflictos finalizados al acabar el año. • El 44% de los conflictos en África fueron de alta intensidad (siete de los 16 casos): Camerún (Ambazonia/North West y South West) –que subió de intensidad respecto a 2018–, Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, Somalia y Sudán del Sur. • La mitad de los conflictos armados en el continente africano sufrieron un deterioro en 2019 con respecto al 2018 (frente al empeoramiento de la situación de una cuarta parte en 2018 respecto a 2017). Asimismo, 38% de los conflictos (seis casos) asistieron a una reducción de las hostilidades, incluyendo dos conflictos considerados finalizados al acabar el año, y en un 12% (dos casos) no se produjeron cambios significativos. • Los conflictos armados africanos se caracterizaron por su alto nivel de internacionalización. El 88% de los casos fueron internos internacionalizados, con implicación de actores externos y/o extensión de las dinámicas bélicas a países vecinos. • Los conflictos armados en África tuvieron causas múltiples y simultáneas, entre las que destaca la aspiración a un cambio de gobierno o de sistema, presente en un 81% de los casos. En un 56% había demandas identitarias y/o de autogobierno y en un 50% había factores relativos al control de recursos.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un único conflicto armado, el de Colombia. América concentró, por tanto, un 3% de los casos de conflicto armado en 2019 a nivel mundial. • El único caso de conflicto armado en América (Colombia) afrontó un deterioro en 2019. Las conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN se cancelaron a principios de año después del atentado más mortífero en la capital en los últimos 15 años, reivindicado por este grupo armado. • Si bien el continente era escenario de un único conflicto armado, era el más afectado por la violencia vinculada a homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región ocupó el segundo lugar en número de conflictos armados después de África, con el 26% de los conflictos (nueve casos). • Más de la mitad de los conflictos armados en Asia fueron de baja intensidad (cinco de los nueve). Un tercio (tres casos) fueron de intensidad media, y un caso afrontó violencia de alta intensidad: Afganistán. El 44% de los casos se mantuvo sin cambios relevantes, un tercio registró una reducción de las hostilidades y un 22% afrontó un deterioro. Estos últimos fueron Afganistán e India (Jammu y Cachemira). • Un tercio de los conflictos en Asia eran de carácter interno, lo que representaba a su vez un 75% de los conflictos armados internos a nivel mundial. • En términos de causalidad, cinco casos tenían entre sus principales motivaciones cuestiones relativas a demandas identitarias y de autogobierno, el mismo número de casos con causas relacionadas con disputas en torno al control del gobierno e intentos de cambio de sistema político, económico o social.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente europeo albergó dos casos –Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, que representaron el 6% de los conflictos armados a nivel mundial, en línea con el año anterior. • Los conflictos en Europa presentaron una intensidad de violencia media, si bien el conflicto armado en Turquía afrontó un deterioro durante 2019, mientras que en Ucrania continuó reduciéndose la mortalidad vinculada al conflicto. • Europa continuó caracterizándose por conflictos armados con prevalencia de los factores identitarios y de autogobierno. Asimismo, los dos conflictos en Europa eran de carácter interno internacionalizado.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oriente Medio fue escenario en 2019 del 18% de los conflictos en el mundo, con seis de los 34 casos, como en 2018. Era la tercera región geográfica con más conflictos armados activos. • El 27% de los conflictos armados de alta intensidad en el mundo tenían lugar en Oriente Medio. Eran los casos de Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Aunque en los tres se redujo parcialmente la mortalidad con respecto a 2018, continuaron generando gravísimos impactos de letalidad, desplazamiento forzado y otras consecuencias en la población y el territorio. • El 83% de los conflictos (cinco casos) se mantuvo en niveles de violencia y hostilidades similares a las del año anterior, mientras en un contexto se asistió a una reducción. Fue el caso de Israel-Palestina, que en 2018 había asistido a los incidentes más graves desde 2014 y en 2019 la letalidad se redujo a algo más de la mitad que el año anterior. • En relación a las causas, un 83% tenían entre sus motivaciones principales las disputas en torno al control del Gobierno o los intentos de cambio de sistema –en este último caso, mayoritariamente por parte de actores yihadistas–, mientras en un 67% entre las causas sobresalían las disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno.

Derechos Humanos o 15.000 según ACLED. Todos ellos fueron escenario de importantes desplazamientos de población, tanto internos como internacionales.

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Como en años anteriores, los conflictos armados en 2019 tuvieron graves impactos en la población civil y en los territorios en que transcurrían. En el año en que se cumplía el vigésimo aniversario del primer debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, así como el 70º aniversario de los cuatro Convenios de

Ginebra, el informe del secretario general de la ONU sobre la protección de los civiles subrayó que la situación era trágicamente similar a la de hacía 20 años y que los civiles continuaban constituyendo la gran mayoría de las bajas en situaciones de conflicto, y que seguían afrontando impactos a corto y largo plazo a causa del desplazamiento forzado, el uso del hambre como estrategia de guerra, la denegación del acceso a la ayuda humanitaria, los ataques contra el personal médico y humanitario, los ataques y daños a instalaciones médicas y a otras infraestructuras civiles, el uso de la violencia sexual y de género, entre otros. Al mismo tiempo planteó la urgencia de avanzar en la protección de civiles en el contexto de conflictos contemporáneos, caracterizados por la proliferación y fragmentación de

grupos armados no estatales, en conflictos cada vez más asimétricos y escenarios crecientemente urbanos. El informe también señaló la necesidad de prestar mayor atención a la cuestión de los conflictos armados y el hambre; a los impactos específicos de los conflictos en las personas con diversidad funcional; así como al impacto ambiental de los conflictos.

El análisis sobre la evolución de la treintena de conflictos armados en 2019 recogido en *Alerta 2020* constata la continuación de las tendencias señaladas por el secretario general. Los conflictos armados en 2019 continuaron causando numerosas víctimas mortales y heridos en la población civil. Durante el año se produjeron numerosos ataques contra objetivos civiles o que tuvieron graves impactos sobre estos, incluyendo viviendas, lugares de culto, mercados, campamentos de población desplazada, personal y centros de atención médica, profesorado y colegios, áreas agrícolas, hoteles, entre otros. Este tipo de ataques se registró en lugares y conflictos como Camerún, Nigeria en el marco del conflicto de la región de Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Pakistán, Libia, Afganistán, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Ucrania, Iraq y Siria. Se perpetraron secuestros y civiles continuaron desaparecidos, como en el conflicto en la Región Lago Chad, con 22.000 personas que seguían desaparecidas en 2019, según CICR, la mayor cifra registrada por la organización a nivel global. Respecto a otros impactos o estrategias de guerra, continuó vulnerándose el DIH en numerosos contextos. Entre ellos, en Siria se denunció el uso de armas como el gas cloro. En relación a Libia, se denunciaron numerosas violaciones al embargo de armas y el creciente uso de arsenales aéreos y en 2019 se registró un 25% más de víctimas civiles que en 2018, según datos de la ONU. En Yemen se denunciaron hechos de violencia constitutivos de crímenes de guerra, incluyendo ataques aéreos indiscriminados, asedios y torturas.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. OCHA alertó de que en 2019 muchas más personas de lo previsto necesitaron asistencia humanitaria a causa de los conflictos y de fenómenos climáticos extremos. Según sus datos prospectivos a diciembre de 2019, **en 2020 casi 168 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección**, la cifra más elevada en décadas. Yemen continuó siendo en 2019 la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con 24 millones de sus ciudadanos en necesidad de asistencia, lo que suponía el 80% de su población, según señaló OCHA. En su informe de finales de 2019, OCHA también alertó de las crisis en Siria, RDC, Somalia y Sudán del Sur; así como de un incremento de la inseguridad alimentaria en Sudán a causa de la crisis

La ONU advirtió de la necesidad de avanzar en la protección de la población civil en un contexto de conflictos caracterizados por la fragmentación de grupos armados en escenarios crecientemente urbanos

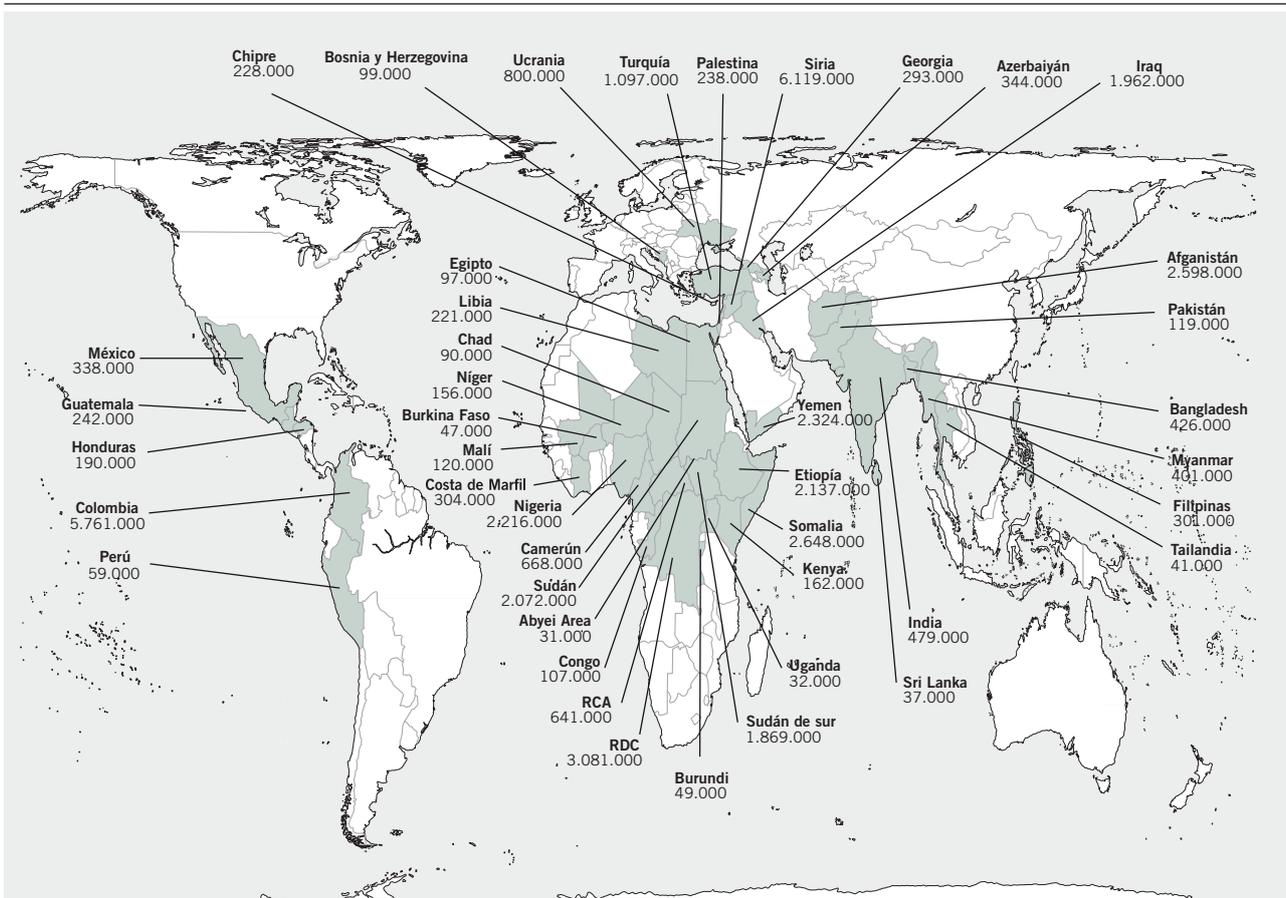
La OCHA alertó a finales de 2019 de que en 2020 casi 168 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección

económica; del aumento de desplazamiento forzado en la Región Sahel; y de la continuación de la crisis humanitaria en la región de Lago Chad. Además de las crisis africanas, OCHA advirtió sobre el incremento de necesidades humanitarias en Afganistán y otros países; el deterioro de la crisis en Venezuela; y la profundización de la crisis política y socioeconómica en Haití, con graves impactos para la seguridad alimentaria de su población. Por otra parte, según se recoge en *Alerta 2020*, 4,3 millones de personas estaban en situación de necesidad de ayuda humanitaria en 2019 en Camerún, lo que suponía un incremento del 30% con respecto a 2018. En RDC, 15,9 millones de personas se enfrentaban en 2019 a una grave inseguridad alimentaria, mientras en relación a la epidemia de ébola en el este del país, la OMS la declaró en julio como epidemia de salud pública global. En algunos casos disminuyó la población en necesidad de asistencia humanitaria, como Burundi, de 3,6 millones en 2018 a 1,8 en 2019.

Por otra parte, **los conflictos armados siguieron teniendo impactos específicos en grupos de población determinados, como los niños y niñas.** El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados, publicado en 2019 y que analiza el año 2018, identificó un incremento alarmante de violaciones graves de los derechos humanos de niños y niñas por parte de agentes estatales y fuerzas internacionales con respecto al año anterior, mientras las atribuidas a actores no estatales se mantuvo estable. Asimismo, verificó un umbral de muertes y mutilación de menores en 2018 sin precedentes desde que la ONU se dotó de un mecanismo de vigilancia y de elaboración de informes sobre menores y conflictos tras la Resolución 1612(2005). En Afganistán los casos verificados de niños y niñas fallecidos y mutilados en 2018 ascendieron a 3.062. El balance de fallecidos (927) fue señalado como el más elevado registrado nunca en el país. En Siria se verificaron en 2018 un total de 1.106 muertes de niños y niñas y 748 casos de mutilaciones de menores. En Yemen, el balance de muertes verificadas de menores ascendió a 576 y las de mutilaciones a 1.113 niños y niñas. El informe también verificó otras violaciones de derechos humanos a menores, como el reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas –Somalia fue el país con mayor número de casos, 2.300, seguido de Nigeria, con 1.947–; ataques contra escuelas y hospitales; violencia sexual contra menores; y secuestros –sobresaliendo también Somalia, con 2.493 casos verificados.

Asimismo, actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, mujeres y niñas de manera

Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas al finalizar 2018



Fuente: IDMC, *GRID 2019: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2019.

significativa. En 2019 la ONU confirmaba un año más que seguía siendo difícil determinar la prevalencia exacta de la violencia sexual relacionada con los conflictos, pero que los datos de 2018 mostraban que su uso continuaba siendo parte de las estrategias más generales en los conflictos, y que afectaba especialmente a las mujeres y las niñas. El informe de 2019 del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, que cubría el periodo de 2018, contenía información verificable relativa a 19 países, que implicaba a más de 50 actores. La mayor parte de los perpetradores de la violencia sexual en esos casos eran actores no estatales, pero también se verificó que habían perpetrado violencia sexual fuerzas armadas nacionales, policía u otros actores de seguridad de Myanmar, Siria, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. El informe identificaba varias claves relativas a la violencia sexual y la conflictividad. Entre ellas, los nexos entre violencia sexual, trata de personas y terrorismo; así como la interrelación entre violencia sexual vinculada a conflictos, asesinatos y explotación de recursos naturales como motor y resultado de desplazamiento forzado; y la prevalencia de la violencia sexual en contextos de violencia política y electoral. Por otra parte, hombres y niños también fueron víctimas de violencia sexual en países en conflicto como Burundi,

Actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil en contextos de conflicto

Siria, RDC, RCA y Sudán del Sur, principalmente en aldeas y centros de detención. Asimismo, según el informe sobre mujeres, paz y seguridad del secretario general de la ONU, presentado en octubre de 2019, una quinta parte de las mujeres refugiadas o desplazadas sufría violencia sexual. El análisis sobre las dinámicas de violencia en 2019 recogido en *Alerta 2020* puso de manifiesto la continuación de esta vulneración de derechos humanos. Entre otros casos, activistas somalíes denunciaron que la violencia sexual y de género continuaba siendo generalizada y silenciada en el país. En otros países, como Burundi, RDC o Yemen, también se denunciaron en 2019 casos de violencia sexual.

Los conflictos armados siguieron siendo causa de desplazamiento forzado de población. Según las cifras del informe anual de ACNUR publicado a mediados de 2019, a finales de 2018 había en el mundo 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente. De ese total, 41,3 millones eran personas desplazadas internas, 25,9 millones eran refugiadas (20,4 bajo mandato de la ONU y otras 5,5 bajo mandato de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA) y 3,5 millones eran solicitantes de asilo. Del total de población desplazada forzosa, 13,6 millones eran nuevos desplazados –10,8

nuevos desplazados internos y 2,8 nuevos refugiados y solicitantes de asilo. **El 57% de la población refugiada procedía de tres países, principalmente de Siria (6,7 millones), Afganistán (2,7) y Sudán del Sur (2,3). Les seguían Myanmar (1,1) y Somalia (900.000).** Además, aproximadamente la mitad de la población refugiada tenía menos de 18 años. Líbano fue un año más el país con mayor porcentaje de población refugiada respecto a la población total del país (uno de cada seis habitantes, igual que en 2017). En términos absolutos, los principales países de acogida eran Turquía (3,7 millones, frente a los 3,5 de 2017), Pakistán (1,4, como el año anterior), Uganda (1,2, con cierto descenso respecto a los 1,4 de 2017), Sudán (1,1, frente a los algo más de 900.000 del año anterior) y Alemania (1,1 millones, por encima de los 970.400 de 2017). Asimismo, la organización International Displacement Monitoring Centre (IDMC) señaló en su informe global, publicado en 2019, que **las 41,3 millones de personas desplazadas internas a finales de 2018 suponían un incremento de 1,4 millones respecto a 2017. El balance lo encabezaba Siria (6,1 millones), seguido de Colombia (5,8), RDC (3,1), Somalia (2,6), Afganistán (2,6), Yemen (2,3), Nigeria (2,2), Etiopía (2,1), Sudán (2,1) e Iraq (2).** Asimismo, según las cifras de mitad de 2019 del IDMC, entre enero y junio de 2019 hubo 3,8 millones de nuevos desplazados internos a causa de los conflictos y la violencia (cifra que se elevaba a 10,8 millones si se suman las causas de conflictos y de desastres). De los 3,8 millones en la primera mitad del año, la mayor cifra correspondía a Siria, con 804.000 nuevas personas desplazadas internas, seguida de RDC (718.000), Etiopía (522.000), Yemen (282.000) y Afganistán (213.000).

Según la ONU, una quinta parte de las mujeres refugiadas o desplazadas sufría violencia sexual

El análisis de la evolución de los conflictos en 2019 puso de manifiesto la continuación de las tendencias sobre el impacto de la conflictividad armada en términos de desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Entre ellos, en Camerún más de medio millón había huido de sus hogares a causa de la violencia, según cifras de la ONU. La ONG humanitaria Norwegian Refugee Council la calificó como la principal crisis olvidada de desplazamiento, después de RDC y RCA. Asimismo, al finalizar 2019, más de 200.000 estaban en situación de desplazamiento interno y más de 138.000 se habían refugiado en países vecinos. Además, en torno a 900.000 personas se habían desplazado forzosamente a causa del conflicto en la Región Sahel Occidental. En Somalia, entre enero y noviembre, la sequía y la conflictividad desplazó a más 300.000 personas, que se sumaban a los 2,6 millones de desplazados internos. En RDC, en 2019 la cifra acumulada de desplazamiento interno se elevaba a los 4,8 millones de personas. A su vez, Sudán del Sur constituía en 2019 la mayor crisis de personas refugiadas en África –con 2,21 millones de personas refugiadas en países vecinos, el 62% de los cuales niños y niñas– y la tercera en el mundo, por detrás de Siria

y Afganistán. En Libia se alertó de desplazamientos de entre 120.000 y 200.000 personas desde abril. En Afganistán, en 2019, casi 350.000 personas se desplazaron internamente por el conflicto, según señaló la ONU. En Myanmar, alrededor de 100.000 personas se desplazaron en el estado de Rakhine entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019. En 2019, Siria continuaba a la cabeza de los países con mayor población desplazada del mundo, tanto interna como fuera de sus fronteras. Al finalizar el año, la ofensiva de Rusia y el régimen sirio sobre el feudo opositor de Idlib había provocado el desplazamiento forzado de 200.000 personas en tan solo dos semanas.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (Norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), mercenarios rusos (Grupo Wagner)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incluyendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

Durante el año, la violencia en la provincia norteña de Cabo Delgado se acentuó debido a las acciones armadas de combatientes presuntamente yihadistas, vinculados con la organización Ahlu Sunnah Wa -Jama (ASWJ). Según los datos facilitados por ACLED, durante el 2019 (hasta el 6 de diciembre) se produjeron en la provincia de Cabo Delgado 689 muertes producidas por la violencia, superando con creces las 126 registradas durante el 2018 o las 119 en 2017, año del estallido de la insurgencia. Si bien desde el inicio de la rebelión no se habían registrado ataques dirigidos contra infraestructuras de gas natural o contra empresas extractivas vinculadas al sector, 2019 se inició con una emboscada a un convoy de la empresa de gas estadounidense Anadarko, y diferentes ataques que costaron la vida al menos a 11 personas, resultando heridas otra veintena. En el mes de junio, por primera vez desde que se inició la violencia en la región, el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) anunció públicamente su presencia en el área, aunque los analistas y las fuerzas de seguridad mozambiqueñas negaron evidencias de la presencia efectiva del grupo en la región. Tras el anuncio, durante el mes de julio se produjeron diferentes ataques dirigidos contra destacamentos militares en la región que fueron reivindicados bajo el nombre de ISIS. Felipe Nyusi, presidente de Mozambique, se reunió con su homólogo Vladimir Putin en Rusia, firmando ambos países acuerdos de energía y seguridad. Tras dichos acuerdos, diferentes informes señalaron la presencia en el país de unos 200 mercenarios rusos del Grupo Wagner, quienes se habrían unido a las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en el combate a la insurgencia en Cabo Delgado. Si bien Rusia negó la presencia de militares rusos en el terreno, ISIS se atribuyó la muerte de al menos 20 miembros de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM) así como de cinco mercenarios rusos en una emboscada realizada en la región de Namala, Cabo Delgado, en octubre. Posteriormente, ISIS volvió a atribuirse un nuevo ataque realizado en noviembre contra tropas mozambiqueñas y mercenarios rusos. El año concluyó con el mantenimiento de la violencia en la provincia de Cabo Delgado, registrándose en el último mes más de una docena de ataques contra la población civil y las fuerzas de seguridad mozambiqueñas que dejaron un balance estimado de unos 50 civiles y combatientes muertos. La violencia no sólo se concentró en el norte de Mozambique, sino que también se registraron episodios en el sur de Tanzania, como el que se produjo a mediados de noviembre en donde al menos seis personas fueron asesinadas y otras siete resultaron heridas en un ataque registrado en la aldea de Ngongo, presuntamente por miembros de ASWJ. A raíz de dicho episodio los Ministerios de Defensa mozambiqueño y tanzano iniciaron conversaciones para mejorar la seguridad en sus áreas fronterizas.

Se incrementó notablemente la violencia en el norte de Mozambique debido a la presencia de grupos armados autodenominados yihadistas

África Occidental

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y decenas de milicias menores
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de North West y South West) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

El conflicto armado que padecen las regiones de mayoría anglófona del país se agravó durante el año, y organizaciones como el think tank International Crisis Group (ICG) destacaron la muerte de al menos 1.850 personas desde el inicio del conflicto en octubre de 2017, aunque otras fuentes elevaron esa cifra a más de 3.000 personas. A su vez, la ONU señaló que al menos 530.000 personas habían

huido de sus lugares de origen como consecuencia de la violencia, y que al menos 4,3 millones de personas se encontraban en necesidad de ayuda humanitaria,

cifra que se había incrementado en un 30% respecto el 2018. Se produjo una escalada de secuestros en la región anglófona, focalizados en políticos locales opositores, activistas de movimientos separatistas, soldados, policías y población civil en general. El líder del partido opositor Social Democratic Front (SDF), Ni John Fru Ndi, fue secuestrado dos veces durante el año. En las elecciones presidenciales de octubre de 2018, boicoteadas por parte de la oposición y por el movimiento separatista, Paul Biya revalidó su mandato y en enero anunció su Gobierno, promocionando sectores considerados “duros”, y nombró como nuevo primer ministro al anglófono Dion Ngute. La organización Norwegian Refugee Council (NRC) denunció que la crisis de Camerún era la principal crisis de desplazamiento olvidada del momento, tras RDC y RCA. Human Rights Watch (HRW) señaló en un informe⁷ en marzo que entre octubre de 2018 y febrero de 2019, al menos 170 civiles habrían muerto en 220 incidentes en las dos regiones anglófonas como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos separatistas y el Gobierno, y otros 81 miembros de los cuerpos de seguridad habrían muerto en el transcurso de las operaciones. El informe detalló abusos cometidos por las Fuerzas Armadas camerunesas, que fueron desmentidas por el Gobierno. Además, destacó el aumento de las acciones violentas de las fuerzas de seguridad en torno a los centros de salud y contra el personal médico, generando ello una reducción drástica de la afluencia de civiles debido a la inseguridad. En este sentido, el Gobierno acusó a la insurgencia de ocupar los colegios para usos bélicos y la insurgencia acusó al Gobierno de haber incendiado más de 120 escuelas. En los dos últimos años la insurgencia ha atacado numerosos colegios, en algunos casos incluso secuestrando a estudiantes y profesorado. En julio HRW y AI condenaron los graves crímenes cometidos por ambas partes en el conflicto, como ejecuciones extrajudiciales y torturas contra políticos, miembros de partidos separatistas y civiles. Además, en julio centenares de presos (separatistas y opositores políticos) se amotinaron en la prisión central de Yaoundé (a los que se sumaron presos comunes alcanzando a más de 1.500 personas amotinadas) exigiendo mejoras de las condiciones carcelarias, poner fin a los juicios arbitrarios, a las torturas y al hacinamiento. Posteriormente también se produjo un motín de presos separatistas en la prisión de Buea, la capital de la provincia de South West. HRW confirmó el 20 de agosto la detención y tortura de más de 100 presos, tras el motín en la prisión de Yaoundé. Analistas han señalado que las prisiones se han convertido en “incubadoras políticas” por la detención de opositores del partido MRC y de combatientes de Boko Haram. Más de 350 activistas políticos del MRC se encuentran detenidos en las cárceles camerunesas, señaló el MRC en junio. Los motines han sido recurrentes en los últimos

El conflicto armado que padecen las regiones de mayoría anglófona de Camerún ha causado entre 1.850 y 3.000 víctimas mortales desde el inicio del conflicto de 2017

años. El 20 de agosto un tribunal militar sentenció a cadena perpetua a uno de los principales líderes del movimiento separatista en el país, Julius Sisiku Ayuk Tabe, junto a otras nueve personas, decisión que analistas consideraron que podía inflamar todavía más la rebelión. Hubo movilizaciones y huelgas en regiones de mayoría anglófona de rechazo a la sentencia. Considerado un moderado, Ayuk Tabe se autoproclamó primer presidente de Ambazonia el 1 de octubre de 2017, y fue detenido junto a otros 46 partidarios en enero de 2018 en la capital nigeriana, Abuja, y transferido a Camerún. Un tribunal nigeriano en marzo de 2019 consideró ilegal la extradición y ordenó al Gobierno federal nigeriano que exigiera el retorno de los deportados y su indemnización. Sin embargo, no se tuvo noticia de que Nigeria diera cumplimiento a la decisión judicial.

Conforme la situación se ha ido deteriorando en las regiones anglófonas, se ha producido una creciente presión de la comunidad internacional. EEUU y la UE solicitaron la

liberación del líder opositor Maurice Kamto (detenido en enero) y la de otros 150 partidarios del partido opositor MRC, e hicieron un llamamiento a las autoridades a incrementar los esfuerzos para poner fin a la violencia y promover la negociación en las regiones separatistas anglófonas. El Gobierno manifestó su indignación por la injerencia en sus asuntos internos. En paralelo, se registraron protestas progubernamentales durante la visita en marzo del secretario de Estado adjunto para asuntos africanos de EEUU, Tibor Nagy. La alta representante de la política exterior de la UE, Federica Mogherini, el 18 de abril hizo un llamamiento a las partes a iniciar conversaciones como la única vía para alcanzar una solución sostenible. El 13 de mayo se discutió por primera vez en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU explícitamente sobre el conflicto, aunque países como Guinea Ecuatorial (en nombre de los tres países africanos presentes en el Consejo), Rusia y China alertaron sobre la intromisión en los asuntos internos cameruneses y sobre la politización de la situación humanitaria. En este sentido, el presidente Paul Biya inició en la segunda parte del año una serie de concesiones de cara a apaciguar la presión interna e internacional. En septiembre anunció su intención de celebrar un diálogo nacional para poner fin al conflicto, que tuvo lugar entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre pero que fue boicoteado por los movimientos separatistas. Paul Biya anunció al término del diálogo nacional la liberación de 333 presos, entre los cuales, Maurice Kamto, nueve meses después de su encarcelamiento por boicotear y cuestionar las elecciones presidenciales de octubre de 2018, en las que Paul Biya revalidó su mandato. En diciembre el Parlamento camerunés aprobó algunas de las recomendaciones del diálogo nacional, relativas a cambios en el estatus político de las dos regiones de mayoría anglófona, consideradas insuficientes por numerosos sectores.

7. HRW, “Cameroon: New Attacks on Civilians By Troops, Separatists”, 28 de marzo de 2019.

Malí ⁸	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

La violencia se incrementó y extendió en gran parte del territorio maliense debido al mantenimiento de las acciones armadas perpetradas por grupos de corte yihadista en el norte del país, así como por el incremento de enfrentamientos entre milicias comunitarias de las comunidades fulani, dogon y bambara en la región central de Mopti y algunas partes de la región sur del país.

Según datos del centro de investigación ACLED, durante 2019 se registraron un total de 1.702 muertes producto de la violencia armada en el país. Asimismo, en materia de desplazamiento forzoso, según datos de la ACNUR, al finalizar el año 138.659 personas se encontraban refugiadas en países vecinos, mientras que otras 201.429 se hallaban en situación de desplazamiento interno. El año comenzó con diferentes ataques contra fuerzas de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, la MINUSMA, resultando muertos dos

efectivos de Sri Lanka en un ataque registrado en Mopti, así como otros diez soldados chadianos en un ataque a un campamento de la ONU en Aguelhok, en el norte de Malí, resultando heridos al menos otros 25. Este último ataque representa una de las peores agresiones padecida por la MINUSMA, y fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) – presuntamente vinculado con la red de al-Qaeda– en respuesta al reinicio de las relaciones diplomáticas de Chad con Israel. A su vez, en Mopti, región central del país, se registró otro ataque cometido por presuntos miembros de la comunidad dogon contra miembros de la comunidad fulani a los que acusan de apoyar a los grupos yihadistas, dejando un balance de 37 civiles asesinados. En febrero prosiguieron las acciones armadas reivindicadas por el GSIM contra diferentes objetivos militares, dejando un balance de cinco soldados franceses asesinados en una emboscada a una patrulla gala en Tombuctú, otros cinco soldados malienses fallecidos en otra emboscada registrada en Mopti, y otros cinco combatientes de las fuerzas rebeldes de Azawad (MSA y GATIA) muertos en Menaka. A su vez, a finales de febrero, una operación conjunta del Ejército maliense y la misión francesa Barkhane, causó la muerte de 15 presuntos miembros del grupo yihadista Katiba Macina cerca de Dialloubé. En el mes de marzo la violencia se incrementó sustancialmente después de un ataque a principios de mes contra miembros de la comunidad fulani en el centro del país que dejó un balance de al menos 100 personas asesinadas. Semanas después, como respuesta a dicho evento, el GSIM atacó una base del Ejército maliense en el centro del país, con un saldo de al menos 23 soldados muertos. El incremento de la inseguridad dio pie a importantes movilizaciones de protesta en el país que generaron la dimisión del primer ministro maliense, Soumeylou Boubeye Maiga, así como de todo el Ejecutivo nacional, forzando al Gobierno presidido por Ibrahim Boubacar Keïta a nombrar un nuevo Ejecutivo bajo el nuevo primer ministro Boubou Cissé, anteriormente ministro de Economía y Finanzas. Posteriormente, el 23 de marzo, una comunidad de pastores fulani en la región de Mopti volvió a sufrir un ataque por miembros del grupo dogon, dejando un balance de unas 160 personas asesinadas. Hasta ese momento, y desde el inicio del estallido de la violencia en el país en el año 2012, se habían registrado unas 600 personas fulanis asesinadas debido a las disputas intercomunitarias con las comunidades dogon, según datos de la MINUSMA. De ellos, al menos 488 muertes de miembros de las comunidades fulani se habrían producido desde enero de 2018, siendo 63 las muertes ocasionadas por miembros de dicha comunidad en el mismo periodo. El incremento de la inestabilidad y la violencia en la región central del país en los primeros meses de 2019 habría producido, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados, el desplazamiento forzado interno de 133.000 personas a finales de abril.

8. En pasadas ediciones de *Alerta!* este caso era identificado como “Malí (norte)”, pero se ha cambiado la denominación por la ampliación de las dinámicas de violencia a otras áreas del país.

La intensidad de la violencia en el país se mantuvo en el segundo trimestre del año, en donde sobresalieron algunos episodios. **El 11 abril se produjo la primera aparición formal en el país del grupo vinculado al Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)**, quien se atribuyó un ataque contra el Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA) en el noreste de Malí. El 16 de abril el presidente Keita anunció un incremento de tropas malienses, así como de la MINUSMA y de la operación Barkhane en el centro del país. Más tarde, y debido al incremento de la inestabilidad en la región central de Mopti, traducido en una nueva masacre el 10 junio en una aldea que dejó un balance de entre 35 y 95 personas asesinadas –muchos de ellos niños y niñas–, el Gobierno maliense anunció la destitución del gobernador de la región. Días después, el 17 de junio se volvió a registrar otra masacre contra pueblos dogon en la región, con un nuevo balance de 41 personas asesinadas. Asimismo, otras 23 personas perdieron la vida en diferentes ataques producidos en las comunidades de Bidi, Sankoro y Saran en el centro de Malí el 30 de junio. De forma paralela, el Gobierno puso en marcha un proceso de desarme de las milicias comunitarias de autodefensa, y activó un proceso de diálogo intercomunitario entre miembros de las comunidades dogon y fulani para poner fin a la escalada de violencia. Como resultado, el 1 de julio ambos grupos firmaron un acuerdo para poner fin a la violencia y trabajar por la paz. A su vez, la ONU anunció la renovación del mandato de la MINUSMA en el país, que ampliará su presencia en la región central.

Si bien la apertura de diferentes espacios e iniciativas de negociación de paz en el centro del país redujo la incidencia de los enfrentamientos intercomunitarios en el tercer trimestre del año, se siguieron registrando algunos de ellos. A su vez, también se mantuvieron las acciones armadas de los grupos de orientación yihadista en el país, así como en diferentes puntos de Burkina Faso y Níger. En dos ataques a bases militares de la fuerza militar conjunta Sahel G5 en Boulkessy y Mondoro en el centro de Malí, registrados entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre, un total de 40 soldados malienses fueron asesinados según datos del Gobierno, cifras que el grupo GSIM ascendía a al menos 85. Posteriormente el Ejército maliense anunció la muerte de medio centenar de combatientes yihadistas en diferentes ataques aéreos. En el mes de noviembre, durante diferentes ataques atribuidos al GSIM, alrededor de 100 soldados malienses perdieron la vida, así como unos 17 combatientes yihadistas. Nuevamente el incremento de la violencia generó importantes protestas ciudadanas en el país que denunciaron la incapacidad de las Fuerzas Armadas para contener la violencia, así como demandaron la retirada del país de las fuerzas extranjeras, en particular de la misión Barkhane y las fuerzas de la MINUSMA. El 4 de noviembre el presidente Keita anunció un cambio de estrategia de las

Malí padeció un incremento de la violencia debido al accionar de grupos de corte yihadista en el norte del país y a enfrentamientos intercomunitarios en la región central de Mopti

fuerzas de seguridad, asegurando que pasarían de una estrategia defensiva a una ofensiva. El año acabó con la continuación de los enfrentamientos intercomunitarios en la región de Mopti, así como con una intervención francesa en la zona el 21 de diciembre que dejó un saldo oficial de 40 muertos, presuntamente miembros del grupo yihadista Katiba Macina.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Boko Haram-ISWAP, Boko Haram-Abubakar Shekau, milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

El conflicto en el nordeste de Nigeria y en las zonas colindantes de la región del Lago Chad persistió con virulencia a pesar de las operaciones militares en marcha, e incluso algunas fuentes destacaron un **incremento de las acciones de Boko Haram (BH)**. La violencia durante 2019 continuó afectando principalmente a Nigeria y, en concreto, al estado de Borno, y en menor medida, los estados de Yobe y Adamawa, con incidentes que incluyeron ataques y atentados de las facciones de BH contra objetivos civiles, como mercados y campos de desplazados; ataques contra bases militares; y enfrentamientos que causaron víctimas mortales y desplazamiento forzado. Se habría producido un incremento de las acciones de las facciones de BH Islamic State West Africa Province (ISWAP, creada en 2016) y también, aunque en menor medida, por la facción de Abubakar Shekau, ambas aliadas a ISIS. **Diversos análisis a raíz de la propaganda de ISIS en marzo sugirieron que el grupo estaría buscando un mayor protagonismo**

y ampliación de sus actividades en Nigeria tras las pérdidas de Siria e Iraq, y estaría haciendo un llamamiento global a apoyar y sumarse a la Provincia de África Occidental.

Fuentes periodísticas señalaron que ISIS habría también reemplazado a su líder Abu Musab al-Barnawi sin dar detalles de la sucesión, derivados de una crisis en el seno de ISWAP en la que comandantes de ISWAP le habrían acusado de tener vínculos con sectores moderados de Malí, aunque era improbable que fuera ejecutado ya que al-Barnawi es el hijo del fundador de BH Muhammad Yusuf, venerado por todas las facciones de BH, incluida la de su antiguo lugarteniente, Abubakar Shekau. El ICG señaló un incremento de atentados cometidos mediante ataques suicidas y minas terrestres perpetrados por la facción de Shekau. Las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por la Fuerza Multinacional (MNJTF), incluyendo bombardeos aéreos de supuestas bases de BH, también causaron la muerte de centenares de combatientes. El balance de las acciones de BH, así como en el marco de enfrentamientos entre el grupo y las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en 2011 es de 36.222 víctimas mortales, según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST). El número de víctimas mortales en los estados de Borno, Yobe y Adamawa en 2019 aumentó a 2.607, frente a los 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017. CICR afirmó en septiembre que 22.000 personas, en su mayoría menores, se encuentran desaparecidas como consecuencia del conflicto, la mayor cifra que CICR tiene registrada a nivel global. En octubre ISIS reivindicó su primera acción letal en el noroeste de Nigeria, cuando sus militantes procedentes de Níger penetraron en el estado noroccidental de Sokoto y atacaron a miembros del Ejército, causando un número indeterminado de víctimas mortales y heridos.

Camerún siguió siendo el segundo entre los países más afectados por la crisis de la cuenca del Lago Chad, después de Nigeria: 1,9 millones de personas o una de cada dos de las personas que vivían en la región de Extreme Nord necesitaron asistencia humanitaria, lo que representa más de un tercio del total de casos del país en 2019. Según la ONU, la violencia ha desplazado a más de 270.850 personas desde el comienzo de la crisis. En esa región también había más de 108.600 refugiados nigerianos. En Chad, hubo un resurgimiento de los ataques armados y la inseguridad en la cuenca del lago Chad que llevó a miles de civiles a huir y buscar refugio. Se cree que, desde principios de 2019, más de 47.000 personas habían sido desplazadas en la región chadiana de Lac. Esa cifra incluye a refugiados que llegaron de Nigeria, repatriados de Níger y población chadiana que había sido desplazada y procuraba obtener seguridad y asistencia. En la provincia de Lac se cerraron temporalmente 49 escuelas en 2019 debido a la inseguridad, lo que afectó a más de 12.000

menores. Cabe también destacar el incremento de la gravedad de la situación humanitaria y de seguridad en la región nigerina de Diffa, según remarcó OCHA, donde el aumento de ataques a civiles puede poner de manifiesto un cambio de táctica por parte de los grupos armados, ya que su principal objetivo sería la población más vulnerable. En Níger, solo en marzo murieron 88 civiles como consecuencia de las acciones de Boko Haram, y más de 18.000 personas se vieron obligadas a huir.

Por otra parte, en el marco de iniciativas de construcción de paz para revertir la situación, en junio el gobernador del estado de Borno instó al Gobierno federal a complementar la campaña militar contra BH con estrategias no militares. El 20 de junio aseguró la liberación de civiles secuestrados por BH en enero; el Gobierno afirmó que la liberación estaba en línea con los esfuerzos para mantener vías de comunicación abiertas con la insurgencia. En este sentido, los gobernadores de los seis estados del noreste se reunieron el 5 de noviembre en Maiduguri por primera vez e instaron al Gobierno federal a implicarse en un proceso de diálogo con la insurgencia para facilitar su rendición.⁹ En la reunión también participaron miembros de la Asamblea Nacional, de los parlamentos estatales, altos cargos del Ejército y de otros cuerpos de seguridad. Además, también solicitaron al Gobierno un incremento de recursos para combatir la insurgencia, que la North East Development Commission asista a los gobernadores y los cuerpos de seguridad de los estados de la zona con más logística y apoyo, así como el dragado del canal del Lago Chad para permitir que los cuerpos de seguridad marítimos puedan actuar con agilidad, entre otras cuestiones.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), Macina Liberation Front (FML), Ansarul Islam, otros grupos yihadistas
Intensidad:	3
Evolución:	↑

9. Sahara Reporters, "Boko Haram: North-East Governors Urge Buhari Regime To Dialogue With Terrorists", 6 de noviembre de 2019, <http://saharareporters.com/2019/11/06/boko-haram-north-east-governors-urge-buhari-regime-dialogue-terrorists>

Síntesis:

La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoloadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011¹⁰. A todo esto se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

Durante el 2019 la violencia en la zona del Sahel Occidental se extendió debido a las acciones armadas de diferentes grupos que presentan agendas de corte yihadista, vinculados con las redes de al-Qaeda e ISIS, así como a diferentes milicias comunitarias, afectando especialmente las regiones fronterizas del este de Malí, el noreste de Burkina Faso y el oeste de Níger –conocida como la región de Liptako-Gourma. La escalada de la violencia e inestabilidad, principalmente generada a partir de las acciones de los grupos armados Frente de Liberación de Macina (FML), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Ansaroul Islam y Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), según denunció Mohamed Ibn Chambas, Representante Especial de la ONU y Jefe de la Oficina de la ONU para África Occidental y el Sahel (UNOWAS), tuvo durante el 2019 un aumento sin precedentes en la región, generando más de 4.000 muertes durante el año. Ello indica que la violencia se habría multiplicado por cinco desde el año 2016, cuando se registraron 770 muertes vinculadas al conflicto en la zona.¹¹ A su vez, la violencia ha incidido en el desplazamiento forzoso de personas, con alrededor de 900.000 hasta finales de año, de las cuales medio millón se registraron en

La violencia en la región de Liptako-Gourma, en la zona de Sahel Occidental, se multiplicó por cinco desde el año 2016, registrando en 2019 alrededor de 4.000 víctimas mortales

Burkina Faso solo en el año 2019 (quintuplicando los datos de enero del 2019). A principios de año la OCHA alertó además de que **1,2 millones de personas en Burkina Faso se encontraban en situación de necesidad de ayuda humanitaria**. El deterioro de la situación de seguridad en la región generó que en diciembre de 2018 el Gobierno burkinés decretase el estado de emergencia en varias provincias del norte del país, extendiéndose posteriormente durante todo el año 2019. Una situación similar se registró en Níger, cuyos 10 departamentos fronterizos con Malí y Burkina Faso se encontraban en estado de emergencia.

En lo que respecta a los episodios de violencia más significativos registrados durante el año, a principios de febrero el Ejército burkinés anunció la muerte de 146 yihadistas en el norte del país, aunque las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y el Movimiento Burkinabe por los Derechos del Hombre y del Pueblo (MBDHP) denunciaron que muchas de las muertes se corresponden a civiles de la zona. En mayo, el ISGS se atribuyó la muerte de 28 soldados nigerinos en una emboscada en la región occidental de Tillaberi, cerca de la frontera con Malí. A principios de julio, el ISWAP se atribuyó el ataque realizado contra un campamento del Ejército en Inates, en el cual 18 soldados nigerinos fueron asesinados. El 20 de agosto, en otro ataque a una base militar burkinesa en Koutougou, cerca de la frontera con Malí, **24 soldados resultaron muertos en lo que representó el asalto más mortífero registrado contra las Fuerzas Armadas de Burkina Faso**. En el mes de octubre se registraron en Burkina Faso múltiples episodios de violencia que dejaron un balance aproximado de al menos 151 personas asesinadas. El 6 de noviembre, un ataque producido en la provincia burkinesa de Gourma contra un convoy que escoltaba cinco autobuses de trabajadores locales de la empresa canadiense Semafo, dedicada a la extracción minera de oro, dejó un balance de 39 personas asesinadas. También, el 3 de noviembre, cuatro personas, entre ellas Oumarou Dicko, miembro del Parlamento de Burkina Faso, fueron asesinados en una emboscada en el área de Gaskinde, representando la **primera vez que un parlamentario ha sido asesinado en el**

conflicto. Durante el mes de noviembre, JNIM, grupo vinculado a Al Qaeda, anunció la captura de un cuartel militar en Kaya y otro en Kelbo, en territorio burkinés. Y en diciembre, militantes del ISGS atacaron un complejo militar en Ates, Níger, en donde al menos 128 personas perdieron la vida, entre ellos **71 soldados nigerinos, en lo que representa la pérdida más grande padecida por el Ejército de ese país en su historia**. A su vez, en otro ataque registrado en el norte de Burkina Faso vinculado con grupos yihadistas, al menos 42

10. Véase síntesis y resumen de Malí en este capítulo.

11. UN News, “‘Unprecedented terrorist violence’ in West Africa, Sahel region”. 8 de enero de 2020. Disponible en:

personas perdieron la vida, declarando el Gobierno tres días de luto nacional.

Como respuesta al incremento de la violencia, durante el año los gobiernos de los llamados **países del Sahel G5 (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger)** mantuvieron diversos encuentros con el fin de hacer frente a la situación de inseguridad. El 5 de febrero, en una reunión en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, el Sahel G5 solicitó una cooperación de seguridad más estrecha entre el Sahel G5 y la ONU bajo el amparo del Capítulo 7 de la Carta de la ONU. A su vez, los líderes regionales del África Occidental anunciaron al final de la Cumbre de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), celebrada en el mes de septiembre en Burkina Faso –la cual contó con la participación extraordinaria de Mauritania y Chad– un plan de mil millones de dólares para combatir la violencia yihadista en la región. El plan, previsto para financiarse entre 2020 y 2024, contempla medidas para reforzar las operaciones militares de las naciones involucradas y las de las operaciones militares conjuntas en la región; contener las fuentes de financiación de los grupos yihadistas; un programa de inversión de desarrollo en las regiones frágiles; entre otras. La CEDEAO solicitó el apoyo financiero de la comunidad internacional, a quien responsabilizó de la crisis en la región debido a su intervención militar en Libia, la cual, desde su punto de vista, acabó por desestabilizar toda la región del Sahel. El 4 de noviembre el Gobierno francés anunció el despliegue de tropas terrestres en el área de las “tres fronteras” bajo la denominada operación “Bourgou IV”, que estará liderada por la operación “Barkhane” y contará también con tropas del Sahel G5. A finales de 2019, el Gobierno galo tenía desplegados en la región 4.500 soldados, mientras que la ONU, a través de la MINUSMA contaba con 13.000 efectivos de mantenimiento de paz en Malí, y la alianza regional Sahel G5 tenía aprobación para desplegar unas cinco mil tropas provenientes de Burkina Faso, Malí, Chad, Mauritania y Níger. El Gobierno alemán también reaccionó anunciando la posibilidad de incrementar la presencia de sus tropas en la región, en la actualidad compuestas por 1.100 soldados desplegados como parte de la misión de la ONU y la UE en Malí. Sin embargo, la presencia de las diferentes coaliciones internacionales militares (así como la presencia de EEUU a través del AFRICOM) no había dado muchos resultados en relación a la reducción de la violencia, siendo cuestionada por las poblaciones locales. El año acabó con el anuncio de cambio de la reunión prevista entre el Ejecutivo francés presidido por Emmanuel Macron y los líderes del Sahel G5 para valorar la implicación francesa en el apoyo a la lucha antiterrorista en la región, inicialmente planificada para celebrarse en París el 16 de diciembre, reagendada para el 13 de enero de 2020.

Durante el año las Fuerzas Armadas de Burkina Faso y Níger sufrieron los ataques más mortíferos registrados contra sus instituciones castrenses en el conflicto, que se saldaron con 24 y 71 soldados fallecidos respectivamente

Cuerno de África

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenianas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Durante el año persistieron las acciones del grupo armado al-Shabaab, así como las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados, en especial con Jubaland y Galmudug, relativas a la autonomía de decisión de las regiones respecto al Gobierno Federal. Esta injerencia del Gobierno Federal en los asuntos internos de los estados federales en formación escaló hasta el punto de que en noviembre los cuerpos de seguridad federales tomaron el control de las localidades de Guriel y Mataban (Galmudug) de la milicia sufí Ahlu Sunna wal Jama'a (ASWJ), grupo que acusaba al Gobierno de intentar manipular las

elecciones presidenciales. El Gobierno Federal desplegó tropas adicionales en la capital estatal Dhusamareb y el 25 de noviembre presentó el calendario electoral presidencial para el 17-23 de diciembre.

Al-Shabaab siguió siendo el principal responsable de los ataques contra instalaciones y funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad y restaurantes y hoteles. ACLED destacó que la cifra global de víctimas mortales como consecuencia de la violencia política en Somalia se elevó a 4.038 en el conjunto de 2019. En marzo y abril se registró un importante aumento de los ataques en Mogadiscio, donde casi todos los días hubo incidentes con artefactos explosivos improvisados, así como ataques con mortero y asesinatos selectivos. Solo en marzo hubo 77 ataques con este tipo de artefactos en todo el país. Se trató del mayor número registrado en un mes desde 2016. En lo concerniente al creciente uso de estas bombas, según el informe del secretario general de la ONU sobre el país de noviembre, entre el 1 de mayo y el 12 de octubre, en el país se registraron 99 ataques de este tipo contra el Ejército Nacional Somalí, frente a 83 en el mismo período de 2018. Esos ataques dejaron un saldo de 66 muertos y 110 heridos. A su vez, en ese mismo período, la AMISOM fue blanco de 73 ataques, que causaron 21 muertos y 34 heridos. Los ataques con morteros aumentaron durante el año, lo que puso de manifiesto la mayor capacidad de al-Shabaab para atacar blancos estratégicos con precisión y exactitud. Por otra parte, las actividades de las escisiones de al-Shabaab vinculadas a ISIS disminuyeron y prácticamente no se registraron incidentes en todo el año, ya que ISIS sufrió muchos de los ataques aéreos perpetrados por EEUU. En mayo el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir AMISOM en 1.000 soldados, siguiendo el plan trazado en 2017 para que el Ejército somalí progresivamente asuma sus responsabilidades, pero la UA alertó de un previsible agravamiento de la situación en 2020 por la celebración de elecciones.

El aumento en 2019 del número de ataques aéreos de EEUU contra objetivos de al-Shabaab, en particular en las regiones de Lower Shabeelle y Lower Juba, provocó su dispersión, y el traslado de sus miembros de las zonas más remotas a los centros urbanos. Al afirmó que existían evidencias creíbles de al menos una veintena de víctimas mortales civiles como consecuencia de los ataques aéreos perpetrados por EEUU en los últimos dos años, y que el Pentágono no había llevado a cabo una investigación adecuada de estos casos. AFRICOM cuestionó la credibilidad de las evidencias. Las ofensivas de los cuerpos de seguridad en Lower Shabeelle permitieron recuperar ciudades que antes se encontraban en manos de al-Shabaab. Aunque al-Shabaab ha trasladado su presencia a

ACLED elevó a 4.038 las víctimas mortales en Somalia en 2019

Se produjo un incremento del uso de artefactos explosivos improvisados por parte de al-Shabaab que causaron decenas de víctimas mortales durante el año

otros lugares, ha seguido manteniendo una capacidad considerable para atacar las zonas recuperadas por el Gobierno. Si bien Mogadiscio siguió siendo el centro de acciones insurgentes, al-Shabaab siguió llevando a cabo operaciones en las regiones de Lower Shabeelle y Middle Shabeelle. Entre el 5 de mayo y el 3 de junio se produjeron un total de 228 incidentes durante el Ramadán; más que durante el Ramadán de 2017 y 2018. El Ramadán es un periodo en el que se ha constatado una escalada de la violencia recurrente en los últimos años, que se reduce en los meses posteriores de junio y julio, tal y como pasó en 2019. Un 35 % de los incidentes violentos se produjeron en la región de Banaadir, y el 34 % en el sur de Somalia, lo que pone de manifiesto la implantación geográfica de al-Shabaab.

Entre los hechos más destacados, cabe señalar que el 30 de septiembre, en Mogadiscio, una patrulla de la Misión de Formación para Somalia de la UE fue blanco de un ataque con un coche bomba, que causó un número no confirmado de víctimas civiles. El 4 de septiembre, en Middle Shabeelle, varios efectivos burundeses de la AMISOM perdieron la vida en enfrentamientos con al-Shabaab. Asimismo, en ataques lanzados por al-Shabaab los días 8 de septiembre y 14 de octubre, dos vicegobernadores murieron. El 14 de agosto, al-Shabaab lanzó un ataque terrestre a gran escala contra la base de operaciones de avanzada de Awdheegle, que se prolongó por varias horas y en el que utilizó morteros y dos coches bombas. Las fuerzas somalíes y de la AMISOM sufrieron numerosas bajas, pero mantuvieron su posición y rechazaron a los combatientes de al-Shabaab. En Mogadiscio, en mayo se produjeron dos atentados suicidas con coche bomba, el primero en el distrito de Warta Nabada, en el que cuatro personas murieron y diez resultaron heridas, y el segundo en el distrito de Boondheere, donde un militante utilizó un vehículo para atacar un puesto de control en una cárcel del Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad, en el que al menos 17 personas murieron en la explosión, mientras que otras 20 resultaron heridas. El 15 de junio se produjo otro incidente con un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo en un puesto de control cerca del Parlamento Federal, en el que nueve personas resultaron muertas y otras 20 heridas. En agosto el informe de la ONU sobre la situación en Somalia remarcó que el aumento de los ataques a gran escala dentro y fuera de Mogadiscio ponía de relieve la capacidad de resiliencia y la sólida capacidad operacional del grupo, a pesar de la intensificación de las medidas de seguridad en curso, incluidos los ataques aéreos contra el grupo y las operaciones conjuntas del Ejército Nacional y la AMISOM en Lower Shabeelle, que están concebidas específicamente para contrarrestar las amenazas a

Mogadiscio. En Lower Shabeelle, el Ejército Nacional continuó las operaciones ofensivas para capturar territorio, con el apoyo de efectivos de la AMISOM y otros actores internacionales. Tras la pérdida de las ciudades de Bariira y Sabiid, al-Shabaab hizo esfuerzos para recuperarlas, pero el Ejército Nacional permaneció en su posición y sigue controlando esas localidades estratégicas. El 12 de julio, al-Shabaab llevó a cabo un ataque contra el Hotel Medina en Kismaayo, que causó 33 víctimas mortales, entre ellas un candidato presidencial estatal y un contratista de la OIM, así como otras 56 personas heridas. Uno de los atentados más graves del año tuvo lugar el 30 de diciembre, cuando se produjo la explosión de una bomba en un puesto de control en Mogadiscio que causó la muerte de 81 personas.

Según la ONU, las consecuencias de la sequía de 2016 y 2017, agravadas por el prolongado conflicto armado y los obstáculos al acceso humanitario, acentuaron los problemas de protección, en particular para las mujeres, los niños y las niñas. Entre enero y noviembre de 2019, la sequía y los conflictos habían desplazado a más de 300.000 personas, que se suman a los 2,6 millones de desplazados internos que siguen sufriendo graves riesgos de desalojo, marginación y exclusión en todo el país. En agosto de 2019, la activista y constructora de paz Amina Arale, directora ejecutiva de la organización Somali Women Development Center (SWDC), fue invitada a proporcionar la perspectiva de la sociedad civil y recomendaciones en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir sobre la situación en Somalia. En relación a los impactos de género del conflicto en Somalia, Arale destacó que la violencia sexual y de género seguía siendo generalizada y silenciada y que existían minorías que ocultaban cómo afecta la violencia sexual y de género a sus comunidades para evitar la estigmatización y la exclusión social. En este sentido, celebró algunas medidas concretas adoptadas por el Gobierno para abordar la violencia sexual y de género, incluida la redacción de un proyecto de ley sobre delitos sexuales (Sexual Offences Bill), y los esfuerzos para que los responsables rindieran cuentas. El proceso de consulta en torno a la redacción del proyecto de ley, que incluyó aportaciones de la sociedad civil, fue un ejemplo positivo de inclusividad. Sin embargo, lamentó que Somalia todavía no había firmado, adoptado o implementado la CEDAW, y aunque se había comprometido, no había desarrollado hasta la fecha un Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325. Solicitó que se acelerara el establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, se inició en septiembre la elaboración del Plan de acción nacional para promover la aplicación efectiva de la resolución 1325.

Se intensificó el clima de hostigamiento y represión y el silenciamiento de la oposición política por parte del Gobierno de Burundi y de los Imbonerakure, previo a las elecciones de 2020

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Durante el año 2019 se intensificó el clima de represión hacia la oposición política y la sociedad civil por parte del Gobierno y del ala juvenil del partido gubernamental CNDD-FDD, los Imbonerakure, en vísperas de las elecciones de 2020. El estancamiento del diálogo interburundés y los preparativos para las elecciones generales siguieron afectando a la evolución política del país. A la vez, continuaron los enfrentamientos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los grupos armados RED-TABARA, FOREBU (actualmente Forces Populaires de Burundi, FPB) y las FNL, y entre los Imbonerakure y miembros del principal partido opositor, el Congrès National por la Liberté (CNL, antiguo partido FNL liderado por Agathon Rwaswa) en todo el país y en especial en las provincias occidentales de Cibitoke, Bubanza, Rumonge y Bujumbura Rural, fronterizas con la RDC. **La base de datos ACLED identificó 297 víctimas mortales como consecuencia de la violencia política en el país.** Otras provincias también se vieron afectadas por la violencia, la represión y el clima de

intimidación reinante, tolerada o incentivada por las autoridades locales y los cuerpos de seguridad. Fuentes diplomáticas, no obstante, señalaron en octubre que se había producido una ligera reducción de la violencia. La inseguridad fue constante en las fronteras de Burundi con Rwanda y con RDC. Las acciones más destacadas del año tuvieron lugar en enero, cuando las Fuerzas Armadas burundesas apoyadas por jóvenes Imbonerakure se enfrentaron a grupos insurgentes burundeses en el territorio de Uvira, en Kivu Sur (RDC) causando decenas de víctimas mortales; en abril, cuando las Fuerzas Armadas congoleñas anunciaron haber ejecutado a 36 miembros de las FNL y de fpb en Uvira; y a finales de octubre en Musigati, en la provincia de Bubanza, en la que murieron una decena miembros de los cuerpos de seguridad y otra decena de milicianos del grupo RED-TABARA. Las Fuerzas Armadas burundesas iniciaron su retirada de RDC en febrero. Las Fuerzas Armadas congoleñas se enfrentaron a grupos armados burundeses en diversos momentos del año en la provincia congoleña de Kivu Sur.

El clima de hostigamiento y represión y el silenciamiento de la oposición política y de la sociedad civil organizada fue constante, con continuos informes de torturas, decenas de arrestos arbitrarios, abusos y violaciones de los derechos humanos de diversas fuentes, como organizaciones de la sociedad civil en el exilio, entre las que destaca la Liga Iteka o el Observatorio de Lucha contra la Corrupción. En junio el Gobierno suspendió a PARCEM, una de las pocas organizaciones de defensa de los derechos humanos locales independientes que quedaban en el país, acusándola de dar una imagen distorsionada del país y de sus líderes. En esos mismos informes se señaló que la mayoría de las víctimas de violaciones de los derechos humanos fueron predominantemente miembros de partidos políticos o coaliciones de la oposición al partido gobernante, los miembros de la sociedad civil y los que se opusieron al tercer mandato del presidente y votaron en contra de la enmienda de la Constitución en el referéndum de junio de 2018. Los principales responsables fueron el Servicio Nacional de Inteligencia, la Policía, los funcionarios administrativos locales e Imbonerakure. En enero el Gobierno anunció que 84 de las 130 ONG internacionales que operaban en el país se habían registrado antes del 31 de diciembre cumpliendo las nuevas condiciones impuestas (como incluir la cuota étnica en su personal) pero que otras habían rechazado las nuevas condiciones y habían abandonado el país. En febrero el Gobierno cerró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en marzo retiró la licencia para operar desde el país a la BBC. En junio HRW¹² manifestó su preocupación ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el país, evidenciadas en un estudio realizado con organizaciones de derechos humanos exiliadas y con la Comisión de Investigación de la ONU, a la que el Gobierno también bloqueó el

acceso. Además, el Gobierno amenazó con romper las relaciones con el enviado especial de secretario general de la ONU. En agosto el CNL denunció que se habían incendiado o dañado más de diez oficinas del partido en los últimos meses y concluyó que esos actos formaban parte de la estrategia del partido gobernante para intimidar a la oposición. Los enfrentamientos tuvieron lugar durante gran parte del año, causando hasta finales de noviembre cerca de 300 víctimas mortales según ACLED. No obstante, se redujo el número de personas que necesitan asistencia humanitaria de 3,6 millones en 2018 a 1,8 millones en 2019. También cabe destacar que Francia reanudó la ayuda al país desde finales de 2018 en los sectores de defensa y educación con el objetivo de poder contribuir a crear una dinámica positiva de cara a las elecciones de 2020, decisión criticada por la UE por romper el consenso en torno a la política de sanciones europea.

Según destacó el informe anual del secretario general de la ONU sobre Burundi, entre enero de 2019 y septiembre de 2019, el Centro Humura, uno de los centros que prestan servicios a supervivientes de la violencia sexual y de género, informó de 875 casos nuevos. El informe destacó que se negaban a las mujeres los derechos a la sucesión y la herencia y siguen estando muy politizados, ya que las mujeres representan solo el 17% de los propietarios de tierras con títulos de propiedad.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, EUFOR
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos

12. HRW, "Burundi: Rampant Abuses Against Opposition", 12 de junio de 2019.

de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“anti balaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

Durante el año 2019 se produjo una reducción general de la violencia y los enfrentamientos entre grupos armados y las Fuerzas Armadas gubernamentales así como contra las tropas internacionales de la MINUSCA por la firma e inicio de la implementación del acuerdo de paz de febrero, aunque persistió durante todo el año un clima de inseguridad y de acciones esporádicas de violencia contra la población civil. La violencia entre grupos armados y entre grupos y milicias de autodefensa y contra la población civil continuó en numerosas partes del país. En este sentido, **el 6 de febrero el Gobierno liderado por Faustin Touadéra y los 14 grupos armados principales firmaron en Bangui el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana** tras haber llevado a cabo conversaciones de paz desde finales de enero en Jartum (Sudán) con la facilitación de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación en RCA de la UA y de Naciones Unidas. Diversas fuentes destacaron el papel decisivo de Rusia en conseguir el compromiso de diversos grupos ex-Séléka, así como la creciente influencia de Moscú sobre el país centroafricano, que se inscribe en la estrategia geopolítica y económica de Rusia de aumentar su presencia en el continente africano. El acuerdo incluye la integración de los grupos armados en el Gobierno y en los cuerpos de seguridad, avanzar en la descentralización y en la gestión responsable de los recursos naturales. Según el informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el país, las violaciones del acuerdo disminuyeron de 230 en abril a 104 en septiembre. Sin embargo, el informe destacó que los grupos armados siguieron realizando actividades contrarias al acuerdo de paz, como la violencia contra la población civil, el cobro de impuestos ilegales y la obstrucción de la autoridad del Estado, así como el uso de la violencia para obtener concesiones en el proceso de paz. A pesar de los anuncios de ceses definitivos de las hostilidades, los grupos siguieron acosando a la población civil, estableciendo controles de carreteras y

Se produjo una reducción general de los enfrentamientos entre grupos armados y las Fuerzas Armadas gubernamentales así como de los ataques contra las tropas internacionales de la MINUSCA por la firma e inicio de la implementación del acuerdo de paz en febrero

la milicia Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R) reforzó su posición alrededor de algunas explotaciones mineras. El 12 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU levantó parcialmente el embargo de armas sobre el país.

Después de disminuir en junio y julio, la violencia se reanudó en agosto y septiembre, incluso en zonas que antes no se habían visto afectadas por el conflicto. Según ACLED, el balance de víctimas mortales a finales de 2019 era de 594, cifra sensiblemente inferior a las 1.187 de 2018 y a las 2.011 de 2017. La milicia 3R y el Frente Popular para el Renacimiento de la RCA (FPRC) fueron responsables de la mayoría de las violaciones denunciadas contra civiles, seguido de los grupos anti balaka signatarios y no signatarios. Las acciones armadas más graves del año tuvieron lugar en mayo, cuando combatientes de 3R causaron la muerte de 42 personas, en su mayoría civiles, en varias aldeas cerca de Paoua (prefectura de Ouham Pendé, noroeste). El Gobierno y la comunidad internacional condenaron los ataques y exigieron que el dirigente de 3R Sidiki entregara a los autores, y tras la presión local e internacional, el 3R confirmó la participación en el mencionado ataque de sus combatientes, de los cuales tres fueron entregados al Gobierno el 23 de mayo para iniciar actuaciones judiciales. El grupo 3R condenó públicamente el atentado y reiteró su compromiso con la paz y la reconciliación. Posteriormente, los enfrentamientos más importantes desde junio tuvieron lugar en la prefectura de Vakaga (extremo norte) entre el Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia (MLCJ) y el FPRC. El 14 de julio, ambos grupos se enfrentaron en Am-Dafock y murieron nueve combatientes. El 31 de agosto, el FPRC mató al hijo del sultán de Birao, lo que provocó dos días de enfrentamientos. Como consecuencia, un civil y 24 combatientes resultaron muertos. Posteriormente, el FPRC atacó las posiciones del MLCJ el 14 de septiembre y murieron 39 combatientes, lo que provocó el desplazamiento hasta principios de octubre de 24.000 civiles. Estos enfrentamientos se reprodujeron en diciembre en Am-Dafock.

La situación humanitaria mejoró durante el año, en particular se registró un aumento de los retornos y un mayor acceso. El número de personas que necesitaron asistencia humanitaria disminuyó de 2,9 millones a 2,6 millones. Una quinta parte de la población sigue desplazada, con 581.000 desplazados internos y más de 605.000 refugiados registrados al 31 de agosto, aunque se produjeron movimientos de retorno de alrededor de 355.000 personas desplazadas y más de 90.000 personas refugiadas retornaron de forma espontánea. Los grupos anti balaka, FPRC y MPRC atacaron a organizaciones humanitarias en diversas ocasiones durante el año. La violencia sexual relacionada con el conflicto continuó, y la mayoría de los incidentes de

violación de niñas y mujeres fueron presuntamente perpetrados por miembros de los grupos armados signatarios del acuerdo de paz, aunque también estuvieron implicados las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. Según el informe del secretario general de la ONU de junio, la mayoría de las violaciones se atribuían a grupos ex-Séléka en las prefecturas de Ouham-Pendé y Nana-Gribizi (noroeste y centro-norte del país). Se recibieron denuncias de violaciones generalizadas en la subprefectura de Kaga Bandoro (Nana Gribizi) y en los corredores de trashumancia, zonas de difícil acceso.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad derivada del proceso electoral,¹³ aunque mejoró con el transcurso del año, por la evolución de la epidemia de ébola y por la presencia de numerosos grupos armados en el este del país. Estos grupos continuaron llevando a cabo acciones armadas

entre ellos por el control del territorio, las vías de comunicación y el acceso a los recursos naturales, viéndose implicados en enfrentamientos con las FARDC, y cometiendo abusos contra la población civil, entre los que destacan actos de extorsión, reclutamiento forzado, violencia sexual y otras múltiples vulneraciones de los derechos humanos. Aunque se redujeron las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA en Haut Uélé y Bas Uélé (noreste del país),¹⁴ la situación en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur (este) siguió marcada por la presencia y actividades de las diferentes milicias Mai Mai, las FDLR y sus escisiones (CNRD), por la extensión del conflicto armado de Burundi al interior de la RDC debido a la presencia de actores armados burundeses y por el conflicto armado derivado de las actividades del grupo de origen ugandés ADF que opera especialmente en la zona norte de la provincia de Kivu Norte.¹⁵ Cabe destacar la reducción significativa de la violencia en la región de Kasai¹⁶ y, por el contrario, el brote de violencia intercomunitario que tuvo lugar al calor de las elecciones presidenciales en diciembre de 2018 en Yumbi (Mai-Ndombe) que causó alrededor de 900 víctimas mortales. Las víctimas mortales como consecuencia de las diferentes acciones violentas derivadas del conflicto en el este del país (exceptuando las víctimas derivadas del conflicto con el ADF) ascendieron a más de 2.600 víctimas entre enero y finales de noviembre, según ACLED. En lo concerniente a la epidemia de ébola en el este, la OMS la declaró epidemia de salud pública global en julio. La organización señaló en noviembre que la enfermedad estaba empezando a remitir por la menor aparición de nuevos casos. Hasta la fecha, se habían reportado un total de 3.298 casos, de los cuales 2.197 habrían muerto (67%). Del total de casos, el 56% (1.859) eran mujeres, el 28% (931) eran menores de 18 años, y el 5% (163) era personal sanitario. Tal y como señaló el informe del secretario general de la ONU en noviembre de 2019, se estima que 15,9 millones de personas se enfrentan a una grave y aguda inseguridad alimentaria, especialmente en las provincias orientales. La situación es más crítica en Ituri, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Kivu Sur y Tanganica, donde entre el 12% y el 15 % de la población se encuentra en la más elevada fase de emergencia. Además de una cifra de personas desplazadas internas estimada de 4,8 millones de personas, a 31 de marzo la RDC acogía a unas 540.000 personas refugiadas (de Burundi, RCA, Rwanda y Sudán del Sur). El país también se enfrenta al peor brote de sarampión de su historia, que afecta a las 26 provincias. Hasta noviembre ha habido 209.211 casos, incluidas 4.189 muertes. Desde principios de 2019, se han registrado más de 22.931 casos de cólera y 407 muertes. La situación es particularmente preocupante en Kivu Sur, Alto Lomami, Kivu Norte y Tanganica.

13. Véase la síntesis y el resumen de RDC en el capítulo de Tensiones.

14. Véase el capítulo de Tensiones.

15. Véase la síntesis y el resumen de RDC (este-ADF) en este capítulo.

16. Véase la síntesis y el resumen de RDC (Kasai) en este capítulo.

En primer lugar, en lo concerniente al grupo armado hutu rwandés FDLR, su capacidad siguió disminuyendo, tras la repatriación de la mayor parte de sus excombatientes de los campamentos en el este de la RDC en 2018, a la que se sumó la realización de operaciones conjuntas sostenidas de las FARDC y la MONUSCO contra el grupo. La muerte del histórico líder de las FDLR, Ignace Murwanashyaka, en Alemania el 16 de abril, no tuvo efectos en la estructura operacional y la moral del grupo, según la ONU. Las FDLR permanecieron activas y siguieron constituyendo una amenaza en los Kivus por medio de redes locales y regionales. El número de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto presuntamente cometidos por combatientes de las FDLR aumentó en el territorio de Nyiragongo, donde la mayoría de las víctimas fueron atacadas mientras se dirigían a recoger leña y carbón en el Parque Nacional de Virunga. Siguieron registrándose casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en el territorio de Rutshuru, en el contexto de los enfrentamientos entre las FDLR y el grupo Nyatura. En el territorio de Rutshuru (Kivu Norte), las FDLR continuaron cometiendo violaciones y abusos contra la población civil. El 10 de noviembre, las FARDC anunciaron que Musabimana Juvenal, líder del grupo rwandés RUD-Urunana, escindido de las FDLR, había sido asesinado en una operación. El 18 de septiembre, el líder militar de las FDLR, Sylvestre Mudacumura, que era buscado por la CPI, fue asesinado en la provincia de Kivu Norte. En paralelo, la coalición P5, un grupo armado compuesto por organizaciones políticas rwandesas de la oposición, quedó debilitada tras la detención, el 30 de abril, y la extradición desde las Comoras de Callixte “Sankara” Nsabimana, el líder del Frente de Liberación Nacional (FLN), el brazo militar del grupo político Movimiento Rwandés por el Cambio Democrático (RMDC, por sus siglas en inglés), fundado por Paul Rusesabagina.¹⁷ El 23 de mayo, Callixte Nsabimana fue acusado de 16 delitos, entre ellos terrorismo, secuestro, asesinato y negación de genocidio. Nsabimana se declaró culpable de todos los cargos. El FLN es también un actor aliado de las FDLR.

Por otra parte, cabe destacar la evolución de la situación relativa al grupo armado rwandés CNRD-Ubwiyunge, escisión de las FDLR. Dicho grupo, operativo en ambos Kivus, fue objeto de diversos ataques por grupos armados (NDC-R, milicias Mai Mai, Nyatura) desde diciembre de 2018 que le forzaron a abandonar su cuartel general en Faringa, territorio de Rutshuru (Kivu Norte) y desplazarse hacia Kivu Sur, en medio de enfrentamientos que causaron la muerte de 18 civiles y de 15 combatientes, según diversas

En lo concerniente a la epidemia de ébola en el este de RDC, que ya ha causado la muerte de 2.197 personas, la OMS la declaró epidemia de salud pública global en julio

Una de las facciones de las FDLR rwandesas, el CNRD-Ubwiyunge, se vio forzado a huir debido al acoso de diversos grupos armados, milicias y las Fuerzas Armadas congoleñas

fuentes. Al menos 4.000 personas vinculadas al grupo armado CNRD se movilizaron, entre las cuales unos 400 combatientes, y abandonaron también el territorio de Masisi para dirigirse a Kivu Sur y reagruparse con el resto del grupo armado. Durante el trayecto se enfrentaron a las FARDC y a otros grupos armados lo que provocó la muerte de un número indeterminado de personas. El Grupo de Expertos de la ONU para la RDC señaló que el grupo se habría instalado en el territorio de Kalehe (Kivu Sur), y que su líder, Wilson Irategeka, habría huido a Kivu Sur. También hubo informaciones sobre reuniones entre las FDLR y el CNRD. En paralelo, y a raíz también de las operaciones contra el CNRD y su expulsión de Kivu Norte, el grupo armado NDC-R, presente en el territorio de Masisi y los alrededores (Kivu Norte), amplió durante el año su zona de control, lo que dio lugar a un clima de impunidad como consecuencia de los abusos y violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual. Los frecuentes enfrentamientos entre la NDC-R y la APCLS, el grupo armado rwandés FDLR y los grupos armados Nyatura, aumentaron aún más la inseguridad y provocaron la muerte de decenas de civiles y combatientes (más de 150 en el primer trimestre del año), violaciones de mujeres y el desplazamiento de civiles. Las FARDC en octubre iniciaron operaciones militares en el territorio de Masisi para intentar controlar la situación. Diversos informes señalaron una posible connivencia de las FARDC con el grupo NDC-R.

En la provincia de Kivu Sur, en los territorios de Fizi y Uvira, la incursión de grupos de milicianos de Burundi y las operaciones de las Fuerzas Armadas burundesas (no reconocidas ni permitidas oficialmente), de las juventudes Imbonerakure y de las FARDC contra esos grupos y sus aliados locales dieron lugar a enfrentamientos con víctimas mortales, saqueos, violencia sexual y desplazamiento de la población.

En estas mismas zonas, la violencia por motivos étnicos contra los civiles en los altiplanos y mesetas de los territorios de Fizi y Uvira siguió siendo motivo de gran preocupación, en particular en la zona de Minembwe (Uvira). Entre marzo y noviembre, grupos ngumino, twigwaneho y mai-mai ejecutaron alrededor de 50 civiles y destruyeron 89 aldeas. La ONU destacó que lo preocupante es que esos ataques contra civiles tuvieron como origen la presunta afiliación comunitaria de las víctimas, de las cuales han sido particularmente afectados los banyamulenge, por un lado, y, por el otro, los bafuliro, los babembe y los banyindu. Se estima que 125.000 civiles se desplazaron por los enfrentamientos. La situación se deterioró considerablemente desde

17. Paul Rusesabagina es un antiguo gestor hotelero de origen hutu, adjunto a la dirección del Hotel Mille Collines en Kigali, cuya conducta salvando a 1.268 personas de origen tutsi en su hotel durante el genocidio en 1994 dio origen al film Hotel Rwanda. En 1996 sus críticas al Gobierno de Paul Kagame le obligaron a exiliarse a Bélgica, donde también sufrió amenazas de muerte, por lo que se mudó a EEUU.

octubre y es cada vez mayor el riesgo de que la violencia se extienda a las provincias colindantes, según la ONU. El Gobierno congolés, con el apoyo de la MONUSCO, desplegó contingentes de las FARDC y puso en marcha iniciativas de mediación política, pero estos esfuerzos no lograron reducir el clima de violencia debido a la politización del conflicto y a la falta de imparcialidad atribuible a las autoridades involucradas, según destacó el informe del secretario general. En el territorio de Shabunda (oeste de Kivu Sur), el redespiegue de las FARDC a otras zonas aumentó la libertad de acción de las milicias Mai-Mai Raya Mutomboki, lo que llevó a un deterioro de la seguridad y un aumento de los abusos contra los civiles.

Por último, cabe destacar la persistencia del contrabando de oro artesanal congolés a través de países vecinos con Dubai como principal destino. La falta de un sistema de trazabilidad del oro artesanal seguía obstaculizando los esfuerzos por controlar el sector. El Grupo de Expertos de la ONU en la RDC también investigó y documentó varios casos de contrabando de minerales que contenían estaño (casiterita), tantalio (coltán) y tungsteno (wolframita). Así, el Grupo de Expertos documentó que algunos grupos armados continuaron financiando sus actividades mediante la minería ilegal, contaminando así la cadena de suministro, persisten mercados ilícitos y de redes de contrabando y la implicación en el comercio ilícito de funcionarios públicos encargados de la lucha contra el fraude, entre otras cuestiones.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años

2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Persistieron durante todo el año las acciones armadas por parte de las fuerzas de origen ugandés ADF, asentadas en la región de Kivu Norte, principalmente en el territorio de Beni (Grand Nord), aunque también en el fronterizo territorio de Irumu (provincia de Ituri, al norte del territorio de Beni). Así, las ADF perpetraron numerosos ataques contra la población civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad congolese y la MONUSCO, así como recurrentes secuestros de civiles, que causaron varios centenares de víctimas mortales durante el año. Según ACLED, se alcanzó el medio millar víctimas. El grupo, dirigido por Seka Musa Baluku, se reagrupó y reconstruyó su capacidad después de las operaciones llevadas a cabo en 2014, según destacó el Grupo de Expertos de la ONU para la RDC, que remarcó la capacidad de reclutamiento del grupo en Uganda y en el este de la RDC. El Grupo de Expertos también constató que el grupo seguía reclutando menores y utilizándoles en acciones de combate, también constató que **las ADF habían cometido numerosos actos de violencia sexual relacionada con el conflicto**, en particular por medio del matrimonio forzado. La acción más grave tuvo lugar a finales de año, a raíz de una operación de las Fuerzas Armadas iniciada a finales de octubre contra las ADF en la zona situada al norte de Beni. Las FARDC concentraron más de 20.000 efectivos en la localidad y a lo largo de ejes viales clave durante las semanas anteriores. Si bien se observaron varios episodios de intensos combates y las FARDC indicaron que se habían apoderado de varias posiciones estratégicas, las ADF siguieron una táctica de ataques deliberados contra la población civil con el fin de socavar la ofensiva. En respuesta a la ofensiva del Ejército, las ADF mataron a unos 100 civiles en el mes de noviembre lo que desencadenó el desplazamiento forzado de miles de personas. Cabe señalar la operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas a finales de mayo que causó la muerte de 26 combatientes de las ADF en Ngite (Kivu Norte).

Según destacó el informe del secretario general de la ONU, la MONUSCO elaboró planes de contingencia para la protección de los civiles en el contexto de las operaciones de las FARDC contra las ADF, como el incremento de patrullas, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de ataques de represalia contra civiles. Tras el deterioro de la situación, la MONUSCO y las autoridades nacionales renovaron sus esfuerzos por cooperar más estrechamente en la protección de los civiles. La MONUSCO, además, continuó prestando apoyo logístico y médico a las FARDC para ayudar a sostener las últimas operaciones contra las ADF y debilitar su capacidad de causar daños a los civiles. No obstante, a pesar de esos esfuerzos, **el aumento de los**

ataques de las ADF desencadenó una serie de protestas ciudadanas cada vez más violentas a partir del 20 de noviembre contra la situación de la seguridad, en gran medida dirigidas contra la MONUSCO, y ante el fracaso del Gobierno congolés, las FARDC y la MONUSCO en garantizar la seguridad de la población civil, lo que derivó en el incendio del Ayuntamiento de Beni y los ataques a las instalaciones de la MONUSCO, que tuvo que trasladar su personal. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Beni, Butembo y Oicha, causaron la muerte de dos policías y al menos siete manifestantes entre el 23 y el 26 de noviembre. En consecuencia, el presidente Tshisekedi decidió incrementar la presencia del Ejército en el territorio de Beni y acordó llevar a cabo operaciones conjuntas entre las FARDC y la MONUSCO contra las ADF.

Por otra parte, se especuló en torno a posibles vínculos entre las ADF e ISIS que despertaron grave preocupación en la región. El 18 de abril, ISIS reivindicó un ataque que se sospecha que fue cometido por las ADF en un campamento de las FARDC en Bovata, en Kivu Norte, realizado dos días antes. El ataque se cobró la vida de dos soldados y un civil. Desde entonces, ISIS ha reivindicado más ataques que también se atribuyen a las ADF. Sin embargo, las ADF seguían siendo, tal y como destacó el informe del Grupo de Expertos sobre la RDC, una organización hermética que no compartía públicamente sus objetivos ni reivindicaban ataques. El 29 de junio, en una aparición en los medios de comunicación, el presidente Tshisekedi se mostró preocupado por la adopción de tácticas terroristas relacionadas con ISIS por parte de las ADF. No obstante, en su último informe, el Grupo de Expertos sobre la RDC no confirmó ningún vínculo directo entre las ADF e ISIS aunque su interpretación radical del Islam y su reciente propaganda indicaban el deseo de aliarse con otros grupos islamistas.

RDC (Kasai)	
Inicio:	2017
Tipología:	Gobierno, Identidad Interno
Actores:	RDC, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

El conflicto en la región del Grand Kasai, que incluye cinco provincias del centro-sur del país (Kasai-Central, Kasai, Kasai-Oriental, Lomami y Sankuru), enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado congolés contra diversas milicias de la zona, organizaciones que también se enfrentan entre ellas y contra la población civil. En 2012, Jean-Pierre Pandi debía suceder a su difunto tío como el sexto “Kamwina Nsapu”, uno de los principales jefes consuetudinarios en el territorio de Dibaya en Kasai-Central. Tales jefes desempeñan un papel importante, ejerciendo el control sobre la tierra

y la administración en sus dominios. Supuestamente apolíticos y seleccionados de acuerdo con las tradiciones, deben ser reconocidos por el Estado central, requisito que alienta a los jefes a apoyar al régimen para que respalde a los solicitantes. En Grand Kasai, la interacción entre la autoridad consuetudinaria y la administración del presidente congolés Joseph Kabila ha sido particularmente compleja porque la región es un bastión de la oposición. Kinshasa se negó a reconocer oficialmente a Pandi lo que incrementó la tensión. En agosto de 2016, Pandi fue asesinado en su casa durante enfrentamientos entre sus combatientes y las fuerzas de seguridad en circunstancias controvertidas, lo que desencadenó una rebelión por parte de sus seguidores, que adoptaron el nombre de Kamwina Nsapu para vengar a su líder. El movimiento se convirtió en una insurrección generalizada al sumarse otros grupos de la zona. Los grupos han ganado notoriedad por su extensivo reclutamiento de menores. El conflicto, inicialmente en Kasai-Central, se extendió a otras localidades y hacia las provincias de Kasai, Kasai-Oriental, Sankuru y Lomami. La desproporcionada respuesta de las FARDC provocó la escalada de la situación, que ha tomado un cariz intercomunitario ya que Kamwina Nsapu, surgida de la comunidad luba, ha ampliado sus ataques a la población que no pertenece a esta etnia, y el Gobierno ha apoyado a la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe.

La situación en la región de Kasai (que afecta a las provincias de Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru y Lomami) mejoró ostensiblemente durante el año tras las rendiciones espontáneas y a gran escala que tuvieron lugar a principios de 2019 principalmente del grupo Kamwina Nsapu, por lo que se puso fin al conflicto armado que ha afectado la región. Se produjeron hechos esporádicos de violencia que causaron alrededor de medio centenar de víctimas mortales, según ACLED. El hecho más destacado tuvo lugar el 24 de febrero, cuando se produjo un enfrentamiento entre las FARDC y Kamwina Nsapu en Kamako (Kasai) que provocó 19 víctimas mortales al intentar liberar a un líder de la comunidad tetela secuestrado en la casa de un líder de Kamwina Nsapu. Dicho grupo, uno de los principales responsables de la violencia en los últimos años, permaneció prácticamente inactivo tras la rendición de sus milicias y en muchos casos sus miembros se desmovilizaron y regresaron a sus zonas y comunidades de origen. También se produjo el retorno de miles de civiles a sus lugares de origen. Sin embargo, sigue pendiente la desmovilización de la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe. Tras un aumento de las tensiones durante las elecciones a gobernador, la situación política y de la seguridad en la provincia de Sankuru también mejoró, en parte gracias a los esfuerzos de la MONUSCO por promover la reconciliación entre las comunidades y el desarme de los grupos de jóvenes a nivel local, según destacó la ONU. Sin embargo, persiste el riesgo de que se produzcan conflictos locales, ya que varios miles de personas, entre ellas miembros de las comunidades desplazadas lulúa y luba, cruzaron la frontera de Angola para regresar a sus lugares de origen, principalmente en Kasai Central, donde las milicias pende y tshokwe aún no habían sido desarmadas. La MONUSCO

apoyó el diálogo intercomunitario y los esfuerzos de reconciliación de las autoridades provinciales, así como la reintegración de los antiguos miembros de Kamwina Nsapu en sus comunidades.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

El conflicto armado en la región de Darfur, Sudán, se volvió a caracterizar por una menor intensidad de la violencia a lo largo del 2019, en la lógica de las dinámicas de los últimos años. Según los datos facilitados por ACLED, durante el año y hasta mediados de noviembre, se produjeron en la región de Darfur 268 muertes producidas por la violencia (casi la mitad de ellas, 132, registradas en la región de Darfur Central). Ello significa una reducción significativa de la violencia si se compara con las 859 muertes violentas registradas durante el 2018, las 996 en 2017 o las 2.286 en 2016. En gran parte el descenso de la violencia estuvo marcado por las negociaciones de paz, así como por las movilizaciones políticas vividas en el país durante el año, que conllevaron el derrocamiento del Gobierno presidido por Omar al-

Bashir en abril. La apertura de un nuevo proceso nacional de transición focalizó los esfuerzos de todas las partes –Gobierno, grupos opositores, movimientos rebeldes, entre otros– abriendo nuevas iniciativas de consolidación de la paz, logrando el compromiso de cese de las hostilidades por las partes y, en general, mejorando las condiciones de seguridad. Como parte de este escenario, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró en los primeros tres trimestres de 2019 un total de 14.500 nuevos desplazamientos forzados en todo el país (principalmente en Darfur Sur), mientras que el número de personas que pudieron retornar a sus hogares ascendió a 111.500 personas, registrándose en Darfur Norte el mayor número de retornos (44.500 personas). Sin embargo, al finalizar el año estallaron en El Geneina disputas de carácter intercomunitario entre miembros de los grupos masalit y maaliya, que habrían dejado un balance de más de 80 personas muertas, 190 heridas y alrededor de 47.000 personas desplazadas. La crisis se relacionó con la muerte de un pastor maaliya a manos de un joven masalit, que desencadenó una ola de venganzas entre familias y grupos. El primer ministro, Abdallah Hamdok, y el vicepresidente del Consejo Soberano, el teniente general Mohamed Hamdan “Hemeti”, encabezaron la delegación que el 1 de enero llegó a El Geneina para evaluar y contener la violencia.

En relación con la **misión híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID)**, en 2018 el Consejo de Seguridad de la ONU inició la reconfiguración y reducción de la misión en el país, según lo acordado por el organismo en sus resoluciones 2363 (2017) y 2429 (2018), en las cuales se prevé, entre otros aspectos, la entrega de sus instalaciones a las fuerzas paramilitares de las Rapid Support Forces (RSF). Sin embargo, grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, cuestionaron la decisión de reducir la misión debido a la violencia aún presente por parte de las milicias janjaweed en Darfur, pero también en otras partes del país. Como parte de la hoja de ruta de salida, que prevé el fin de la misión para el año 2020, el Consejo de Seguridad había extendido el mandato de la UNAMID hasta el 30 de junio de 2019. A principios de junio, el Consejo de Seguridad volvió a extenderlo hasta el 31 de octubre de 2019. Como parte de la negociación de los acuerdos de paz entre el nuevo Gobierno de Transición de Sudán y los movimientos rebeldes, el primer ministro, Abdalla Hamdok, solicitó en octubre a la ONU la extensión por un año de la misión. Ello se debió a las preocupaciones de los grupos rebeldes armados darfuríes sobre la desprotección de la población civil que podría significar la retirada de la UNAMID antes de lograr la firma de la paz por el mantenimiento de la violencia por parte de las milicias janjaweed. El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el 31 de octubre el mandato de la UNAMID por un año, estableciendo que este se concentraría en áreas específicas: apoyo al proceso de paz; soporte a las actividades de consolidación de la paz; y protección de los civiles, seguimiento y presentación de informes

sobre los derechos humanos, incluida la violencia sexual y de género y violaciones graves contra niños y niñas, facilitación de asistencia humanitaria y apoyo al retorno voluntario de las personas desplazadas forzosamente por la violencia.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción del ex presidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Si bien a lo largo del año la violencia continuó reduciéndose en gran medida en todo el país, las acciones armadas continuaron estando presentes

debido a disputas intercomunitarias, así como a los enfrentamientos entre tropas gubernamentales y el grupo rebelde no signatario del Acuerdo de paz, el Frente de Salvación Nacional (NAS) dirigido por Thomas Cirillo, en la región de Ecuatoria Central, particularmente alrededor de la ciudad de Yei. El número de víctimas mortales producidas a raíz de la violencia política armada en el país en 2019, según ACLED, ascendería a 1.499. Se trata de la cifra más baja desde que se inició la última fase del conflicto armado en diciembre de 2013, que según datos de la Misión de la ONU en el país (UNMISS) ha costado la vida a alrededor de 400.000 personas desde el inicio de la guerra. Sin embargo, si bien la violencia se redujo de forma comparativa, la emergencia humanitaria se mantenía en el país. Según datos facilitados por ACNUR, a finales de 2019 alrededor de 4,3 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente por la violencia, de las cuales 2,21 millones eran personas refugiadas en países vecinos (principalmente en Uganda y Sudán), de las cuales el 63% eran niños y niñas. Estos datos, según el organismo, sitúan a Sudán del Sur como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán.¹⁸

La ratificación del Acuerdo de Paz de 2015, con la firma en septiembre de 2018 del acuerdo denominado Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS), redujo significativamente durante el 2019 la violencia en el país entre las Fuerzas Armadas y el principal grupo rebelde, el SPLA-IO, encabezado por Riek Machar. El acuerdo ratificó el compromiso de las partes por el cese a la violencia, logrando al finalizar el 2019 el alto el fuego más largo entre los dos principales grupos que iniciaron el conflicto armado en diciembre de 2013. Si bien los avances en la hoja de ruta política descrita en el R-ARCSS fueron menores durante el año,¹⁹ en materia de contención de la violencia en el país se produjeron avances significativos que favorecieron la reducción de las hostilidades militares, la mejora de la situación de seguridad y el desplazamiento libre de personas. Asimismo, también favoreció la provisión de ayuda humanitaria, reduciéndose en un 30%, según información de la ONU, los incidentes contra trabajadores humanitarios en relación al año anterior.

Aun así, la violencia siguió estando presente en el país debido fundamentalmente a las acciones armadas de la rebelión del NAS, así como a disputas intercomunitarias. En relación a la primera, la negativa del grupo comandado por Thomas Cirillo a reconocer el acuerdo de paz convirtió a la insurgencia en uno de los mayores obstáculos en el país para afianzar la paz. Durante todo el año se registraron diferentes acciones armadas del NAS y enfrentamientos con el

18. UNHCR, "South Sudan Refugee Crisis", consultado el 14 de enero de 2020.

19. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Sudán del Sur en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2020.

Ejército sursudanés (ahora rebautizado como Fuerza de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur – SSPDF) así como con las fuerzas rebeldes del SPLA-IO en las regiones de Ecuatoria Central y Occidental, forzando el desplazamiento de alrededor de 13.000 personas solo durante el primer mes del año. La escalada de violencia generó una declaración conjunta de la Troika (EEUU, Noruega y Reino Unido) el 21 de febrero, instando a las partes a respetar el Acuerdo de Cesación de Hostilidades de diciembre de 2017 y el R-ARCSS de septiembre de 2018. Posteriormente, el 15 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la UNMISS, dando potestad a las fuerzas de paz para proteger y garantizar el retorno de las personas desplazadas. Más tarde, el 30 de mayo, el Consejo de Seguridad extendió por un año el embargo de armas, así como las sanciones a diferentes funcionarios gubernamentales y miembros de distintos grupos rebeldes identificados como un obstáculo para la paz. Naciones Unidas también acusó a las partes signatarias del acuerdo de paz de seguir reclutando combatientes. Mientras, las hostilidades se mantuvieron en la región de Ecuatoria. La UNMISS denunció el 3 de julio que al menos 104 personas habían perdido la vida –debido principalmente a la escalada de la violencia en la región de Ecuatoria– en el periodo transcurrido entre la firma de ratificación de la paz en septiembre de 2018 y abril de 2019. En octubre, un enfrentamiento entre tropas gubernamentales y miembros del NAS en Isebi, estado de Yei, dejó un balance de tres trabajadores humanitarios muertos, así como un número desconocido de soldados y rebeldes fallecidos. ACNUR denunció los ataques realizados contra personal humanitario en el país, solicitando respeto al derecho internacional humanitario. Según los datos proporcionados por el organismo, desde que se inició el conflicto armado a finales de 2013, al menos 115 trabajadores humanitarios habían sido asesinados.

Por otro lado, en cuanto a las disputas intercomunitarias entre diferentes tipos de milicias, durante el año también tuvieron lugar diferentes episodios violentos debido a diferentes causas, sobre todo relacionadas con el robo de ganado y disputas sobre lindes de tierras. Hubo incidentes en múltiples estados (Bieh, Tonj, Jonglei, Akobo, Western Lakes, entre otros.) del país. En los dos episodios más violentos, a mediados de enero, 105 personas murieron en el estado de Tonj a causa de incursiones de robo de ganado, mientras que a finales de noviembre al menos 80 personas resultaron muertas y otras 1.000 heridas en enfrentamientos registrados entre miembros de los grupos manuer y gak en el estado de Western Lakes. Este episodio generó el envío de 75 efectivos nepaleses de la UNMISS para tratar de poner fin al brote de violencia.

Sudán del Sur, con 2,21 millones de personas refugiadas, se situó como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la tercera más grande del mundo, por detrás de Siria y Afganistán

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	FIN

Síntesis:

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continuó cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

En línea con la tendencia observada en los últimos años, durante 2019 se registró una disminución en los hechos de violencia vinculados al conflicto armado de baja intensidad protagonizado principalmente por las fuerzas de seguridad y milicianos vinculados a al-Qaeda. **Esta evolución llevó a que la situación en Argelia dejara de ser considerada conflicto armado al finalizar el año.** Según el balance anual dado a conocer por el ministerio de Defensa argelino, a lo largo de 2019 se dio muerte a 15 personas acusadas de terrorismo. El Gobierno también informó de la detención de 25 personas y la rendición de otras 44 presuntamente vinculadas a actividades terroristas, el decomiso de 649 piezas de armamento y el descubrimiento y destrucción de 750 artefactos explosivos de fabricación artesanal. Adicionalmente, algunas informaciones de prensa indicaron que un ataque de ISIS habría causado la muerte a ocho soldados argelinos en noviembre, aunque no hubo confirmación de las bajas militares. La filial

que reivindicó la acción, “Provincia de Argelia”, había permanecido prácticamente inactiva desde su creación en 2014. En todo caso, en términos generales, la cifra total de letalidad a causa del conflicto sería la más baja de los últimos años, ya que en 2018 se contabilizaron entre 40 y 50 personas fallecidas, frente a un centenar en 2017 y alrededor de 150 en 2016. Los datos de ACLED apuntan una tendencia similar, con 22 víctimas mortales en 2019 y 66 en 2018, y en torno a 150 personas fallecidas anualmente en los tres años precedentes.

Recientemente, distintos análisis habían destacado el debilitamiento de AQMI en Argelia –incluyendo la muerte de unos 600 combatientes a manos de las fuerzas de seguridad entre 2013 y 2018–, frente a una mayor actividad de la organización en la zona del Sahel Occidental, en particular en países como Malí, Burkina Faso y Níger.²⁰ Pese a ello, AQMI ha continuado reivindicando Argelia como su ámbito de actuación y en los últimos años ha emitido una serie de comunicados urgiendo a sus seguidores y simpatizantes a no abandonar la causa argelina. Durante 2019, un alto dirigente de AQMI difundió un mensaje a través de los canales de comunicación de al-Qaeda con la intención de aprovechar la inestabilidad política en el país, en el marco de las protestas contra el Gobierno argelino tras el anuncio del presidente Abdelaziz Bouteflika de que se presentaría a un quinto mandato. En su alocución, Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi criticó las condiciones socioeconómicas del país y sugirió que la población argelina debía derrocar al régimen para luego promover que Argelia fuera gobernada por una estricta interpretación de la sharia. Más tarde, al-Anabi emitió otro mensaje celebrando la decisión de Bouteflika de no presentarse a nuevas elecciones. En esta línea, **pese a la significativa merma de sus capacidades para actuar en Argelia en los últimos años, algunos análisis destacaron que el grupo estaría interesado en capitalizar el contexto de inestabilidad y un deterioro de la situación de seguridad.**

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

20. Véase el resumen sobre Malí y Región Sahel Occidental en este capítulo.

21. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Libia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2020.

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

El conflicto armado en Libia empeoró durante 2019 en comparación con el año anterior, en gran medida debido a las consecuencias de la ofensiva sobre Trípoli lanzada por el general Khalifa Hifter y su grupo armado, el Ejército Nacional de Libia (LNA, por sus siglas en inglés), y como resultado de una mayor implicación de actores foráneos en la contienda, que se reflejó entre otras cosas en numerosas violaciones al embargo de armas que rige sobre el país norteafricano y en el creciente uso de arsenales aéreos. Estas dinámicas determinaron un bloqueo de las iniciativas de paz para Libia y propiciaron un incremento de las víctimas mortales del conflicto.²¹ A mediados de año, informaciones de prensa destacaban que desde el inicio de la campaña sobre Trípoli a principios de abril y hasta junio habían fallecido más de 700 personas. Hasta finales de diciembre, la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos habían documentado la muerte de 287 civiles a causa de las hostilidades, mientras que otras 371 personas habían resultado heridas. Estas cifras representan un **25% más de víctimas civiles respecto a 2018, según los datos de la ONU.** ACLED, en tanto, contabilizó 2.064 personas muertas a causa de la violencia en 2019, casi el doble de las registradas en 2018 en el que se contaron 1.188 muertes. El think tank International Crisis Group, en tanto, advertía sobre la muerte de más de 3.000 personas en las hostilidades. Durante 2019 los enfrentamientos entre numerosos grupos armados de distinto signo en Libia afectaron diversas regiones del país. Los principales escenarios de la violencia fueron Sebha, Murzuq, Derna, Benghazi,

Jufra, Waddan, Misrata y, en especial, Trípoli y sus alrededores.

En los primeros meses del año los incidentes violentos se concentraron en el sur del país, tras la decisión de Hifter y el LNA de ampliar su control en esta zona. Los choques enfrentaron al LNA y milicias árabes próximas con grupos armados no árabes en localidades como Sebha y Murzuq, mientras en paralelo continuaban los choques entre el LNA y organizaciones de corte islamista en el este del país. **La escalada de hostilidades en Libia se produjo sobre todo a partir del 4 de abril, cuando Hifter lanzó una ofensiva con miras a asumir el control de la capital, Trípoli, ciudad que en los meses previos había sido objeto de varias violaciones al cese el fuego** alcanzado en septiembre de 2018. El inicio de la campaña del LNA en los alrededores de Trípoli coincidió con la visita del secretario general de la ONU al país, António Guterres, quien abandonó Libia en medio de llamamientos a las partes a evitar una confrontación sangrienta. El Gobierno internacionalmente reconocido del primer ministro Fayed Serraj promovió la creación de la llamada Fuerza de Protección de Trípoli. En los meses siguientes el GNA logró frenar la ofensiva de Hifter, pero no forzar un repliegue, por lo que los combates persistieron en los alrededores y dentro de la ciudad. Las partes no se mostraron dispuestas a un cese el fuego: Serraj presentó una propuesta de proceso político que excluía a Hifter y ese último sugirió que no podría haber negociaciones hasta que el LNA asumiera el control de Trípoli y se eliminaran algunas instituciones creadas por el acuerdo político de Skhirat (2015). En este escenario, a partir de julio los enfrentamientos se extendieron e intensificaron en otras zonas de país – así, por ejemplo, Misrata era junto a Trípoli uno de los principales escenarios de las hostilidades al finalizar el año. Los ataques incluyeron objetivos como aeropuertos, depósitos de armas, pero también zonas pobladas.

Esta dinámica se vio favorecida por los apoyos externos – técnico, logístico, militar– a los diferentes actores armados libios, en particular de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Rusia en el caso del LNA de Hifter y de Turquía y Qatar en el caso del GNA. Así, por ejemplo, en noviembre se informó sobre el refuerzo de las tropas de Hifter con asistentes militares rusos. En diciembre, en tanto, la decisión del GNA y Turquía de suscribir un pacto de seguridad y de jurisdicciones marítimas recíprocas alentó tensiones en el Mediterráneo –con una airada reacción de países como Egipto o Grecia– y derivó a principios de 2020 en una autorización del Parlamento turco a enviar tropas a Libia. EEUU, por su parte, mantuvo una posición errática respecto a la pugna entre los principales actores armados libios. El secretario de Estado de EEUU condenó primero la ofensiva de Hifter sobre Trípoli, pero días después el presidente estadounidense, Donald Trump, habló telefónicamente con el general libio y –según trascendió– valoró sus acciones como parte de una campaña contraterrorista y

El conflicto armado en Libia se agravó en 2019, con enfrentamientos y ataques aéreos en diversas zonas del país alentados por continuas vulneraciones al embargo de armas

de protección de los pozos petroleros. Hacia finales de año, después de una visita de representantes del GNA a Washington, EEUU volvió a condenar la ofensiva del LNA y acusó a Rusia de intentar explotar el conflicto. Paralelamente, Washington continuó actuando directamente en Libia a través de ataques a presuntos militantes de AQMI e ISIS, como los que causaron la muerte de 43 personas a finales de septiembre en el área de Murzuq (sur). La UE, en tanto, no consiguió promover una posición unitaria frente al conflicto en Libia. Francia siguió decantándose –incluso más abiertamente– por el bando de Hifter. Italia, por su parte, continuó intentando mantener el interés internacional sobre Libia y priorizando los acuerdos de control de la migración.

En este contexto, en el último trimestre del año **el enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salame, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los peligros de la interferencia extranjera en el país eran evidentes, con una creciente presencia de mercenarios y combatientes de compañías militares privadas** –a finales de año, la prensa informaba sobre todo de la presencia de mercenarios rusos en apoyo a Hifter y de combatientes de Sudán llegados a Libia para apoyar al GNA. El diplomático también alertó sobre la expansión del fuego de artillería a zonas pobladas –con un aumento de las víctimas civiles– y aportó datos ilustrativos sobre el creciente uso del fuego aéreo en el conflicto. Según los datos de UNSMIL, desde abril y hasta mediados de noviembre se habían registrado unos 800 ataques aéreos con aviones no tripulados en apoyo al LNA y otros 240 en respaldo al GNA, operaciones que necesariamente requieren de apoyo externo. Las dinámicas de violencia se vieron favorecidas por la gran cantidad de arsenales de la era Gaddafi que circulan en el país, pero también por continuas vulneraciones al embargo de armas. En diciembre Salame denunció que el embargo se había transgredido en al menos 45 ocasiones desde la escalada de violencia en abril y subrayó que las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU habían impedido la aprobación de un cese el fuego pese a que el tema había sido discutido en al menos 15 oportunidades.

La intensificación de la violencia en Libia en 2019 supuso un mayor deterioro de la situación de la población afectada por años de conflicto armado. **Durante el año se alertó especialmente sobre los desplazamientos forzados de población –entre 120.000 y 200.000 personas desde abril, según estimaciones.** Un 51% de las personas desplazadas serían mujeres y enfrentaban riesgos desproporcionados de sufrir violencia y acoso, incluyendo de carácter sexual. También se denunciaron más de 60 ataques sobre hospitales o personal sanitario y un grave deterioro en la atención de salud, que –según un estudio dado a conocer en octubre de 2019– afectaba de manera especial a mujeres y niñas. Asimismo, a lo largo del año continuaron las denuncias

sobre los impactos del conflicto en la población migrante y refugiada en Libia. **En julio causó consternación el ataque a un centro de detención de inmigrantes y personas refugiadas en las afueras de Trípoli que dejó 53 víctimas mortales, en un incidente atribuido al LNA.** A fines de 2019 también trascendió un informe reservado del Consejo de la UE en el que se reconoce que más de 5.000 personas permanecían detenidas en entre 17 y 35 centros oficiales y no oficiales, de las cuales 3.700 en “zonas de conflicto”. El documento admite que el Gobierno libio continuaba sin mejorar la situación en estos centros –abarrotados, sin servicios básicos y escenario de múltiples abusos a los derechos humanos– y sin abordar las habituales desapariciones de personas capturadas por los guardacostas libios en su fallido viaje a Europa. El informe incluso plantea que el propio Gobierno y funcionarios estarían involucrados en estas prácticas como un modelo de negocio, en medio de denuncias de sobornos y chantajes a las familias de las personas detenidas. Pese a ello, el documento celebra como “progreso” la reducción en los arribos a Europa desde Libia. Pese a las demandas de organizaciones de derechos humanos para revocarlo, en noviembre Italia renovó un multimillonario acuerdo con el Gobierno de Serraj para frenar los flujos de personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo, que compromete a Roma y a la UE a dar formación a la guardia costera libia y financiar los centros de detención.²²

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del <i>statu quo</i> mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

Continuó activo el conflicto armado en Colombia y a lo largo de todo el año se registraron enfrentamientos armados y diferentes actos de violencia. **El año se iniciaba con la cancelación definitiva de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN después de que un atentado reivindicado por el grupo armado contra la academia de Policía en Bogotá el 17 de enero causara la muerte de 21 policías e hiriera a más de 60. Se trataba del atentado más mortífero en la capital del país en los últimos 15 años.** El atentado fue condenado por el partido político FARC. En los meses siguientes se produjeron nuevos episodios de violencia, con enfrentamientos de los grupos insurgentes con las fuerzas de seguridad y también con grupos armados paramilitares y narcotraficantes como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El Gobierno de Colombia acusó a Venezuela de dar apoyo y alentar la insurgencia armada colombiana. Según los datos recogidos por la Fundación Ideas para la Paz, el ELN fue el grupo armado más activo durante el año 2019. En paralelo a la actividad armada del ELN, cabe destacar que en agosto, destacados dirigentes de las FARC anunciaron que retomaban la lucha armada y abandonaban el acuerdo de paz firmado en 2016 en La Habana. Entre quienes renunciaron a la implementación del acuerdo de paz se encontraban Iván Márquez –exjefe negociador de las FARC en La Habana–, Jesús Santrich, El Paisa o Romaña. Varios de estos dirigentes se encontraban en paradero desconocido y habían abandonado los diferentes procesos institucionales contemplados por el acuerdo de paz, como la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y fueron oficialmente expulsados de la JEP como consecuencia de su regreso a las armas. Además, señalaron que buscarían alianzas militares con el ELN. En los meses posteriores al anuncio de reinicio de la lucha armada nueve integrantes de la disidencia de las FARC murieron en la zona de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá como consecuencia de una operación militar. En octubre, la Fiscalía acusó a esta misma disidencia de ser la responsable de una matanza de indígenas en el municipio de Toribio, en Cauca (sur), en la que murieron cinco personas y otras seis resultaron heridas. En este mismo mes se celebraron elecciones locales, que estuvieron precedidas de varios episodios de violencia en los que murieron diferentes candidatos. International Crisis Group señaló que un total de 22 candidatos a alcaldía habían muerto a lo largo del año. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó de que entre enero y octubre se desplazaron 15.000 personas en ocho departamentos fruto de la violencia relacionada con el conflicto. El departamento más afectado por estos desplazamientos forzados fue Nariño, donde más de 5.000 personas tuvieron que huir de sus hogares. Además, durante todo el año se produjeron numerosos asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos e indígenas, con grupos paramilitares y delincuentes como responsables

22. Daniel Boffey, “Migrants detained in Libya for profit, leaked EU report reveals”, *The Guardian*, 20 de noviembre de 2019; Ylenia Gostoli, “Anti-migration deal between Italy and Libya renewed”, *al-Jazeera*, 2 de noviembre de 2019.

de gran parte de los asesinatos. Así, el Instituto de Medicina Legal señaló que entre enero y noviembre de 2019 al menos 83 indígenas habían sido asesinados. 42 de ellos en el departamento del Cauca. Por su parte, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia señaló que durante 2019 había documentado la muerte de 89 personas, 20 de ellos de personas desmovilizadas de las FARC.

El ELN fue el grupo armado más activo en Colombia durante 2019

constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad afganas con apoyo internacional y los grupos armados, especialmente las milicias talibán e ISIS – que opera con el nombre EI-KP (Estado Islámico-Provincia Khorasan) en el país asiático–. Miles de personas murieron como consecuencia de la violencia. Con respecto al impacto en la población civil, los registros de la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA señalaron que durante 2019 murieron 3.403 civiles y 6.989 resultaron heridos. Esta cifra representa la más baja desde 2013. Sin embargo, UNAMA destacó que 2019 representó un record en el número de civiles muertos como consecuencia de los bombardeos aéreos y de las operaciones de búsqueda. El centro de investigación ACLED señaló que la cifra de personas muertas en 2019 era de cerca de 42.000.²³ Un balance de fallecidos llevado a cabo por la BBC reveló una media de 74 personas muertas diariamente en Afganistán durante agosto como consecuencia de la violencia armada. Por su parte, el Uppsala Conflict Data Program señaló que durante los 10 primeros meses de 2019 murieron más personas en Afganistán como consecuencia del conflicto que durante todo 2018, con 24.000 muertes, lo que podría implicar que este fuera el conflicto más mortífero del año, lo que también coincidiría con el balance proporcionado por ACLED.²⁴ Además, Naciones Unidas denunció que durante 2019 casi 350.000 personas se desplazaron internamente como consecuencia del conflicto armado. Las negociaciones de paz entre la insurgencia talibán y el Gobierno de EEUU que se desarrollaron durante la primera mitad del año no sirvieron para reducir de forma significativa la violencia y, de hecho, los datos de UNAMA apuntaron a que julio fue el mes en el que se registró el mayor número de víctimas civiles desde que Naciones Unidas hace seguimiento. Además, gran parte de los atentados y ataques armados se produjeron coincidiendo con la celebración de las diferentes rondas de negociación, incluyendo ataques contra organizaciones humanitarias financiadas por EEUU.

En marzo, los talibanes lograron tomar el control de una base militar en la provincia de Badghis, matando a 21 soldados y haciendo prisioneros a otros 40, en el marco de una fuerte ofensiva armada talibán en el distrito de Bala Murghab que se prolongó durante el mes de abril, cuando centenares de talibanes atacaron el centro del distrito, matando al menos a 30 soldados. En mayo tuvo lugar otro grave atentado que causó la muerte a 20 policías en la provincia de Baghlan. En este mismo mes, un ataque estadounidense contra supuestos laboratorios talibanes de narcóticos, causó la muerte a 30 civiles según las investigaciones de Naciones Unidas, lo que fue negado por EEUU. Coincidiendo con el inicio de la ronda de negociaciones de finales de

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán mantuvo elevados niveles de violencia a lo largo de todo el año, con

23. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *Number of reported fatalities by country-year*. acleddata.com

24. Uppsala Conflict Data Program, Bulletin. “Afghanistan: The deadliest conflict in the world”, 2019.

junio, una serie de atentados y enfrentamientos en dos días causaron la muerte de 300 personas, entre insurgentes talibanes e integrantes de las fuerzas de seguridad. Especialmente grave fue el ataque en la provincia de Baghlan en el que murieron 25 miembros de una milicia gubernamental. En septiembre, coincidiendo con la celebración de las elecciones presidenciales se produjeron múltiples atentados de enorme gravedad. Dos atentados el 17 de septiembre, uno de ellos en un acto de campaña electoral del presidente Ashraf Ghani y otro en las inmediaciones de la embajada de EEUU en Kabul, causaron la muerte a 48 personas. Días después un ataque con un dron estadounidense, supuestamente dirigido contra ISIS, causó la muerte a 30 civiles en la provincia de Nangarhar, mientras que un atentado talibán contra un hospital en la provincia de Zabul causó la muerte a 22 personas e hirió a otras 90. Además, el Gobierno afgano admitió que una operación contrainsurgente con apoyo estadounidense en la provincia de Helmand había causado la muerte a 40 civiles. La Comisión Electoral Independiente anunció el 22 de diciembre que los resultados preliminares de las elecciones del 28 de septiembre otorgaban la victoria al presidente Ghani. El principal contrincante, Abdullah Abdullah anunció que disputaría estos resultados.

En lo que respecta a la violencia por parte de ISIS, cabe destacar que informaciones de la BBC señalaron que Afganistán era el país en el que durante 2018 y 2019 había estado más activo, exceptuando Iraq y Siria. El grupo actuó fundamentalmente en las provincias de Nangarhar y Kunar. En agosto, coincidiendo con los anuncios de un inminente acuerdo de paz entre los talibanes y EEUU, se produjo el atentado más grave hasta ese momento desde que esta organización empezó a operar en el país, en el que 63 personas que asistían a una boda, en su mayoría shiíes, murieron como consecuencia de un atentado suicida. En octubre tuvo lugar otro atentado de mayor gravedad que causó la muerte a 73 personas en una población de pocos centenares de habitantes en la provincia de Nangarhar, coincidiendo con los rezos del viernes en la mezquita.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference, JKLF
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

La situación se deterioró notablemente en el estado indio de Jammu y Cachemira, lo que tuvo repercusiones negativas en la relación entre India y Pakistán. En febrero se produjo el atentado más grave contra las fuerzas de seguridad indias en Jammu y Cachemira.

La explosión de un coche conducido por un suicida en el distrito de Pulwama el 14 de febrero al paso de un convoy de las fuerzas de seguridad indias causó la muerte de 45 miembros de estas fuerzas. El atentado fue reivindicado por el grupo armado con base en Pakistán Jaish-e-Muhammad y derivó en que el Gobierno iniciara el despliegue de miles de integrantes adicionales de las fuerzas de seguridad, la imposición de un toque de queda y la detención de más de 200 líderes de la oposición en los días inmediatamente posteriores, aunque las detenciones se prolongaron en los meses siguientes con casi 4.000 personas arrestadas, de las que más de 2.000 fueron puestas en libertad posteriormente. India acusó a Pakistán de haber orquestado el ataque, acusaciones que fueron negadas por el Ejecutivo pakistaní. El hecho de que la persona que perpetró el ataque fuera de una población cercana al lugar del

atentado puso de manifiesto la naturaleza cada vez más interna de los grupos armados cachemires, así como el menor control que Pakistán ejerce sobre estos. Las fuerzas de seguridad indias anunciaron haber matado a cinco dirigentes de Jaish-e-Muhammad en los días posteriores. Cinco días después del atentado, un nuevo ataque insurgente causó la muerte a un comandante de las Fuerzas Armadas indias, otros tres soldados y un civil. En los meses posteriores se repitieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos insurgentes cachemires, que causaron la muerte de centenares de personas. De acuerdo con las cifras del centro de investigación indio South Asia Terrorism Portal, durante 2019 murieron 283 personas, una cifra sensiblemente inferior a la de años anteriores (452 en 2018 y 357 en 2017). De las personas fallecidas, 42 eran civiles, 78 miembros de las fuerzas de seguridad y 163 integrantes de los grupos insurgentes. Por su parte, la Jammu and Kashmir Coalition of Civil

Society señaló una cifra de fallecimientos notablemente superior como consecuencia del conflicto armado. Esta organización destacó que durante 2019 murieron 368 personas, de las que 80 eran civiles, 159 insurgentes y 129 integrantes de las fuerzas armadas.

En agosto se incrementó notablemente la tensión en el estado cuando el Gobierno indio tomó la decisión de revocar el estatus especial de autonomía de Jammu y Cachemira, alegando la situación de inseguridad y la posibilidad de nuevos atentados perpetrados desde Pakistán. **Además, se le retiró el estatus de estado, dividiéndolo en dos (Jammu y Cachemira y Ladakh) y rebajando su calificación a Territorio de la Unión y perdiendo su constitución y banderas propias.** En paralelo a la suspensión de la autonomía, se llevó a cabo un despliegue de 40.000 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad adicionales –habitualmente están desplegados en torno a 250.000 efectivos, lo que convierte a Cachemira en una de las zonas más militarizadas del mundo–, se cortaron los servicios de internet y telecomunicaciones y se restringió el derecho de reunión. A pesar de las prohibiciones se produjeron manifestaciones de protesta, que a su vez derivaron en detenciones, entre las que cabe destacar la del antiguo ministro jefe del estado, Farooq Abdullah, arrestado bajo la Ley de Seguridad Pública que permite detenciones sin cargos y juicio durante dos años. Numerosos líderes sociales y políticos fueron detenidos. La retirada de la autonomía tuvo un grave impacto en las relaciones con Pakistán, dado que Jammu y Cachemira es el asunto central en la disputa entre ambos Estados. En octubre, cinco civiles procedentes del estado de Bengala Occidental fueron tiroteados por insurgentes, en el marco de las represalias contra la población que acudiera a trabajar o abriera sus negocios durante los llamamientos a la huelga como respuesta por la retirada de la autonomía al estado. En semanas posteriores se produjeron nuevos asesinatos siguiendo este patrón. A finales de noviembre dos personas murieron como consecuencia de la explosión de granadas en el distrito de Anantnag.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial.

Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad indias con la insurgencia naxalita continuó activo durante todo el año, con una intensidad similar a la de 2018 y con cifras de mortalidad asociadas a la violencia ligeramente inferiores a las de años anteriores. Durante 2019 murieron un total de 302 personas como consecuencia del conflicto armado, de las que 99 eran civiles, 154 integrantes del grupo armado CPI-M y 49 eran miembros de las fuerzas de seguridad indias, de acuerdo con las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal. Los estados afectados por el conflicto armado fueron fundamentalmente Chhattisgarh, en el que murieron 122 personas, Jharkhand (64 muertes), Maharashtra (51 muertes), Bihar (21 muertes), Odisha (19 muertes), Andra Pradesh (14 muertes), Kerala (5 muertes) y Telengana (2 muertes). Durante todo el año se repitieron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los insurgentes, con diferentes operaciones militares así como emboscadas y ataques por parte de los naxalitas. Cabe destacar que en mayo, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales en el país, tuvo lugar el ataque más grave del año, cuando la explosión de una mina antipersonal en el distrito de Gadchiroli, estado de Maharashtra, causó la muerte a 15 policías y un civil. Según algunos analistas, se trató de un ataque en respuesta a los enfrentamientos de 2018 en los que murieron cerca de 40 insurgentes en este mismo distrito. Posteriormente se produjeron diversas detenciones en relación a este atentado. Durante la campaña electoral se habían producido diferentes incidentes de violencia en Chhattisgarh, Odisha y Jharkhand, como el ataque en el distrito de Kander (Chhattisgarh) el 4 de abril en el que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. En julio el Gobierno indio anunció que llevaría a cabo más operaciones por parte de la Policía para combatir a la insurgencia, a la que consideraba debilitada. Además, en Kerala se anunció un plan de amnistía para los insurgentes maoístas a cambio de información y denuncias contra colaboradores. En julio la Policía afirmó haber ejecutado a siete insurgentes en el distrito de Bastar, en Chhattisgarh. En noviembre se produjo un repunte de la violencia, con varios incidentes en el estado de Jharkhand, cuando la insurgencia mató a cuatro policías y dos civiles, incluyendo un integrante del partido BJP, lo que llevó al Ministro de Defensa, Rajnath Singh, a amenazar con incrementar las acciones contra los naxalitas. Por otra parte, en diciembre se hizo público un informe llevado a cabo por una comisión de investigación judicial que reveló que 17 personas que murieron tiroteadas por las fuerzas de seguridad en Chhattisgarh en 2012 no eran insurgentes naxalitas, sino

población civil adivasi –término con el que se denomina a las distintas tribus indígenas que habitan varios estados de la India–, incluyendo varios menores. Esto llevó a diferentes organizaciones de derechos humanos a exigir acciones contra los responsables de los asesinatos, destacando que hay numerosos casos similares pendientes de resolución por parte de los tribunales. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas repetidamente de graves violaciones de los derechos humanos de la población civil, especialmente la población adivasi, en los estados afectados por el conflicto armado.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado en Pakistán continuó activo durante todo el año con niveles de intensidad inferiores a los de 2018. De acuerdo con los datos del Center for Research and Security Studies de Pakistán durante el año murieron 679 personas en el conjunto del país como consecuencia de la violencia armada y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y los grupos insurgentes. Otras fuentes, como el South Asia Terrorism Portal recogieron un balance de 369 personas fallecidas como consecuencia

de la violencia armada, notablemente inferior a la del año anterior. **La provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que comprende los territorios anteriormente conocidos como Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), continuó concentrando una parte importante de los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con la insurgencia talibán, así como las operaciones de seguridad, lo que derivó en un grave impacto en términos de víctimas mortales, con 265 muertes como consecuencia de la violencia.** No obstante, la insurgencia talibán también estuvo operativa en otras zonas del país, llevando a cabo ataques en las provincias de Punjab y Baluchistán además de Khyber Pakhtunkhwa. La insurgencia talibán llevó atentados contra las fuerzas de seguridad, pero también contra la población civil, con atentados en mezquitas y mercados. Además, se repitieron los asesinatos de trabajadores sanitarios, especialmente de aquellos involucrados en las campañas de vacunación contra la polio. En mayo, la explosión de una bomba en un santuario sufí en Lahore, capital de la provincia de Punjab, causó la muerte de 10 personas, entre las que se incluían cinco agentes de Policía. En julio se produjo otro grave atentado suicida en el distrito de Dera Ismail Khan, en el noroeste del país, en el que murieron nueve personas y otras 30 resultaron heridas. El doble atentado, que fue reivindicado por los talibanes, tuvo lugar en un control de seguridad y posteriormente se atacó el hospital al que fueron trasladadas las personas heridas. Además, seis soldados que patrullaban en las inmediaciones de la frontera con Afganistán en Waziristán Norte murieron tras un ataque del grupo talibán TTP. En noviembre, un nuevo atentado con bomba en Waziristán Norte causó la muerte de tres soldados. En paralelo a los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad, cabe destacar la represión a las protestas sociales que tuvo lugar en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fundamentalmente en las antiguas FATA, donde al menos 13 personas murieron tras ser tiroteadas por las fuerzas de seguridad en el transcurso de una manifestación por la defensa de los derechos de la población pashtún. Tras la integración de las FATA en Khyber Pakhtunkhwa se han repetido las protestas sociales acusando a las Fuerzas Armadas de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamiento forzado de población en el marco de las operaciones militares. Entre los manifestantes se encontraban al menos dos parlamentarios.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (<i>shura</i> de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En la provincia de Baluchistán se repitieron los enfrentamientos armados y los atentados durante todo el año, tanto los llevados a cabo por los grupos insurgentes nacionalistas baluchis, como por la insurgencia talibán, con fuerte presencia en la provincia. Según las cifras recopiladas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2019 murieron 226 personas en la provincia en el marco del conflicto armado. Por su parte, el centro de investigación South Asia Terrorism Portal señaló que durante 2019, 180 personas murieron como consecuencia de la violencia en Baluchistán, una cifra notablemente inferior a la de años anteriores. En abril un atentado con bomba en un mercado de Quetta causó la muerte de al menos 16 personas y dejó numerosas personas heridas. El atentado tuvo lugar en una zona habitada mayoritariamente por población shíí. En este mismo mes, otras 14 personas murieron en una carretera en el distrito de Gwadar cuando varios hombres armados vestidos de militares pararon seis autobuses, separando a quienes llevaban identificaciones de las fuerzas de seguridad, tiroteándoles posteriormente. El atentado fue reivindicado por el grupo armado Baloch Raji Aojoi Sangar. Este grupo, conformado a finales de 2018, está integrado por el BLF, el BLG y una facción disidente del BLA. El grupo armado BLA reivindicó un atentado en mayo en el que murieron cinco personas cuando varios hombres armados tirotearon un hotel de lujo en el que suelen alojarse representantes del Gobierno chino y trabajadores de origen chino empleados en un proyecto portuario en la ciudad de Gwadar. La insurgencia nacionalista baluchi se opone a las inversiones económicas y los proyectos de infraestructuras desarrollados por el Gobierno y empresarios chinos en la provincia. En julio se produjeron varios episodios de violencia, entre los que cabe destacar una operación contra la insurgencia baluchi en la zona de Turbat en la que murieron cuatro soldados y un atentado contra una comisaría de Policía en Quetta. En este último atentado, reivindicado por el grupo armado talibán TTP, murieron cinco personas y cerca de 30 resultaron

heridas. En agosto cuatro personas murieron en Quetta cuando estalló una bomba en una mezquita durante los rezos de los viernes. Se trataba de una mezquita frecuentada por la insurgencia talibán, cuya *shura* – consejo de líderes– tiene sede en Quetta. El atentado no fue reivindicado y se produjo justo después de la octava ronda de negociaciones de paz entre los talibanes de Afganistán y el Gobierno de EEUU en Qatar. En octubre el estallido de una bomba en Quetta causó la muerte de un policía e hirió a otros cinco. En noviembre al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad murieron en diferentes hechos de violencia, entre los que cabe destacar los enfrentamientos con la insurgencia baluchi en el distrito de Rajanpur en la provincia de Punjab y el estallido de una bomba el día 15 de noviembre.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Aunque el Gobierno no ofreció cifras sobre la mortalidad asociada al conflicto, varios análisis apuntan a que, en términos generales, la intensidad de las hostilidades bélicas entre el Estado y el NPA fue similar a la del año anterior. Según datos de la base de datos Political Violence in the Southern Philippines Dataset, entre enero de 2017 y julio de 2018, 168 soldados, policías y civiles habrían muerto en el marco del conflicto armado, mientras que otras 266 personas habrían resultado heridas. Por la parte del NPA, el conflicto provocó la muerte a 185 combatientes y heridas a otros 109. A mediados del 2019, el Partido Comunista de Filipinas (PCF), sin embargo, declaró que 318 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado habrían muerto

durante 2018 por enfrentamientos con el NPA. A principios de 2019, tanto las Fuerzas Armadas como el propio presidente, Rodrigo Duterte, anunciaron su objetivo de haber derrotado militarmente al NPA para el año 2022. Para tal fin, el Gobierno mostró su satisfacción con los resultados que estaba arrojando la nueva estrategia contrainsurgente surgida de la Orden Ejecutiva 70 (emitida en diciembre de 2018), conocida popularmente como “Enfoque integral de toda la nación para alcanzar una paz inclusiva y duradera”, para cuya implementación se creó un Grupo de Trabajo Nacional para la Terminación del Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ECLAC), que durante el año se replicó a nivel provincial. Según el Gobierno, esta nueva estrategia pretende ir más allá de las operaciones de contrainsurgencia e incidir en el bienestar y desarrollo de las comunidades en las que el movimiento comunista históricamente ha tenido mayor arraigo. **Manila destacó especialmente el impacto que este nuevo enfoque estaba teniendo en las rendiciones y deserciones masivas de miembros regulares o de apoyo del NPA.**

Así, las Fuerzas Armadas declararon que solamente en Mindanao Oriental, entre enero de 2018 y febrero de 2019, más de 11.500 personas vinculadas al movimiento insurgente –918 miembros regulares del NPA, 1.217 milicias de apoyo, conocidas como Militia ng Bayan; 434 miembros de grupos de apoyo local y 8.932 miembros de organizaciones de apoyo clandestinas– se habían acogido a programas de reinserción y reintegración promovidos por el Gobierno. En la provincia de Agusán del Norte, por ejemplo, el mencionado Grupo de Trabajo Provincial para la Terminación del Conflicto, declaró que 898 miembros activos del NPA o de colectivos de apoyo a la insurgencia habían decidido acogerse a tales programas de reintegración entre enero y octubre de 2019. El Gobierno informó en varios momentos del año sobre deserciones masivas del NPA. Según Manila, solamente entre el 15 y el 22 de julio más de 200 miembros del NPA se habrían entregado a las autoridades en las provincias de Cotobato Norte, Bukidnon y Davao del Sur, todas ellas en Mindanao. En la misma línea, cabe destacar especialmente la entrega de armas y el inicio de un proceso de reintegración de 727 antiguos combatientes del Rebolusyong Partido ng Manggagawa-Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade-Tabara-Paduan Group (RPM-P/RPA/ABB-TPG), también conocido como KAPATIRAN. Dicho grupo se escindió del PCF y del NPA a mediados de los años noventa y en el año 2000 firmó un acuerdo con el Gobierno. Desde entonces, los combatientes del grupo permanecían acantonados pero no desarmados. En julio de 2019 se firmó un Documento de Clarificación de la Implementación con cinco puntos que, de ser cumplidos, deberían permitir la firma de un Acuerdo de Cierre o Finalización para el año 2022. En noviembre de 2019, 266 de las 727 personas que entregaron sus armas finalizaron un programa de formación

para su integración en las Fuerzas Armadas. En los últimos años, se habían producido varios incidentes de violencia entre miembros del NPA y del RPM-P/RPA-ABB TPG, de modo que durante la ceremonia de entrega de armas en el mes de septiembre, Duterte se comprometió personalmente a garantizar la seguridad de los ex combatientes del grupo. En este sentido, cabe señalar que pocos días después de dicha ceremonia, un destacado líder del RPM-P/RPA-ABB TPG fue asesinado en Negros Occidental. En dicha región precisamente el Gobierno hizo pública la posibilidad de imponer la ley marcial después de que se produjeran repuntes de violencia política en varios momentos del año (21 personas fueron asesinadas en una sola semana a finales de julio, por ejemplo). El Gobierno señaló que el NPA estaba detrás de varios de estos incidentes y le acusó de sacar rédito de los conflictos de tierras en la región y de haber construido un cuasi-estado en la provincia.

El Gobierno filipino sostiene que su nuevo enfoque de gestión del conflicto está propiciando deserciones y rendiciones masivas en el seno del NPA

A pesar de las declaraciones de Manila sobre las deserciones masivas del NPA y sobre los impactos de su nueva estrategia contrainsurgente, el Gobierno también reconoció que el movimiento comunista seguía suponiendo una de las principales amenazas contra la seguridad. **Las propias Fuerzas Armadas reconocieron que si bien estiman en unos 5.000 los miembros activos del NPA, calculan que existen otras 50.000 personas en todo el país que podrían considerarse miembros no armados del grupo.** Por su parte, el fundador del NPA, Jose Maria Sison, señaló que actualmente el grupo tiene 120 frentes activos en 74 de las 81 provincias del país y que el PCF tiene más de 100.000 miembros en todo el país. Con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del NPA en 1969, el PCF ordenó al NPA un incremento de los ataques en todo el país y afirmó que el movimiento comunista estaba logrando avances significativos en todos los frentes. En cuanto a las dinámicas del conflicto, durante todo el año se registraron enfrentamientos regulares, principalmente en Mindanao y en algunas provincias de Visayas. Algunas de las acciones del NPA generaron reacciones políticas, como la que provocó la muerte de seis soldados (y heridas a otros 20) en noviembre en la ciudad de Borongan o bien la ofensiva en Samar en el mes de abril, en la que otros seis soldados perecieron. El 30 de marzo, en cambio, al día siguiente de la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del grupo, 14 de sus combatientes murieron y otros tantos fueron detenidos en una operación del Ejército en la provincia de Negros Occidental. A finales de año, en paralelo a las declaraciones de ambas partes sobre su voluntad de reanudar las negociaciones de paz a principios de 2020, el NDF anunció un cese de hostilidades entre el 23 de diciembre y el 7 de enero con motivo de las fiestas navideñas, medida que fue replicada inmediatamente por el Gobierno, tal y como ha sido habitual en los últimos años. También a finales de diciembre, Manila anunció la reconstitución de

su panel negociador y la inclusión en el mismo de Salvador Medialdea, secretario ejecutivo del Gobierno y, según varios medios, persona muy cercana a Duterte. Finalmente, cabe señalar que el Gobierno acusó al NPA de cometer crímenes de guerra por el reclutamiento de menores. Según datos de las Fuerzas Armadas hechos públicos en agosto, entre 1999 y 2019 el Estado habría neutralizado a 513 menores reclutados por el NPA, de los que 362 se habrían entregado, 134 habrían sido capturados y 17 habrían sido abatidos.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

Aunque no trascendieron las cifras de mortalidad vinculadas al conflicto armado entre el Estado y varios grupos –como el BIFF, Abu Sayyaf, el Grupo Maute o Ansarul Khilafah Mindanao– los niveles de violencia fueron parecidos o incluso inferiores a los del año anterior. En 2018, 173 combatientes del BIFF y 21 soldados habían muerto en 83 enfrentamientos en Mindanao (especialmente en Maguindanao, feudo principal del BIFF). Además, se registraron otros

36 enfrentamientos entre el Estado y otros grupos considerados yihadistas que obligaron a más de 91.000 personas a abandonar sus hogares. También en 2018, en Basilan, Sulu y Tawi-Tawi, 161 personas murieron y más de 5.000 se desplazaron forzosamente por los enfrentamientos (63) con Abu Sayyaf. Además del conflicto entre el Estado y los mencionados grupos, en 2019 también se produjeron enfrentamientos entre el MILF y el BIFF, un grupo escindido del primero. A modo de ejemplo, en octubre siete combatientes del MILF y cuatro del BIFF murieron en el marco de un intercambio de fuego entre el MILF y una de las tres facciones principales del BIFF liderada por Abu Toraife. Cabe señalar que, tras el establecimiento de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RABMM), gobernada interinamente por el líder histórico del MILF, el grupo se ha involucrado más activamente en la prevención del radicalismo en Mindanao y en la lucha contra grupos vinculados con ISIS. Según varias personas expertas, si bien la coordinación entre dichos grupos todavía es precaria y su capacidad militar permite solamente llevar a cabo ataques esporádicos, la derrota de ISIS en Iraq y Siria, donde perdió sus últimos bastiones en el mes de marzo, hace que el grupo esté modificando su estrategia global, abandonado la pretensión de controlar territorio y centrando sus esfuerzos en expandir y diversificar territorialmente sus llamamientos de corte yihadista. En este marco, según los mencionados analistas, **ISIS está concediendo una importancia creciente al Sudeste Asiático y muy en particular a Mindanao**. Así, en 2019 siguió consolidándose la tendencia ya observada en los dos años precedentes de una creciente articulación de ISIS en la región y de un incremento de combatientes foráneos, vídeos y propaganda, ataques suicidas o entrenamiento militares en Mindanao. A mediados de año, por ejemplo, las Fuerzas Armadas reconocieron haber detectado a más de un centenar de combatientes extranjeros en Mindanao, varios de los cuales en tareas de entrenamiento en artefactos explosivos y atentados suicidas. De hecho, algunos de los episodios de violencia más importantes del año fueron cometidos por personas que no tenían la ciudadanía filipina.

En cuanto a las dinámicas bélicas del año, cabe destacar el incremento de las hostilidades a principios de año, coincidiendo con el plebiscito sobre la ratificación de la Ley Orgánica de Bangsamoro, que se celebró en dos rondas a finales de enero y a principios de febrero. Si bien el 31 de diciembre de 2018 ya había habido un atentado en un centro comercial de Cotobato en el que dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas, ISIS declaró, en su primer comunicado desde finales de 2017, que más de 30 soldados habían muerto en el marco de los enfrentamientos con varios grupos, especialmente con el Grupo Maute. **Dos días después de que se proclamaran los resultados de la primera vuelta del mencionado plebiscito, 22 personas murieron y otras 109 resultaron heridas tras el estallido simultáneo de dos artefactos explosivos en la catedral de Jolo**, capital de la provincia de Sulu. Tres

días más tarde, dos personas murieron y muchas otras resultaron heridas tras un atentado en una mezquita de Zamboanga. En los días posteriores al atentado en Jolo, el Gobierno señaló que la autoría material del ataque correspondió a dos personas de origen indonesio, que contaron con el apoyo de ISIS y de una de las facciones más activas de Abu Sayyaf, denominada Ajang Ajang. Dicha facción, cuyo feudo principal está en Sulu –la otra facción principal del grupo está liderada por Furuji Indama y se asienta principalmente en Basilan–, está liderada por Hatib Hajan Sawadjaan, de quien varios analistas han señalado que ha pasado a ser el referente principal de ISIS en el sur de Filipinas y a quien el departamento de Estado de EEUU llegó a identificar como emir de la región. A finales de enero y durante el mes de febrero, las Fuerzas Armadas intensificaron su campaña contrainsurgente en Sulu, incluyendo varios bombardeos aéreos. En este sentido, el Gobierno declaró su intención de derrotar a Abu Sayyaf para finales de 2019, y para ello desplegó tropas adicionales en el archipiélago de Sulu. Algunos analistas anticiparon un incremento de las hostilidades entre ambas partes por considerar que las Fuerzas Armadas ya habían neutralizado a algunos de los grupos que operan en otras latitudes de Mindanao, lo cual permitía al Ejército concentrar esfuerzos en la lucha contra Abu Sayyaf. Además, dichos analistas consideran que el hecho de que el grupo haya reducido drásticamente el número de secuestros facilita al Estado la puesta en marcha de operaciones militares a gran escala sin poner en riesgo la vida de los rehenes. Por otra parte, después de que ocho personas murieran en un doble atentado con artefactos explosivos atribuido a Abu Sayyaf en junio, el Gobierno advirtió de que, tal vez por la creciente articulación entre ISIS y Abu Sayyaf, el grupo estaba utilizando cada vez más los atentados suicidas. Finalmente, el hecho de que la provincia de Sulu, bastión de Abu Sayyaf, votara en contra de su incorporación a la nueva RABMM a principios de año dificultaría la participación del MILF en la neutralización del grupo. En este sentido, en varios momentos del año el Gobierno pidió ayuda en su lucha contra Abu Sayyaf a Nur Misuari, fundador del MNLF, grupo con una importante presencia en los principales bastiones de Abu Sayyaf. Cabe señalar que en el mes de marzo Nur Misuari amenazó con reanudar la guerra en Mindanao si el Gobierno no accedía a sus demandas y no avanzaba en el objetivo de Duterte de transformar Filipinas en un estado federal, pero el Ejecutivo señaló que actualmente el MNLF tiene la capacidad para llevar a cabo operaciones armadas de una cierta envergadura pero no para reanudar una guerra de alta intensidad contra el Estado.

En el marco de la ley marcial que se impuso en Mindanao a finales de 2017 y que volvió a renovarse

Poco después de la celebración del plebiscito sobre la nueva región autónoma en Mindanao, 22 personas murieron y otras 109 resultaron heridas tras el estallido simultáneo de dos artefactos explosivos en la catedral de Jolo

hasta finales de 2019, se registraron enfrentamientos frecuentes entre las Fuerzas Armadas y el BIFF y, en menor medida, con otros grupos como Ansar Khilafa o el Grupo Maute. Cabe destacar especialmente el incremento de las hostilidades en los meses de marzo y abril en Maguindanao (bastión del BIFF) y en Lanao del Sur (bastión del Grupo Maute), y que provocaron el desplazamiento de unas 50.000 personas en Maguindanao y otras 9.000 en Lanao del Sur. Se desconoce el número de víctimas mortales vinculadas a ambas campañas militares, que incluyeron bombardeos aéreos, pero a mediados de marzo el Gobierno declaró que más de 20 combatientes del BIFF habían fallecido. Los enfrentamientos con el BIFF fueron muy frecuentes a lo largo del año. A finales de julio, por ejemplo, diez combatientes de este grupo habrían muerto tras varios días de enfrentamientos en Maguindanao. **Cabe destacar la muerte a mediados de marzo del líder del Grupo Maute, Abu Dar, al que muchos consideraban el principal referente de ISIS en la región tras la muerte de Isnilon Hapilon y de los hermanos Maute durante el sitio de Marawi en 2017.** El Gobierno reconoció

que, más de dos años después de tal sitio –el episodio de violencia más longevo e intenso del conflicto armado reciente en Mindanao–, todavía había más de 100.000 personas que no habían podido regresar a sus hogares, provocando ello una enorme frustración y resentimiento y facilitando a su vez el reclutamiento de nuevos miembros por parte de grupos islamistas. Finalmente, cabe destacar que en Mindanao también se registraron otros fenómenos de violencia, a menudo con algún tipo de relación con el conflicto armado en el sur del país, como el denominado rido (enfrentamientos clánicos o familiares por razones de honor o de tierras), la llamada guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno o la violencia vinculada a las elecciones. Respecto de este último aspecto, la organización International Alert señaló a finales de mayo que en Mindanao se habían registrado 144 incidentes de violencia vinculados a las elecciones generales que se llevaron a cabo el 13 de mayo, pero la misma organización clarificó que tales cifras son sensiblemente inferiores a los comicios anteriores. La Policía señaló que 33 personas habían muerto a nivel nacional por hechos de violencia relacionados con las elecciones, confirmando una tendencia a la baja en este tipo de incidentes. En cuanto a la denominada guerra contra las drogas, el Gobierno reconoció en el mes de julio que 5.526 personas habían fallecido en el marco de las más de 134.500 operaciones antinarcóticas llevadas a cabo desde julio de 2016, poco después de la toma de posesión del cargo de Duterte. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que el número de víctimas mortales en el marco de esta campaña antidroga podría superar las 27.000, miles de las cuales en Mindanao.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

El conflicto armado en el país se mantuvo activo todo el año, afectando fundamentalmente al estado Rakhine, que fue escenario de la mayoría de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia, especialmente el grupo armado de oposición Arakan Army (AA). Durante todo el año se registraron enfrentamientos periódicos, ataques y bombardeos que tuvieron un importante impacto y generaron desplazamientos forzados de población. El alto el fuego unilateral decretado en diciembre de 2018 por las Fuerzas Armadas en los estados Shan y Kachin se mantuvo vigente hasta el mes de octubre, lo que facilitó una reducción de la violencia en términos generales en el país, pero no tuvo impacto en la situación del estado de Rakhine, que fue escenario de constantes choques violentos. No obstante, a pesar del acuerdo de alto el fuego, se produjeron enfrentamientos esporádicos en los estados Shan, Kachin y Chin. En lo que respecta a la situación en Rakhine, alrededor de 100.000 personas se desplazaron en este estado entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, como consecuencia de los enfrentamientos con el AA, que ocasionaron la muerte a decenas de soldados e insurgentes. En agosto, un ataque contra una base militar en el norte del estado causó la muerte a 30 soldados y dos integrantes del AA. Además

de los enfrentamientos armados, el AA llevó a cabo secuestros de civiles y militares en diferentes momentos del año, destacando especialmente el secuestro en octubre de 50 policías, soldados y funcionarios del Gobierno, que dio lugar a una operación militar de rescate en la que murieron varias personas. En ese mismo mes el AA denunció que las fuerzas de seguridad estaban utilizando helicópteros en sus operaciones militares y que al menos 60 soldados habían muerto como consecuencia de los enfrentamientos que habían tenido lugar entre el 11 y el 16 de octubre. Desde su conformación en 2009, el AA ha crecido hasta contar en la actualidad con en torno a 10.000 integrantes. Por otra parte, cabe destacar los incidentes violentos protagonizados por el grupo armado ARSA, que en enero llevó a cabo una emboscada contra un convoy de Policía y en diciembre reanudó los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas birmanas. Tras los ataques en 2016 y 2017 que dieron lugar a una respuesta militar sin precedentes y la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que sufrió la población rohinya, ARSA no había vuelto a estar activo desde enero de 2018.

El estado Shan fue escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados TNLA y MNDAA fundamentalmente. En agosto varios ataques coordinados en el norte del estado y la región Mandalay por parte del TNLA causaron la muerte a 15 soldados. Los enfrentamientos se incrementaron después de que el 21 de septiembre expirara el alto el fuego unilateral de las Fuerzas Armadas. En septiembre, la coalición de los grupos armados AA, TNLA y MNDAA –conocidos como Alianza de la Fraternidad y que a su vez forman parte de la Alianza del Norte, que agrupa a insurgencias no adheridas al acuerdo de alto el fuego de alcance nacional, NCA por sus siglas en inglés– decretó también un alto el fuego por un periodo de un año, que fue incumplido por los propios grupos armados pocas horas después de haberlo anunciado. Esto llevó a las Fuerzas Armadas a señalar que no había interés por parte de los grupos armados en participar del NCA y a finalizar el alto el fuego iniciado en 2018. En octubre la organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció que las Fuerzas Armadas y los grupos insurgentes estarían cometiendo crímenes de guerra y la mayor parte de estos actos se habrían cometido durante el periodo de vigencia del alto el fuego.

En paralelo al desarrollo del conflicto armado, cabe destacar que prosiguieron las investigaciones internacionales sobre las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el estado de Rakhine en 2017 en el marco de las operaciones de las Fuerzas Armadas contra el grupo insurgente ARSA y la población civil rohinya de este estado. La misión de investigación de Naciones Unidas presentó su informe en el que destacó que se había producido un patrón de ataques con el objetivo de borrar la identidad rohinya y expulsar a esta población de Myanmar y en el que se señalaba que la Comisión Independiente de

Investigación establecida por el Gobierno carecía de credibilidad. Además, la misión de Naciones Unidas hacía un llamamiento a imponer sanciones selectivas. A principios de noviembre, un total de 397 personas de las 750.000 que se refugiaron en 2017 en Bangladesh, habían regresado a Myanmar bajo el programa de retorno voluntario acordado por los dos Gobiernos. Por otra parte, en diciembre la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, compareció ante la Corte Internacional de Justicia por las acusaciones de genocidio contra Myanmar presentadas por Gambia en representación de la Organización para la Cooperación Islámica. La mandataria birmana negó las acusaciones de genocidio.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En consonancia con la tendencia de los últimos años, la violencia se redujo ligeramente respecto de los años anteriores. Así, según el centro de investigación Deep South Watch, entre enero y noviembre de 2019 habían muerto 180 personas y otras 243 habían resultado heridas en las cuatro provincias meridionales de mayoría musulmana, mientras que en 2018 el número total de víctimas mortales había sido de 218. En los años anteriores también se había producido un descenso paulatino del número de víctimas mortales (235 personas en 2017, 307 en 2016, 246 en 2015, 341 en 2014, mientras que en los cuatro años anteriores las víctimas mortales siempre fueron superiores a 450). Según Deep South Watch, **desde 2004 se han producido 20.485 incidentes violentos en los que 7.074 personas han muerto y otras 13.221 han resultado heridas.** A

pesar de tal descenso en la intensidad de la violencia, el Estado mostró en varias ocasiones su preocupación por la situación de seguridad en el sur del país y se negó a retirar tanto el llamado decreto de emergencia como la Ley de Seguridad Interna, que garantizan competencias especiales a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que han sido criticadas de manera recurrente por congresistas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar que alientan la impunidad de las Fuerzas Armadas en la contención de la insurgencia. Tales críticas arreciaron en 2019 después de que, a finales de agosto, un presunto insurgente, Abdulloh Isomuso Abdulloh, muriera estando bajo custodia militar, trascendiendo que al día siguiente de haber sido detenido cayó en coma. Sin embargo, el Gobierno defendió en todo momento la idoneidad y proporcionalidad de las medidas especiales en el sur del país e incluso, a mediados de noviembre, tanto Bangkok como varios medios de comunicación estuvieron barajando la posibilidad (que finalmente no se concretó) de imponer el toque de queda en el sur del país.

En cuanto a las dinámicas de violencia durante el año, cabe destacar cuatro elementos. En primer lugar, en 2019 se produjo el episodio de violencia más grave de los últimos años. A principios de noviembre, **15 personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un ataque presuntamente insurgente a un control militar en la provincia de Yala.** Aunque el ataque no fue reivindicado por ningún grupo en particular, las autoridades tailandesas lo atribuyeron al BRN, un grupo del que se estima está integrado por unos 8.000 miembros y que raramente reivindica ninguna acción armada. Este ataque confirió una enorme visibilidad mediática al conflicto y abrió un debate sobre el modelo de seguridad y su marco legislativo en el sur del país. Además, en tanto en cuanto la mayor parte de las víctimas eran civiles, el incidente arrojó dudas sobre la estrategia del Gobierno de traspasar determinadas competencias de seguridad y protección a grupos civiles armados, que en la mayoría de ocasiones cuentan con escaso entrenamiento. Según varios analistas, el movimiento insurgente trataba de demostrar su capacidad operativa en el sur del país. En este sentido, en otros momentos del año se produjeron ataques que denotaban un elevado nivel de coordinación, como el estallido simultáneo de varios artefactos en cuatro distritos de Yala a finales de agosto o en varias localizaciones de la provincia de Pattani a principios del mismo mes. Además, durante el Ramadán, a pesar de que el Estado suele reforzar las medidas de seguridad, se produjeron un elevado número de incidentes de violencia en las provincias sureñas de mayoría musulmana. El segundo elemento de preocupación para el Gobierno fue que, al contrario de lo que sucedió en años anteriores, en 2019 no hubo negociaciones de paz activas entre el Gobierno y MARA Patani –una organización paraguas que agrupa a los principales grupos insurgentes del sur del país– puesto que esta se retiró formalmente de las conversaciones en febrero de 2019. Según algunos analistas, esta circunstancia

no solamente obstaculiza una interlocución permanente entre ambas partes en conflicto, sino que dificulta al Gobierno su capacidad de presionar a MARA Patani para que las células operativas sobre el terreno reduzcan los niveles de violencia para demostrar su compromiso hacia las negociaciones de paz. El tercer elemento novedoso fue que en 2019 el movimiento insurgente llevó a cabo atentados en las provincias de Satun y Phatthalung, más al norte de su área habitual de actividad (las provincias de Yala, Pattani, Nrathiwat y parte de Songhka). A principios de agosto, coincidiendo con una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN, cuatro personas resultaron heridas tras el estallido de seis artefactos explosivos simultáneos en varias zonas de la ciudad. La Policía atribuyó tales atentados al BRN y este lo negó. Dos semanas después de los atentados, trascendió que el Gobierno y el BRN se habían reunido en secreto. Finalmente, cabe destacar que en 2019, el movimiento insurgente llevó a cabo ataques contra monjes y templos budistas, después de varios años en los que parecía haber abandonado dicha práctica.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

Se redujo de forma significativa la violencia asociada al conflicto armado en el este de Ucrania, con avances destacados en el proceso de paz y en un contexto de nueva presidencia en el país, si bien el conflicto continuó teniendo impactos en la seguridad humana. En 2019 murieron 391 personas, según la base de datos del centro de investigación ACLED, frente a las 848 de 2018. La Misión de Observación de la OSCE identificó numerosas violaciones del alto el fuego durante el año, que causaron víctimas y daños a infraestructura civil –como viviendas, colegios, instalaciones eléctricas– a causa de bombardeos y uso de armas ligeras en numerosas localidades a lo largo de la línea de contacto, así como presencia de armamento pesado en zonas no autorizadas según los acuerdos de paz de Minsk. En sus informes de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) expresó preocupación similar relativa a las nuevas víctimas civiles y a la presencia de personal militar, posiciones militares y armamento que observó en zonas residenciales o próximas a ellas. También alertó sobre la falta de acceso a servicios básicos, entre otros impactos. En torno a 3,4 millones de civiles necesitaban ayuda humanitaria (1,5 en áreas bajo control del Gobierno y 1,9 en zonas controladas por las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk). La precaria situación de los puntos de control para el cruce de la línea de contacto –escasos, en condiciones deficientes y con cierres temporales– afectó también a la población civil, con varias muertes durante el año de personas por complicaciones de salud mientras cruzaban la línea.

Durante 2019 hubo algunos meses de incremento de víctimas civiles, como en febrero y mayo. Entre las zonas afectadas por la violencia, destacaron Zolote, en la región de Lugansk y la zona entre Popasna, Pervomaisk y Zolote, en Lugansk, así como en zonas del centro de la región de Donetsk, entre otras. Asimismo, drones de la misión civil no armada de supervisión de la OSCE fueron atacados en varias ocasiones en 2019 y, como en períodos anteriores, la misión vio restringido su acceso a zonas bajo control rebelde. Pese a la continuación de las hostilidades, en su conjunto **fue un año de marcado descenso de víctimas mortales y heridos entre población civil.** Entre enero y finales de noviembre, 18 civiles murieron y 126 resultaron heridos (en 2018, 55 civiles murieron y 224 fueron heridos). A pesar de la continuación de violaciones del alto el fuego, las treguas resultaron más robustas. Las partes se comprometieron el 8 de marzo a un nuevo alto el fuego, tras un incremento de las hostilidades en febrero; y de nuevo, el 17 de julio, a otro alto el fuego, éste de carácter ilimitado, si bien las autoridades de Ucrania especificaron que la medida permitía el uso de fuego en respuesta a ataques. Aun así, fue considerado un avance significativo, por su mayor cobertura frente a treguas anteriores, y que tuvo reflejo práctico en el descenso de hostilidades. En diciembre, las partes se comprometieron a la implementación plena e integral

del alto el fuego y de reforzarlo con medidas de apoyo. Otras treguas locales puntuales permitieron llevar a cabo trabajos de reparación de infraestructura civil. Durante el año también **se avanzó en la retirada de fuerzas de Stanytsia Luhanska, Zolote y Petrivske**. Las medidas de retirada de fuerzas generaron algunas protestas en Ucrania por parte de sectores que denunciaron los acuerdos como una rendición.

En relación al contexto regional del conflicto, continuaron las tensiones entre Ucrania y Rusia en el mar de Azov, donde a finales de 2018 Rusia capturó tres barcos ucranianos, detuvo a sus 24 tripulantes, tres de ellos heridos, en un incidente precedido de otros en meses anteriores. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió en mayo un dictamen que exigía como medida provisional la liberación de la tripulación, rechazado por Rusia. A su vez, en julio Ucrania detuvo un petrolero ruso alegando que había sido utilizado en la disputa de finales de 2018. En septiembre, los 24 marinos fueron liberados junto a otras personas en el marco de un intercambio entre Ucrania y Rusia de prisioneros relacionados con el conflicto armado. Por otra parte, **se mantuvo la tensión en torno al control de Crimea por Rusia. ACNUDH alertó en 2019 de la intensificación de registros domiciliarios y redadas por los servicios de seguridad rusos** con una afección desproporcionada sobre la minoría tártara, al amparo de legislación antiextremista rusa. Además, ACNUDH documentó y denunció otras violaciones de derechos humanos en la península. En clave interna, Ucrania fue escenario de elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta el 31 de marzo y el 21 de abril, con la victoria del cómico Volodimir Zelenski, con un 73% de votos y un 62% de participación, frente a su rival y presidente saliente Petro Poroshenko. También se llevaron a cabo elecciones parlamentarias anticipadas el 21 de julio, en las que ganó el partido de Zelenski (“Sluga Narodu”, Servidor del Pueblo), con el 42% del voto y cerca del 50% de participación, seguido de Plataforma de Oposición Por la Vida (13%), de Víctor Medvedchuk, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin. Ambos comicios transcurrieron en calma y de forma competitiva e inclusiva, según organismos internacionales.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto entre el Estado turco y el PKK se recrudeció, principalmente por la campaña militar de Turquía contra el grupo en el norte de Iraq y contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, vinculadas al PKK, mientras también se mantuvo activo dentro de Turquía.

En 2019 también se mantuvo la represión masiva del Estado contra los actores no armados del movimiento nacionalista kurdo. Los balances de víctimas mortales dentro de Turquía difirieron. Según el *think tank* ICG, 468 personas murieron en 2019 por el conflicto, 355 de ellas combatientes del PKK. El centro de investigación ACLED elevó la cifra a 979 (1.966 de 2018, 2.940 en 2017 y 5.237 en 2016). Además, históricamente Ejército y PKK han tendido a ofrecer balances propios muy dispares entre ellos. En Turquía el conflicto armado se materializó principalmente en áreas rurales del sudeste. El Ejército llevó a cabo numerosos bombardeos –incluyendo con drones– y operaciones contra el PKK, con numerosas bajas insurgentes. Las fuerzas de seguridad anunciaron la destrucción de cuantiosa infraestructura de refugio del grupo e incautaron armamento. También impusieron medidas de excepción como “zonas de seguridad” en áreas de operaciones contrainsurgentes, prohibiendo la entrada sin autorización; y numerosos toques de queda indefinidos simultáneos a operaciones militares. El PKK llevó a cabo numerosas acciones bélicas, incluyendo ataques con bomba, artefactos explosivos improvisados y drones cargados de explosivos. El grupo atacó a objetivos como fuerzas del Ejército y la gendarmería, paramilitares de la llamada “guardia rural”, civiles acusados de ser informantes, puestos militares, estaciones de Policía y

vehículos militares, entre otros. Una parte significativa de los ataques del PKK fueron perpetrados por su rama de mujeres, las YJA Star.

Entre los recurrentes incidentes de violencia dentro de Turquía, 12 soldados habrían muerto en un ataque del PKK contra el Ejército junto a un puesto militar en la provincia de Iğdir en enero; el PKK reivindicó un ataque el 18 de marzo contra fuerzas de seguridad en el distrito de Dargeçit (Mardin) el 18 de marzo, y en el marco del cual dos combatientes se inmolaron, causando una veintena de víctimas mortales; operaciones aéreas de las fuerzas de seguridad en el distrito de Yuksekova (Hakkari) el 26 de julio causaron ocho víctimas del PKK; el grupo reivindicó un ataque en septiembre que mató a siete trabajadores e hirió a otros siete en la provincia de Diyarbakir, alegando que eran informantes. Un ataque del PKK contra un vehículo blindado del Ejército el 20 de octubre en un distrito de Mardin mató a 14 miembros del Ejército y a otros tres del PKK en choques posteriores. Diez soldados murieron y otros diez resultaron heridos el 9 noviembre en un ataque del PKK contra unidades del Ejército junto a un puesto militar en un distrito de Van. El Ministerio de Defensa cifró en agosto en 80.570 las operaciones contra el PKK en los primeros ocho meses del año, y en 635 los miembros del PKK “neutralizados” (término del Ejército para referirse a víctimas insurgentes, detenidos o entregados). En todo caso, los balances de víctimas de cada parte fueron cuestionados. El conflicto transcurrió principalmente en áreas rurales, pero también **fueron numerosos los ataques de pequeña escala**

en forma de guerrilla urbana contra objetivos civiles por parte de grupos vinculados a las YPS, actor armado vinculado al PKK integrado principalmente por jóvenes y partícipe de la violencia urbana de 2015, con ataques contra domicilios particulares, vehículos y empresas, de civiles vinculados al partido en el gobierno, el AKP, y contra objetivos policiales. Los ataques causaron diversos heridos y daños materiales en diferentes localidades.

El conflicto también se materializó de forma intensa en el norte de Iraq, con operaciones aéreas y terrestres del Ejército turco contra el PKK en el país vecino durante todo el año.²⁵ Tras ataques del Ejército en enero que causaron víctimas civiles, un grupo de civiles kurdos de Iraq atacaron ese mes una base militar de Turquía. Dos manifestantes murieron y una quincena resultaron heridos por disparos de los soldados. **El Ejército turco lanzó en mayo y julio las operaciones Claw 1 y Claw 2 en la región de Hakurk del norte de Iraq, junto a las montañas de Qandil, donde el PKK tiene sus principales bases, con el objetivo de incrementar la presión contra el PKK** en esta zona. En agosto lanzó la operación Claw 3. Asimismo, Turquía mató a un alto cargo del PKK en Qandil en junio, identificado como Diyar Gharib Muhammed,

considerado responsable del PKK en Iraq y miembro del comité central del PKK. Algunos análisis señalaron que se trataría de la primera muerte de un dirigente del grupo por una acción ofensiva en Qandil desde 1984. A su vez, fue asesinado en Erbil, la capital kurda del norte de Iraq, Osman Kose, diplomático de Turquía en misión especial en la región. Su muerte fue atribuida al PKK. El grupo negó estar involucrado, mientras uno de sus líderes felicitó públicamente a los perpetradores.

Otro escenario del conflicto en 2019 fue el norte de Siria, donde Turquía intensificó su presión contra las milicias kurdas YPG,²⁶ vinculadas al PKK, a las que Turquía y algunos analistas consideran parte integral del PKK. Turquía lanzó en octubre una operación militar junto a sus aliadas milicias del Ejército Nacional Sirio, con luz verde de EEUU –que retiró sus tropas– para establecer una zona sin presencia de las YPG en parte de la frontera. Fruto del acuerdo entre Turquía, Rusia y Siria, así como del pacto entre Turquía y EEUU, la operación forzó la retirada de las YPG y de su armamento 30 kilómetros hacia el interior de Siria. Amnistía

Internacional y otras organizaciones denunciaron crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos por parte de Turquía y sus fuerzas aliadas en la operación, que desplazó inicialmente a unos 200.000 civiles. A su vez, las YPG, el régimen sirio y Rusia pactaron la vuelta de fuerzas sirias a zonas bajo control kurdo. Algunos análisis señalaron que las dinámicas de 2019 suponían el fin de la autoproclamada autonomía de mayoría kurda bajo control de las YPG. La

autonomía política y control territorial por parte de las YPG en una zona que extendía al este del Éufrates había sido denunciada por Turquía como una línea roja para su seguridad de Estado, en el marco de su conflicto con el PKK. Medios de comunicación informaron del lanzamiento de proyectiles de mortero y cohetes desde la frontera siria por parte de las YPG contra objetivos de Turquía, con diversas víctimas mortales y varias decenas de heridos civiles en localidades de Turquía.

En varios momentos del año, y como en años anteriores, autoridades turcas amenazaron con destruir al PKK, mientras algunos análisis señalaron las dificultades de acabar por la vía militar con una fuerza de dimensión regional y capacidad de adaptación a nuevos métodos de guerra como el PKK. Por otra parte, **durante el año Turquía autorizó varias visitas al líder del PKK encarcelado, Abdullah Öcalan**, incluyendo por parte de un familiar, sus abogados –por primera vez en ocho años– y un académico. La medida fue interpretada de diversas maneras por analistas y medios periodísticos, incluyendo la posibilidad de que estuviera encaminada a favorecer nuevos intentos de negociaciones de paz; que respondiera a intereses electorales para capitalizar

25. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

26. Véase el resumen sobre de Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

voto kurdo en el contexto de las elecciones locales del 31 de marzo en Turquía; así como se enmarca en un intento de aplacar la huelga masiva de hambre de presos kurdos iniciada a finales de 2018. El partido prokurdo no presentó candidatos en diversas grandes ciudades, para favorecer la victoria de candidaturas opositoras al AKP, como en el caso de Estambul, donde el candidato del CHP, Ekrem İmamoğlu, ganó la repetición de los comicios en junio, tras ser anulados los resultados de marzo en esa ciudad. El HDP retuvo numerosas alcaldías del sudeste, si bien el Gobierno mantuvo su política de años anteriores e impuso **el cese forzado de numerosas alcaldías electas del HDP y su sustitución por funcionarios estatales, bloqueando la acción política legal del partido prokurdo**. La medida fue denunciada por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, así como por la Presidencia del Congreso de autoridades locales y regionales del Consejo de Europa, entre otros. Además, fue acompañada de detenciones masivas bajo acusaciones de apoyo al PKK, como las 418 detenciones del 19 de agosto, la mayoría miembros del HDP. El movimiento kurdo calificó de golpe político el conjunto de medidas y se desencadenaron numerosas protestas en múltiples localidades, reprimidas por las fuerzas de seguridad.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shií, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto

a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán.

Durante 2019 el conflicto armado en Yemen registró una tendencia similar a la del año anterior. Prácticamente todo el año se produjeron hechos de violencia que pusieron en entredicho los intentos por implementar el acuerdo de paz alcanzado en 2018 entre las fuerzas al-houthistas y las del Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi apoyadas por la coalición internacional encabezada por Riad.²⁷ Las dinámicas del conflicto también se vieron afectadas por el incremento de las tensiones en la región entre, por un lado, EEUU y Arabia Saudita, y, por otro, Irán, acusado de dar apoyo a los al-houthistas. Paralelamente, **se intensificaron de manera significativa las tensiones y enfrentamientos dentro del frente anti al-houthista, entre fuerzas leales a Hadi y sectores separatistas del sur**. Pese a la complejidad del escenario yemení, y al igual que en 2018, en los últimos meses del año se produjeron algunos hechos que favorecieron una desescalada de la violencia y que alimentaban expectativas limitadas sobre la configuración de un contexto más favorable a una salida negociada al conflicto. En términos generales, sin embargo, los niveles de violencia continuaron siendo muy elevados y el conflicto continuó siendo calificado como uno de los de mayor intensidad de todo el mundo. **Las cifras de letalidad siguieron siendo difíciles de contrastar, pero los datos proporcionados por centros de investigación como ACLED apuntaron a que durante 2019 habrían muerto unas 23.000 personas a causa de las hostilidades**. Esta cifra es relativamente inferior a la estimada para 2018, de unas 30.000 víctimas mortales, también según ACLED. De acuerdo a esta organización, el balance total de personas fallecidas por el conflicto armado yemení desde la escalada de violencia en 2015 superaría las 100.000. De este total, unas 12.000 serían víctimas civiles muertas en ataques directos, la mayoría cometidos por la coalición liderada por Riad. El comité de expertos de la ONU sobre Yemen que analiza la situación en el país desde 2014 constató en su informe de septiembre de 2019 la falta de colaboración de diversos actores

27. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

para investigar las violaciones a los derechos humanos perpetrados en el país. Pese a ello, las evidencias recopiladas ratificaron que todas las partes involucradas en la contienda han cometido abusos y vulneraciones al derecho internacional humanitario, incluyendo hechos constitutivos de crímenes de guerra. Entre los abusos se denunciaron ataques aéreos indiscriminados, uso de minas, bloqueos, asedios, arrestos arbitrarios, torturas, violencia sexual y reclutamiento de menores. La crisis humanitaria de Yemen siguió siendo considerada como la peor del mundo por Naciones Unidas.

Respecto a la evolución del conflicto, **en los primeros meses del año quedaron en evidencia las dificultades para poner en práctica el llamado Acuerdo de Estocolmo, que se firmó a finales de 2018 bajo los auspicios de la ONU.** Entre sus componentes, el pacto incluía un alto el fuego en el puerto de Hodeida y dio pie al establecimiento de una misión de supervisión de la tregua por parte de la ONU (UNMHA). Las fuerzas al-houthistas y pro-Hadi, sin embargo, se resistieron a replegarse de Hodeida por diferencias respecto a la composición de las fuerzas de seguridad que asumirían el control de la zona. **En paralelo, continuaron los enfrentamientos y otros hechos de violencia en el norte del país, en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudita y principalmente en las provincias de Saada, Hajjah y al-Jawf.** En esta última también se produjeron enfrentamientos entre los al-houthistas y grupos tribales de Hajour que dejaron decenas de víctimas mortales. Las fuerzas al-houthistas también lanzaron diversos ataques contra objetivos en Arabia Saudita, entre ellos aeropuertos y oleoductos. Algunos de ellos fueron interceptados por Riad, que también atacó territorio yemení. Según destacó ACLED, si bien se redujeron los ataques de la coalición liderada por los saudíes en Yemen, continuaron registrándose ofensivas con un alto número de bajas civiles. Uno de los incidentes más cruentos se produjo en septiembre, cuando un ataque saudí contra un edificio que los al-houthistas utilizaban como prisión causó la muerte a más de un centenar de personas. También en septiembre, **instalaciones de la compañía estatal saudí fueron atacadas con proyectiles en Abqaiq y Khurais (este de Arabia Saudita) en un incidente que fue reivindicado por los al-houthistas, pero del que EEUU, Riad y países europeos responsabilizaron a Irán.** Este hecho reflejó el escenario de tensiones regionales e internacionales en Oriente Medio y su particular proyección en Yemen. Adicionalmente, durante 2019 también se produjeron choques armados entre al-houthistas y grupos del sur, en especial en las provincias de Al-Dhalee, Abyan y Lahj.

En paralelo, **a lo largo del año se hicieron patentes las crecientes tensiones en el bando anti al-houthista, con enfrentamientos periódicos y cada vez más significativos entre fuerzas de Hadi y sectores secesionistas del sur**

vinculados al Southern Transitional Council (STC), apoyados por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los incidentes más graves se produjeron en Taiz y sobre todo en la localidad de Adén. Esta última ciudad fue escenario de los mayores niveles de violencia desde 2015. En agosto, un ataque con misiles contra combatientes del grupo armado sureño Security Belt causó decenas de víctimas mortales durante un desfile militar, entre ellos uno de sus comandantes más destacados, Munir “Abu al-Yamana” al-Yafei. Aunque la ofensiva fue reivindicada por los al-houthistas, sectores secesionistas acusaron a las fuerzas leales a Hadi, en particular al partido islamista Islah, de responsabilidad en el ataque. En este contexto, fuerzas sureñas intentaron consolidar el control sobre el territorio del antiguo Yemen del sur, independiente hasta 1990. El Gobierno de Hadi acusó a EAU de dar apoyo a esta campaña de los secesionistas del sur y lanzó una contraofensiva. La escalada de violencia dejó decenas de víctimas mortales y personas heridas, incluyendo civiles, además de serios daños a la infraestructura de Adén. Ante este escenario, Arabia Saudita llamó a las partes a mantener conversaciones en Jeddah para resolver sus diferencias. **Después de casi tres meses de confrontación, los contactos derivaron en el llamado Acuerdo de Riad, firmado por las partes el 5 de noviembre y considerado como una fórmula para evitar una nueva guerra dentro del conflicto armado en Yemen.** El acuerdo incluye la formación de un nuevo gobierno con el mismo número de representantes del norte y del sur, la integración de las fuerzas afiliadas al Consejo Transicional del Sur (STC) en las estructuras militares y de seguridad nacionales, el repliegue de combatientes y armas pesadas de las zonas urbanas del sur yemení y también que el STC deberá ser incluido en la delegación de gobierno en futuras negociaciones que se mantengan con los al-houthistas para poner fin al conflicto armado en el país, en el marco del proceso de paz auspiciado por la ONU.

En Yemen, durante todo el año se produjeron hechos de violencia que pusieron en entredicho los intentos por implementar el acuerdo de paz alcanzado en 2018 entre las fuerzas al-houthistas y las del Gobierno de Hadi

La firma de este acuerdo coincidió con una reducción de las hostilidades entre los al-houthistas y las fuerzas de Hadi y la coalición saudí en el último trimestre del año. En noviembre, el enviado especial de la ONU para Yemen informó que los ataques aéreos saudíes se habían reducido un 80%, tras la decisión de los al-houthistas de declarar un cese el fuego unilateral en septiembre. Según trascendió, hacia finales de año se mantenían contactos informales entre Riad y los al-houthistas para mantener la desescalada en la zona fronteriza. Pese a la tregua parcial, organizaciones humanitarias continuaron alertando sobre incidentes con víctimas civiles, incluyendo miles de migrantes y personas refugiadas –somalíes y etíopes en su mayoría– a lo largo de la frontera. Al finalizar el año, en el sur se mantenía la tregua en términos generales, pero en medio de brotes de violencia, fuertes tensiones entre las partes y bloqueos en la implementación del pacto.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Al- Qaeda en la Península Árabe (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Árabe (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh (2011), AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. El grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que en los últimos años ha reivindicado diversas acciones en el país.

El conflicto armado protagonizado por AQPA y, más recientemente, por ISIS continuó viéndose parcialmente eclipsado por las dinámicas de la contienda entre los al-houthistas y el Gobierno de Abdo Rabo Mansour Hadi y en la que también participan sectores secesionistas del sur.²⁸ Pese a ello, **durante el año se informó de varios hechos de violencia protagonizados por las filiales de al Qaeda e ISIS en el país y diversos análisis apuntaron que estas organizaciones continuaban intentando aprovechar las hostilidades en el país para reforzar sus posiciones, principalmente en el sur.** El conflicto continuó siendo de baja intensidad, aunque el balance de víctimas resulta difícil de precisar. Uno de los incidentes más graves se habría producido en agosto, cuando milicianos de AQPA atacaron un campamento militar en la provincia de Abyan (sur) provocando la muerte de 20 personas, tras varias horas de enfrentamientos.

28. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

Los fallecidos formaban parte de un grupo que recibía entrenamiento de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que integra la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudita que desde 2015 enfrenta a los al-houthistas. La ofensiva de AQPA estuvo precedida por dos sangrientos ataques en Adén, uno de los cuales un ataque suicida reivindicado por ISIS que provocó la muerte a 11 personas. En julio, también se informó de otro ataque atribuido a AQPA contra un puesto de control militar que habría provocado la muerte de cinco soldados.

En un contexto inestabilidad agudizado por la creciente pugna entre fuerzas del Gobierno de Hadi y sectores separatistas del sur vinculados al Southern Transitional Council (STC), se intensificaron –sobre todo a partir de agosto– algunas operaciones contra al-Qaeda para evitar que capitalizara el clima de desestabilización. Así, se informó de ataques aéreos de EAU, aliado del STC, contra posiciones de AQPA ante informaciones que apuntaban a la movilización de combatientes de al-Qaeda en la zona de Abyan. Un número indeterminado de militantes de AQPA habrían fallecido en otros ataques de EAU en las afueras de Adén, según fuentes yemeníes citadas por la prensa. No obstante, representantes del Gobierno de Hadi reprobaron algunos de los ataques de EAU asegurando que habían causado bajas entre soldados yemeníes. **En septiembre informaciones de prensa aseguraron que milicianos de AQPA habían tomado control del distrito de Wadea, en Abyan, una provincia que ha estado de manera intermitente bajo control parcial de al-Qaeda en los últimos años.** En 2017 fuerzas vinculadas al STC habían expulsado a AQPA de esta zona. A lo largo de 2019 también se informó de algunos incidentes entre supuestos miembros de AQPA y del STC. Adicionalmente, EEUU continuó siendo un actor relevante en este conflicto. En mayo informaciones de prensa atribuyeron a fuerzas estadounidenses un ataque con dron que habría causado la muerte de cuatro presuntos milicianos de al-Qaeda en la provincia de Bayda. Según trascendió, otros dos habrían muerto en otra ofensiva de un avión tripulado estadounidense en la provincia de Maarib, en noviembre. Cabe destacar también que en octubre el presidente estadounidense también confirmó oficialmente la muerte del jefe de fabricación de explosivos de al-Qaeda Ibrahim al-Asiri durante una operación en Yemen realizada hace dos años y que en noviembre Washington ofreció recompensas por un valor de diez millones de dólares a quienes entregaran información conducente a la captura de dos altos cargos de AQPA: Saad bin Atef al Aulaki y Ibrahim Ahmed Mahmud al Qosi. Además, en junio se informó de la captura del líder de ISIS en Yemen, Abu Sulayman al Adnani, conocido como Abu Usaman al Muhajir. El dirigente fue interceptado en una operación de las fuerzas navales saudíes en colaboración con fuerzas especiales yemeníes.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado que enfrenta principalmente a las fuerzas de seguridad egipcias y a la filial del grupo armado ISIS en el país continuó concentrándose en la provincia Norte del Sinaí, en especial en las localidades de Arish (capital), Sheikh Zuweid y Rafah (fronteriza con Gaza), y provocó la muerte de cientos de personas en 2019. Como en años previos, el balance de víctimas del conflicto fue difícil de precisar debido a las ambigüedades de los reportes oficiales –que a menudo omiten las bajas entre las fuerzas de seguridad y no especifican lugares de los incidentes o períodos a los que corresponden los recuentos de personas fallecidas–; las informaciones difundidas por el grupo armado en tono de propaganda y las restricciones a la prensa y ONG para verificar la situación en terreno. Pese a ello, **recuentos parciales a partir de informaciones de prensa indicarían que al menos 500 personas perdieron la vida a causa de este conflicto durante 2019. Balances**

de organizaciones como ACLED apuntan incluso a un número mayor de personas fallecidas, con un total de 1.233 hasta finalizar el año. En noviembre, la filial de ISIS hizo público su propio balance de operaciones en el Sinaí durante el año islámico 1444 (septiembre de 2018 a agosto de 2019), indicando que en ese período había perpetrado 227 ataques y provocado la muerte o heridas a 463 personas. Durante 2019 la filial de ISIS anunció planes de expansión de sus actividades hacia la zona sur de la provincia, incluyendo el área del Mar Rojo, que alberga numerosos activos turísticos, y también declaró su lealtad al nuevo líder de la organización, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, tras la muerte en Siria de Abu Bakr al-Baghdadi en un ataque de EEUU.

En línea con lo observado en años anteriores, la violencia se materializó en ataques de milicianos y ofensivas con explosivos por parte de ISIS en muchos casos contra instalaciones militares, en carreteras o puestos de control. En febrero el grupo perpetró un ataque –reconocido por el Ejército– cerca del aeropuerto de Arish en el que murieron una docena de soldados y que fue considerado como la ofensiva más cruenta de ISIS en varios meses. **El grupo autodenominado Provincia del Sinaí también reivindicó ataques contra civiles y en 2019 destacaron varios casos de secuestros y decapitaciones de personas acusadas de ser informantes o colaboradoras del Ejército egipcio.** Las fuerzas de seguridad, en tanto, continuaron con sus ofensivas militares en el marco de su campaña “Sinaí 2018” lanzada a principios del año anterior. Durante el año también se informó de diversas redadas que acabaron con la muerte de decenas de presuntos militantes, en repetidas ocasiones tan solo días después de ataques perpetrados o atribuidos a ISIS u otros grupos armados. Así, por ejemplo, tras un ataque explosivo en la zona turística de las pirámides Giza en mayo que hirió a 17 personas se informó de la ejecución de 12 presuntos miembros de Hasm, aunque oficialmente no se vincularon ambos hechos. En agosto otra ofensiva atribuida a Hasm en El Cairo provocó la muerte a 22 personas y derivó en días posteriores en la muerte de 17 presuntos integrantes del grupo, que negó tener responsabilidad en el ataque. El Gobierno acusa a Hasm de vínculos con los Hermanos Musulmanes, pero esta última organización desmiente cualquier conexión.

En este contexto, **organizaciones de derechos humanos acusaron tanto a las fuerzas de seguridad egipcias como a la filial de ISIS de abusos sistemáticos contra la población civil, algunos constitutivos de crímenes de guerra.** ONG locales e internacionales alertaron sobre las muertes en el marco de redadas de la Policía y el Ejército o tras períodos de detención arbitraria, que denunciaron como ejecuciones extrajudiciales. Un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado en mayo, centrado en los abusos de las fuerzas oficiales desde 2014, denunció torturas y también ejecuciones –al menos 20 documentadas en los últimos años– de personas detenidas de manera secreta en instalaciones de las fuerzas de seguridad en bases militares ubicadas en Norte del Sinaí

y en la vecina provincia de Ismailya.²⁹ El informe alertó también sobre el papel que estarían jugando milicias integradas por personas reclutadas por el Ejército en Norte del Sinaí, también involucradas en detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones. HRW también señaló las dificultades para identificar a las víctimas civiles del conflicto, debido a que las autoridades no proporcionan datos sobre la cuestión y a menudo las incluyen como milicianos en los balances de fallecidos. En materia de desplazamiento forzado, se estimaba que unas 100.000 personas residentes en Norte Sinaí –una quinta parte de la población de la zona– había sido expulsada de sus hogares y que el Ejército había demolido miles de viviendas. El centro de estudios Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), con sede en Washington, ha contabilizado al menos 12.000 residentes del Sinaí detenidos entre julio de 2013 –fecha de la escalada del conflicto– y diciembre de 2018, el doble de la cifra reconocida por las autoridades egipcias. Cabe destacar, además, que el conflicto se desarrolla en un contexto de estado de emergencia en el país, que ha sido renovado periódicamente desde un doble ataque a iglesias coptas en 2017, y de imposición de toque de queda nocturno vigente en el Sinaí desde 2014. A esto se suma el creciente autoritarismo, la consolidación del poder militar y persecución a la disidencia en Egipto. Durante 2019 estas tendencias se evidenciaron, entre otros hechos, en la aprobación de una reforma constitucional que amplía los mandatos presidenciales –abriendo la posibilidad a que el general y actual presidente Abdel Fatah al-Sisi permanezca en el cargo hasta 2030– y en los arrestos de más de 4.000 personas por su participación en manifestaciones contra el régimen.³⁰

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores:

tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

En línea con la tendencia observada el año anterior, los niveles de violencia del conflicto armado en Iraq descendieron respecto al período 2014-2017 –en los que se llegaron a contabilizar entre 10.000 y hasta 20.000 víctimas mortales civiles anuales–, aunque el país continuó situándose entre los conflictos más graves a nivel mundial. Según el balance de la organización Iraq Body Count (IBC), al menos 2.392 civiles murieron producto de la violencia del conflicto, en comparación con las 3.319 muertes civiles en 2018. **La situación en el país estuvo marcada por la continuación de la campaña gubernamental contra el grupo armado ISIS – que, aunque debilitado, continuó perpetrando múltiples acciones en el país– y por el impacto en Iraq de la disputa y competencia estratégica entre EEUU e Irán –ambos actores interesados e implicados en el control los asuntos internos iraquíes–, con una creciente participación de Israel en ofensivas armadas en el país.** Paralelamente, durante 2019 Iraq fue escenario de masivas protestas populares que derivaron en una grave escalada de violencia con más de 400 víctimas mortales, en una crisis de gobierno y en un cuestionamiento al conjunto del sistema político iraquí.³¹

Respecto a ISIS, aunque el Gobierno iraquí proclamó el fin de la lucha contra el grupo a finales de 2017 tras infligirle varias derrotas, en 2019 la organización siguió reivindicando acciones armadas en diferentes zonas de Iraq. Entre ellas, las provincias de Salah-al-Din, Nineveh, Anbar, Suleimaniya, Diyala, Kirkuk, Najaf y el norte de Bagdad. Sus ofensivas se concretaron principalmente en la detonación de coches bomba; operaciones suicidas; colocación de explosivos en carreteras; tiroteos, emboscadas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad iraquíes y con milicias shiíes de las Unidades de Movilización Popular (UMP)

29. Human Rights Watch, “If You Are Afraid for Your Lives, Leave Sinai!” *Egyptian Security Forces and ISIS affiliate Abuses in North Sinai*, HRW, 31 de mayo de 2019.

30. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

31. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 2 (Tensiones).

o Hashd al-Shaabi; ataques armados contra peregrinos shíites; secuestros y extorsiones a civiles; y ejecuciones de personas acusadas de ser “colaboradoras”, entre otras acciones. A mediados de año las fuerzas militares y antiterroristas iraquíes intensificaron su campaña contra el grupo, en el marco de operaciones como “Nuevo Amanecer”, en la provincia de Kirkuk o “Deseo de Victoria”, en Diyala. En este contexto, también se incrementaron los choques entre las UMP e ISIS. **Algunos análisis sobre ISIS destacaron que, si bien el grupo ha decaído significativamente en comparación con la fuerza que consiguió tener entre 2014 y 2015, en particular en Iraq y Siria, no es posible descartar que la organización intente resurgir aprovechando algunas dinámicas en Iraq.** Entre ellas, la inestabilidad o el impacto de interferencias externas que podrían favorecer su reactivación, más allá de las áreas montañosas y mayoritariamente desérticas en las que ha operado. Personas expertas también advirtieron sobre la necesidad de que las autoridades iraquíes prioricen la reconstrucción de las zonas que estuvieron bajo el dominio de ISIS, favorezcan un retorno sostenible de la población desplazada y eviten una estigmatización crónica de las familias de combatientes del grupo.

En cuanto a la proyección en Iraq de la disputa entre EEUU e Irán, que se intensificó en 2019,³² el país fue un escenario más para la confrontación estratégica entre ambas potencias. La competencia entre Washington y Teherán por influir y condicionar las decisiones del Gobierno iraquí se hizo evidente desde principios de año, como quedó patente en las visitas de alto nivel a Iraq, en las demandas y advertencias a sus dirigentes y en los intentos de Bagdad por mantenerse neutral. En el caso de EEUU, los últimos días de 2018 el presidente Donald Trump visitó sorpresivamente una base militar estadounidense en la provincia de Anbar y reafirmó la intención de mantener tropas en Iraq, mientras que en febrero señaló que la presencia militar en el país tenía como finalidad “vigilar a Irán”. Ante ello, parlamentarios iraquíes shíites de distintas formaciones políticas plantearon la necesidad de poner fin a esta presencia militar y a los acuerdos de cooperación en seguridad con EEUU. A lo largo del año, Washington también intentó presionar a Bagdad para que cesara las importaciones de gas iraní y aunque decretó sucesivos ultimátum a las autoridades iraquíes, continuó sin aplicar en este caso el régimen de sanciones. En el caso de Irán, el presidente Hassan Rouhani realizó su primera visita a Iraq en marzo y firmó diversos convenios de colaboración bilateral. Durante su viaje, también se reunió con el principal líder shií iraquí, el ayatollah Ali al-Sistani, quien le habría insistido en que las autoridades iraquíes debían asumir el control total de las milicias UMP, teniendo en cuenta que algunos de

sus grupos son considerados como leales a Teherán y a la Guardia Revolucionaria iraní.

En este trasfondo, **el incremento de la tensión entre Washington y Teherán y una serie de hechos de violencia que afectaron tanto a intereses de EEUU como de Irán en territorio iraquí agravaron la situación a partir de mayo.** Por un lado, se registraron diversos ataques contra objetivos estadounidenses, entre ellos disparos de proyectiles y cohetes contra la embajada en Bagdad y contra bases militares e instalaciones de empresas estadounidenses. EEUU retiró a parte de su personal diplomático y empresas estadounidenses como Exxon Mobil evacuaron a sus trabajadores no iraquíes. El secretario de Estado de EEUU subrayó la responsabilidad de Iraq en la protección de sus ciudadanos y sus tropas ante eventuales ataques de milicias pro-iraníes. En este contexto, el primer ministro iraquí aprobó, en julio, un decreto para integrar a las milicias respaldadas por Irán bajo su mando e integrarlas en las fuerzas de seguridad iraquíes. Paralelamente, se informó de un

El conflicto armado en Iraq se caracterizó en 2019 por la persistencia de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado ISIS y por la creciente proyección en el país de la disputa entre Irán y EEUU

ataque desde un avión no tripulado contra una base militar en la provincia de Salah-al-Din en la que se encontraban miembros de la Guardia Revolucionaria –EEUU negó cualquier responsabilidad–, seguido días más tarde de varias ofensivas de aviones israelíes contra bases militares iraquíes que presuntamente albergaban armas y asesores iraníes, uno de los cuales murió. En agosto, nuevas ofensivas presuntamente israelíes contra instalaciones de milicias shíites respaldadas por Teherán causaron la muerte de otras tres personas, motivando que el bloque parlamentario pro-iraní (Alianza Fatah) denunciara la responsabilidad de EEUU e Israel, calificara estas acciones como una declaración de guerra a Iraq e insistiera en la retirada de las tropas estadounidenses del país. En septiembre, un ataque con dron no reivindicado provocó la muerte de 21 integrantes de las UMP en la provincia de Anbar. El primer ministro iraquí responsabilizó entonces a Israel de los ataques. La mayor escalada se produjo en diciembre: a lo largo del mes se produjeron diversos ataques contra bases militares y objetivos de EEUU y en uno de ellos, a finales de año, murió un contratista estadounidense en Kirkuk. En respuesta, Washington atacó bases de la milicia pro-iraní Kataib Hezbollah –parte de las UMP– causando 25 muertes. Esta ofensiva alentó protestas ante la embajada de EEUU en Bagdad, rodeada por manifestantes y milicias pro iraníes que acabaron ingresando al complejo. En este contexto, **a principios de enero de 2020 EEUU lanzó un ataque en Bagdad en el que murió el alto general iraní Qassem Soleimani, jefe de las Brigadas al-Quds, y otros altos cargos de milicias pro-iraníes, en un hecho que incrementó significativamente la tensión Washington-Teherán** y con previsibles efectos desestabilizadores en la región.

32. Véase el resumen sobre Irán – EEUU, Israel en el capítulo 2 (Tensiones).

Cabe destacar que durante el último trimestre el conflicto armado en Iraq transcurrió en paralelo a crecientes manifestaciones populares que desembocaron en la renuncia del primer ministro en diciembre. Aunque se centraron en cuestiones domésticas, las protestas también tuvieron un componente anti-iraní, en parte por el papel de milicias pro-Teherán en la dura represión de las movilizaciones. Teherán subrayó entonces la coincidencia de las movilizaciones en Iraq, Líbano – ambos en su radio de influencia– y en el propio Irán y las atribuyó a un complot foráneo. Finalmente, cabe mencionar que durante el año se produjeron continuos ataques de Turquía contra posiciones del PKK en el norte del territorio iraquí que causaron la muerte a decenas de personas.³³

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³⁴
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Después de la escalada registrada en 2018 –año de los incidentes más graves desde 2014, sobre todo debido a la represión israelí de las movilizaciones palestinas en el marco de la llamada Gran Marcha del Retorno en Gaza–, los niveles de violencia directa del conflicto palestino-israelí se redujeron durante 2019. **De acuerdo**

con los balances proporcionados por OCHA, durante el año un total de 144 personas murieron a causa de hechos de violencia vinculados al conflicto, menos de la mitad que el año anterior, en el que se contabilizaron 313 fallecimientos. Del total de víctimas mortales en 2019, 134 eran palestinas y 10 israelíes; mientras que el número de personas heridas en el mismo período fue de 15.479 palestinas y 121 israelíes. Al igual que en años anteriores, la mayor parte de los incidentes se concentraron en Gaza y en los alrededores de la barrera fronteriza entre la Franja e Israel. Los hechos de violencia se materializaron principalmente en la represión israelí de protestas palestinas, ataques israelíes contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, lanzamientos de cohetes y proyectiles por parte de estos grupos palestinos hacia Israel e incidentes con aviones no tripulados. Los hechos más graves se produjeron en mayo y noviembre. En mayo, el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas israelíes contra los manifestantes palestinos motivó que las facciones palestinas lanzaran más de 700 cohetes contra territorio israelí, a lo que Israel respondió con más de 300 ataques aéreos sobre la Franja. 24 palestinos y cuatro israelíes murieron en esta escalada de violencia. En noviembre, en tanto, cohetes lanzados desde Gaza alcanzaron la localidad de Sderot, motivando ataques aéreos israelíes en los días siguientes. En uno de ellos murió un alto cargo de la Yihad Islámica y su esposa, hecho que provocó una ofensiva de este grupo armado, que disparó cerca de 450 proyectiles hacia Israel, la mayoría de los cuales impactaron en campos o fueron interceptados por las fuerzas israelíes. La respuesta israelí fue una intensa ofensiva aérea en la que murieron 34 personas palestinas, entre ellas 16 civiles. Durante el año, y después de este tipo de escaladas de violencia, las autoridades egipcias y también el enviado especial de la ONU para Oriente Medio mediaron para asegurar el restablecimiento del cese del fuego entre Israel y los grupos palestinos de la Franja.³⁵ En el marco de estas dinámicas de violencia y treguas, durante el año Israel decretó sucesivos cierres y aperturas de pasos fronterizos, así como restricciones y ampliaciones del área de pesca en algunas zonas de Gaza. Durante 2019 también se produjeron algunos incidentes violentos en Cisjordania y en Jerusalén, entre ellos la represión israelí de protestas en las proximidades de Ramallah o en Hebrón y enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes en la zona de la Explanada de las Mezquitas. Asimismo, se produjeron incidentes entre palestinos y colonos israelíes en áreas próximas a asentamientos.

Durante el año, las dinámicas del conflicto se vieron influidas también por el clima electoral en Israel, que celebró comicios en abril y septiembre, sin que los

33. Véase resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

34. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

35. Véase el resumen sobre el proceso de paz palestino-israelí en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

resultados permitieran al primer ministro conformar gobierno. En este contexto, **a lo largo de 2019 continuaron las políticas destinadas a profundizar la ocupación de los territorios palestinos, a través de medidas como la aprobación de demoliciones de edificios de viviendas palestinas en Jerusalén Oriental o los permisos para la construcción de más de 7.000 viviendas israelíes en el área C de Cisjordania.** En septiembre, en vísperas de las segundas elecciones israelíes en un año, Netanyahu prometió que de ser reelegido anexionaría a Israel el Valle del Jordán y los asentamientos israelíes de Hebrón y subrayó que pretendía hacerlo en máxima coordinación con el presidente de EEUU, Donald Trump. **El plan de Netanyahu para incorporar hasta un tercio de los territorios ocupados palestinos a Israel fue condenado por la Autoridad Palestina, los países árabes, la ONU y la UE.** No obstante, los posicionamientos del primer ministro y del Gobierno israelí se vieron reforzados por la política de Washington hacia Oriente Medio y su sesgo explícito en favor de los intereses de Israel. Tras el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y la suspensión de la ayuda a la agencia de la ONU para las personas refugiadas palestinas (UNRWA) en 2018, **en noviembre de 2019 la Casa Blanca decretó que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos no eran ilegales. Previamente, en marzo, Washington había reconocido como israelíes los territorios de los Altos del Golán sirios ocupados por Israel desde la guerra de 1967.**³⁶

A esto se suma el plan de paz para Oriente Medio promovido por el yerno de Trump y Director de Innovaciones de la Casa Blanca, Jared Kushner, que siguió sin presentarse públicamente, y la iniciativa “Prosperidad para la Paz” que tuvo lugar en Bahrein, en junio, apostando por inversiones y recursos económicos para Palestina. Esta última iniciativa fue rechazada por la Autoridad Palestina y fue denunciada con protestas masivas de la población palestina durante los días de celebración del encuentro en Bahrein. En este contexto, durante 2019 las autoridades palestinas se mostraron favorables a retomar negociaciones con Israel, pero no con EEUU como valedor por su pérdida de credibilidad para la mediación, y expresaron su preferencia por un proceso bajo los auspicios de Rusia y de la comunidad internacional. En una línea contraria a los intereses israelíes, **al finalizar el año la Corte Penal Internacional anunció tras años de investigaciones preliminares que había evidencias suficientes para investigar las denuncias de crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén y Gaza.** Aun así, estaba pendiente que la CPI confirmara su jurisdicción sobre los territorios ocupados palestinos. Finalmente, cabe mencionar que durante 2019 Israel expulsó al director para Israel y Palestina de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch, Omar

Shakir, ciudadano estadounidense y la primera persona en ser expulsada tras la aprobación en 2017 de una polémica norma que permite al Gobierno israelí deportar a personas que apoyan el boicot a Israel o denuncian los asentamientos israelíes.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Los niveles de violencia del conflicto palestino-israelí se redujeron en 2019 en comparación con el año anterior, marcado por la represión a las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno en Gaza

Un año más, Siria continuó siendo escenario de elevados niveles de violencia en el marco de un conflicto armado caracterizado por la participación de numerosos actores armados; la significativa influencia de los intereses y estrategias de actores regionales e internacionales en la evolución de las hostilidades; enfrentamientos que afectaron diversas zonas del país, con dinámicas específicas en los diferentes frentes de batalla; y gravísimos impactos en la población civil. **Pese a las persistentes dificultades para establecer un balance general del impacto**

36. Véase el resumen sobre Israel – Siria, Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

de la violencia, la información disponible permite concluir que el número de personas fallecidas a causa del conflicto durante 2019 sería menor a la registrada en 2018. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR) con base en Reino Unido, al menos 11.200 personas habrían fallecido a causa del conflicto en 2019, entre ellas cerca de 3.500 civiles, mientras que en 2018 el balance de esta organización fue de 20.000 personas. De acuerdo a los datos de ACLED, en tanto, el balance de víctimas mortales por la violencia en Siria ascendería a más de 15.000 personas, frente a los 30.000 contabilizados por este centro en 2018.

Al igual que en años anteriores, el conflicto armado se libró en diversos frentes, cada uno con sus dinámicas y actores preeminentes. En términos generales, sin embargo, **al finalizar el año el régimen sirio con la ayuda de Rusia lograba el control de un 71% del territorio, según SOHR. Las zonas de operaciones más activas durante 2019 se concentraron en el norte, tanto en la banda noroeste como en la noreste.** En el frente noroccidental, pese al acuerdo entre Rusia y Turquía en septiembre de 2018 para establecer un área desmilitarizada en Idlib, durante 2019 la zona fue escenario de cruentos enfrentamientos principalmente entre fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia y grupos armados liderados por la organización de línea yihadista Hayat Tahir al-Sham (HTS) que no cesaron sus ataques al régimen. La dura campaña aérea y terrestre del Gobierno para derrotar y expulsar de esta región a HTS y grupos afines tuvo graves impactos en la población debido a la destrucción de infraestructuras esenciales –hospitales, escuelas, recursos agrícolas– y motivó denuncias de la ONU por la muerte de un gran número de civiles

–solo en mayo murieron más de 300–, el uso de armas como el gas cloro y los desplazamientos forzados de población. Hasta septiembre, medio millón de personas había huido a causa de la violencia. Las hostilidades en este frente también afectaron a otras zonas, como Aleppo, Latakia o Hama. A mediados de año se produjo una contraofensiva de HTS y de otros grupos opositores como NTS, con el apoyo de Turquía, mientras que Hezbollah se involucró en los enfrentamientos en apoyo al régimen sirio, a pesar de que había anunciado una reducción de su presencia en Siria. En este contexto, Ankara denunció el ataque a un convoy militar turco como una violación al acuerdo de Sochi alcanzado en 2018. Rusia y China, en tanto, vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía establecer un cese el fuego en Idlib. Moscú justificó la decisión argumentando que la resolución no establecía una excepción para las operaciones militares contra grupos armados designados como terroristas por la ONU. **Así, al finalizar 2019 Moscú y el régimen intensificaron**

En 2019 Siria continuó siendo escenario de elevados niveles de violencia, en el marco de un conflicto caracterizado por la participación de numerosos actores armados, una gran influencia de actores regionales e internacionales y gravísimos impactos en la población civil

la ofensiva en Idlib provocando el desplazamiento forzado de unos 235.000 civiles en un período de dos semanas. Cabe destacar que EEUU también se involucró en esta área, al declarar como grupo terrorista a la filial de al-Qaeda presente en el territorio -Hurras al-Din– y también a través de una operación militar, en octubre, que causó la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder fundador de ISIS y promotor del califato del grupo en Iraq y Siria anunciado en Mosul (Iraq) en 2014. ISIS confirmó la muerte de su máximo dirigente y anunció el nombramiento de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi como su sucesor.

En el frente nororiental las dinámicas variaron entre el primer y el segundo semestre. La primera mitad del año estuvo marcada por las operaciones de la coalición Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), liderada por fuerzas kurdas y con apoyo de EEUU, con la intención de erradicar las últimas posiciones de ISIS en la zona fronteriza con Iraq. Las hostilidades tuvieron entre

sus epicentros Deir al-Zawr y la localidad de Baghouz, bastión de ISIS. **Aunque las SDF anunciaron la eliminación total de ISIS en Siria en marzo, el grupo armado continuó reivindicando ataques en los meses siguientes,** en especial en las áreas de Hasaka y Qamishli. En la zona noroeste también se registraron episodios de contestación de poblaciones árabes contra las SDF. Paralelamente, Turquía continuó insistiendo en su propósito de crear un área de seguridad en el norte de Siria, reivindicando el acuerdo de Adana de 1998 entre Turquía y Siria.³⁷ Turquía y EEUU iniciaron patrullajes conjuntos en esta área, motivando la protesta del régimen de al-Assad. Sin embargo, la situación dio un giro en octubre, cuando el Gobierno de

Donald Trump decidió retirar sus tropas del noreste de Siria. La decisión fue interpretada como una traición de Washington a las fuerzas kurdas del YPG, que hasta entonces habían sido clave en el combate contra ISIS. Ante el repliegue de EEUU, Turquía inició una intensa ofensiva aérea y terrestre en la zona contra las fuerzas kurdas, en el marco de una operación que denominó “Primavera de paz”. La intensificación de la violencia en la zona tuvo graves impactos en la población civil. Las SDF acordaron con el régimen sirio un despliegue limitado en la zona para repeler la ofensiva turca. Las fuerzas de Ankara asumieron el control de una franja de 140 kilómetros entre Tel Abyad y Ras al-Ayn y dieron un ultimátum a las YPG para que se replegaran. Conversaciones entre EEUU y Turquía y entre Rusia y Turquía derivaron en ceses el fuego frágiles y en la puesta en marcha de patrullas conjuntas en la “zona de seguridad” supervisada ahora por Turquía y Rusia, que amplió su presencia en el noreste de Siria. EEUU, en tanto, anunció que mantendría tropas en Siria para

37. Véase el resumen sobre el proceso de paz en Siria en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2020.

proteger los campos petrolíferos controlados por las SDF. Hasta finales de año Turquía y las SDF se acusaban de vulneraciones al acuerdo, mientras organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch alertaban sobre abusos y crímenes contra la población local, de mayoría kurda. Paralelamente, **se denunciaron los planes de Turquía para repatriar a hasta dos millones de personas refugiadas sirias, en su mayoría árabes, a esta supuesta “zona de seguridad”, alterando así las realidades demográficas en la zona.**³⁸

Junto a las dinámicas en estos frentes, cabe considerar que a lo largo del año se produjeron múltiples incidentes de violencia en territorio sirio que involucraron a fuerzas israelíes, que atacaron presuntas posiciones de Hezbollah y de Irán principalmente en el sur, en los Altos del Golán, pero también en otras zonas, incluyendo Hama o Aleppo. Los enfrentamientos entre estos actores –influidos por las dinámicas de tensión regional– provocaron la muerte de un centenar de personas durante 2019.³⁹ Adicionalmente, la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó que en las zonas controladas por el Gobierno sirio se produjeron arrestos arbitrarios y torturas de civiles, incluyendo personas recientemente retornadas al país. En el sur la Policía secreta llevó a cabo numerosas detenciones de antiguos dirigentes opositores. La comisión también denunció que, en zonas como Duma, Deraa o Ghoutah –que fueron bastiones de la oposición–, la inefectiva provisión de servicios estaba privando a cientos de miles de personas de acceso adecuado a agua, electricidad o educación. Asimismo, la comisión llamó la atención sobre las condiciones de vida extremas en el campo de Al-Hol, en el que malvivían unas 70.000 personas, en su mayoría mujeres y menores de 12 años.⁴⁰ Entre ellos, familiares de combatientes de ISIS que huyeron de los bombardeos contra Baghouz. Asimismo, se denunciaron secuestros, torturas y detenciones de disidentes en las zonas controladas por

HTS. Ante la magnitud de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros, destrucción de infraestructuras y falta de servicios en el país, la comisión insistió en que no existían las condiciones para un retorno sostenible de las personas refugiadas y desplazadas internamente.

Cabe destacar que las dinámicas de violencia durante 2019 provocaron nuevos desplazamientos de población civil y que al finalizar el año Siria continuaba a la cabeza entre los países con mayor población desplazada forzosamente del mundo, tanto internamente como fuera de sus fronteras. Según los datos de ACNUR, el 90% de la población refugiada siria vivía en los países vecinos y el 50% eran menores de edad. En esta línea, la Comisión de Investigación sobre Siria también destacó los efectos del desplazamiento forzado en niños y niñas. Entre ellos, el trabajo infantil, el reclutamiento de menores y el matrimonio infantil. La comisión también subrayó los efectos desde una perspectiva de género. Ejemplo de ello son las mujeres obligadas a parir en sitios inadecuados y sin la necesaria asistencia prenatal ni postnatal dada la severa destrucción de infraestructuras hospitalarias o los problemas que enfrentan las mujeres sirias para probar y documentar las muertes de sus familiares –dificultando trámites de herencia o custodia– o registrar a sus hijos e hijas – dado que en Siria la nacionalidad se transmite por vía patrilineal. En un conflicto donde la violencia sexual ha tenido un rol prominente, la comisión informó de investigaciones sobre abusos y violaciones a mujeres, hombres y personas LGTBI, incluyendo personas retornadas, en las zonas controladas por el Gobierno. Al finalizar el año, **la Syrian Network for Human Rights (SNHR) destacó que la población siria era la que más había padecido ataques con armas químicas en la última década. Según sus datos, un total de 1.472 personas habían muerto y 9.989 habían resultado heridas en 222 ataques químicos, 217 de los cuales perpetrados por el régimen sirio.**

38. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

39. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

40. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).